



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO

**LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA APLICADA EN EL SERVICIO DE
GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO
A UN MEDIO AMBIENTE SANO**

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA

AUTORA

SANDRA CLEOFÉ MENACHO RODRÍGUEZ

ASESOR

DR.ALEX EDGARDO HUERTAS CARDENAS

LINEA DE INVESTIGACIÓN

DERECHO AMBIENTAL

TRUJILLO- PERÚ

2018

PÁGINA DEL JURADO



.....
PRESIDENTE
JHON MATTIENZO MENDOZA



.....
SECRETARIO
GIULIANA K. TIRADO GARCIA



.....
VOCAL
ALEX EDGARDO HUERTAS CARDENAS

DEDICATORIA

A Dios Todo Poderoso por darme el apoyo incondicional en todo momento, acompañarme en cada instante de mi vida y por enseñarme que cada día vivido es una nueva oportunidad de seguir adelante, que los obstáculos no son más que retos para probar la fortaleza y la sabiduría del ser humano.

A mis padres y hermanos por prestarme apoyo en todo momento, fortaleza, darme tanta felicidad, enseñarme a no rendirme ante cada problema y que la unión familiar es un elemento fundamental para el desarrollo integral del ser humano.

A Matías Benjamin y Luciana Belén por ser el motivo de tanta dicha y felicidad en mi vida.

AGRADECIMIENTO

La presente tesis es un reflejo de un trabajo elaborado con dedicación y esfuerzo, por lo que debo agradecer a aquellas personas que influyeron en su elaboración.

A mis docentes tanto del campus universitario así como mis jefes de prácticas pre profesionales y laborales; quienes me orientaron en el desarrollo del presente trabajo de investigación.

A mis padres y hermanos quienes a pesar de las adversidades siempre me prestaron apoyo y me motivaron a desarrollar la presente investigación,

La Autora.

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD


SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:

Yo, Sandra Cleofé Menacho Rodríguez, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad César vallejo, a efecto de cumplir con los criterios de evaluación, ante Uds. con respeto me presento y digo:

Que, mediante lo dispuesto por esta digna casa de estudios he respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no es copia, es única y autentica.

Asimismo, declaro bajo juramento que toda la información en ella contenida, producto de la consulta a varios autores expertos en la materia de estudio, por tanto concluyo que la información es auténtica y veraz.

Trujillo, Julio de 2018



SANDRA CLEOFÉ MENACHO RODRÍGUEZ

DNI N° 78286122

PRESENTACIÓN

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:

Cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Privada Cesar Vallejo, Facultad de Derecho, Escuela de Escuela de Pre Grado de la Universidad César Vallejo, me es grato presentar a vuestra consideración el presente trabajo de investigación (Tesis) titulado “LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA APLICADA EN EL SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO”, con el fin de obtener el título profesional de Abogada.

El desarrollo del presente trabajo de investigación lo he realizado teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en la Universidad Cesar Vallejo, los lineamientos propuestos para la elaboración de tesis, consultas a diversos autores sobre la materia y se complementó con la investigación de campo.

Es propicia la oportunidad para ser extenso mi más profundo agradecimiento a ustedes miembros del jurado y a todos los señores docentes de la facultad de Derecho, por todos los conocimientos y experiencias impartidas hacia mi persona que han contribuido a mi formación profesional.

La Autora

ÍNDICE

PÁGINA DEL JURADO	ii
DEDICATORIA	iii
AGRADECIMIENTO.....	iv
DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD.....	v
PRESENTACIÓN.....	vi
RESUMEN.....	ix
ABSTRACT.....	x
I. INTRODUCCIÓN	11
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA	11
1.2. TRABAJOS PREVIOS	12
A. A NIVEL NACIONAL	12
B. A NIVEL LOCAL.....	13
1.3. TEORÍAS Y PRINCIPIOS QUE SE RELACIONAN.....	13
A. TEORÍAS CON RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PUBLICA	13
1.4. PRINCIPIOS RECTORES QUE RIGEN EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN	14
1.5. DERECHO COMPARADO	15
A. ESPAÑA	15
B. COLOMBIA	16
1.6. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.....	17
II. MARCO TEÓRICO.....	18
CAPITULO I: PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y EL DERECHO FUNDAMENTAL DE VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE SANO	18
1.1. CONNOTACIÓN DE “AMBIENTE” SEGÚN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y EL SISTEMA LEGAL PERUANO	19
1.2. CONNOTACIÓN DE “MEDIOAMBIENTE” Y “AMBIENTE” EN NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1993.....	20
1.3. CONNOTACIÓN DE “AMBIENTE” EN LA LEY GENERAL DEL AMBIENTE.	20
1.4. CONNOTACIÓN DE “MEDIOAMBIENTE” EN EL PENSAMIENTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.....	23
1.5. LA OBLIGACIÓN JURÍDICA ESTATAL DE PROTEGER EL DERECHO AL VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO Y EQUILIBRADO	26
CAPÍTULO II: GESTIÓN AMBIENTAL PERUANA	29
2.1. ELEMENTOS	29
2.2. COMPONENTES BÁSICOS DE GESTIÓN PÚBLICA AMBIENTAL.....	30

2.3. CARACTERÍSTICAS CENTRALES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL PERÚ.....	33
2.5. ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL.....	36
2.5.3. SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	41
2.5.4. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	42
2.6. GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL	43
CAPITULO III: RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA EN EL PERÚ	53
4. HIPOTESIS	56
5. OBJETIVOS	56
5.1. GENERAL. –	56
III. MÉTODO.....	57
3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN	57
3.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN	57
- VARIABLE INDEPENDIENTE	57
- VARIABLE DEPENDIENTE	57
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA	57
3.4. TÉCNICAS	58
3.5. INSTRUMENTOS	58
IV. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	59
4.1. FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL	59
4.2. CUADRO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ENTREVISTA	116
- ENTREVISTA A ESPECIALISTAS EN MATERIA AMBIENTAL.....	116
- ENTREVISTA A LOS RESPONSABLES DE LAS OFICINAS ENCARGADAS EN MATERIA AMBIENTAL EN EL SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO (SEGAT).....	117
4.3. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS	117
III. DISCUSIÓN DE RESULTADOS	136
IV. CONCLUSIONES	140
V. RECOMENDACIONES	142
VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	
ANEXOS.....	
A. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.....	
B. PLAN DE CONSISTENCIA	

RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo analizar que, la incorporación de la responsabilidad social pública aplicada en el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo mejora la protección al derecho a un medio ambiente sano; por ello; para la consecución de dicho objetivo, se eligió a profesionales entendidos respecto a la línea de investigación del presente trabajo de estudio, por lo que, se procedió a entrevistar a 06 responsables de las Gerencias Operacionales que conforman el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo de conformidad con su Manual de Organización y Funciones, 02 docentes con grado de maestría y Doctorado especialista en Derecho Ambiental; así como 02 Fiscales Provinciales especializados en materia ambiental cuya judicatura es ejercida en el Distrito de Trujillo, los cuales fueron entrevistados para corroborar la hipótesis planteada.

Cabe resaltar que es una tesis motivada en analizar y explicar la mejora del derecho a un medio ambiente sano por la aplicación de la responsabilidad social pública en los organismos ambientales municipales, por lo que, denotando la realidad problemática actual se escogió al Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo.

El recojo de la información se realizó mediante la técnica de la documentación y la entrevista, los cuales se aplicaron sus respectivos instrumentos; cuyos resultados fueron organizados mediante una ficha de análisis.

Para la discusión de los resultados se utilizó el método descriptivo- analítico, con la finalidad de inferir las conclusiones; siendo la del presente trabajo de investigación que la responsabilidad social pública aplicada en el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo si mejora la protección del derecho a un medio ambiente sano debido a que permite aplicar de manera correcta los instrumentos ambientales como el SINAPLAN, SEIA, PIGARS y el CEPLAN para la evaluación del impacto ambiental conllevando al cumplimiento eficiente de las metas ambientales proyectadas por su enfoque estratégico y sustentable; siendo en ese sentido, verificada la hipótesis planteada.

Palabras clave: Responsabilidad Social Pública, Derecho a un medio Ambiente Sano, Sostenibilidad Ambiental, Impacto Ambiental, Metas Ambientales.

ABSTRACT

The objective of this research is to analyze that, the incorporation of the public social responsibility applied in the Environmental Management Service of Trujillo improves the protection of the right to a healthy environment; thus; In order to achieve this objective, professionals were chosen who were knowledgeable about the research line of this study, so, we interviewed 06 heads of the Operational Managements that make up the Environmental Management Service of Trujillo in accordance with its Organization and Functions Manual, 02 teachers with a master's degree and a Doctorate specializing in Environmental Law; as well as 02 Provincial Attorneys specializing in environmental matters whose judiciary is exercised in the District of Trujillo, who were interviewed to corroborate the proposed hypothesis.

It should be noted that it is a thesis motivated to analyze and explain the improvement of the right to a healthy environment through the application of public social responsibility in municipal environmental organizations, so that, denoting the current problematic reality, the Environmental Management Service was chosen of Trujillo.

The information was collected using the documentation and interview technique, which applied their respective instruments; whose results were organized by means of an analysis sheet.

For the discussion of the results, the descriptive-analytical method was used, in order to infer the conclusions; being the one of the present investigation work that the public social responsibility applied in the Service of Environmental Management of Trujillo if it improves the protection of the right to a healthy environment because it allows to apply of correct way the environmental instruments as the SINAPLAN, SEIA, PIGARS and CEPLAN for the evaluation of the environmental impact leading to the efficient fulfillment of the environmental goals projected by its strategic and sustainable approach; being in that sense, verified the hypothesis.

Keywords: Public Social Responsibility, Right to a Healthy Environment, Environmental Sustainability, Environmental Impact, Environmental Goals.

I. INTRODUCCIÓN

1.1.REALIDAD PROBLEMÁTICA

El Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, en adelante SEGAT, es una institución destinada a la gestión ambiental sostenible reconocida en el ámbito nacional e internacional que contribuye a mejorar la calidad de vida de la población Trujillana.

Por lo que, en consideración de la atribución que ostenta la ciudad de Trujillo como ciudad principal de tipo “A”, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, por ser una ciudad que supera la masa poblacional del millón de ciudadanos y porque abarca una problemática ambiental y en todos sus sectores productivos de mayor rigor que exige la aplicación de políticas retributivas y preventivas del daño ambiental; es que, se advirtió que, en el Ejercicio Fiscal 2017 y 2018, por ser los periodos de elaboración del trabajo de investigación, se estableció el Decreto Supremo N°394-2016-EF que estableció directivas para la efectivización de la Administración Ambiental en el Perú dependiendo su masa poblacional precisando indicadores y una política de incentivos a través del cumplimiento de metas que, en el caso del SEGAT se enfocan en el cumplimiento de un 15% en cuanto a las metas 17 y 25 que le son competentes relacionadas a la gestión y recolección de los residuos sólidos, las mismas que, serán informadas al Ministerio del Ambiente en los meses de Julio y Diciembre de cada Ejercicio Anual a fin de que, se verifique su eficiencia y otorgar un bono de compensación; no obstante, esta política de incentivos afianza la aplicación de medidas de carácter mitigador del daño ambiental generando la prolongación del daño ambiental; toda vez que, promueve acciones de corto plazo que, den resultados efectivos siendo evaluados de manera cuantificable los resultados conllevando que, se suscite un contraste con la realidad como es el caso de la ciudad de Trujillo, y siendo complementados por las Resoluciones Directorales N° 004-2018-EF y N°008-2018-EF que , en el mismo sentido afianzan la ejecución de metas a corto plazo que resultan ser incompatibles con el Ejercicio Sustentable de los instrumentos Ambientales que direccionan la Administración Ambiental en todas sus dimensiones; es así que, en virtud de la situación antes descrita es que, se propone la aplicación del mecanismo jurídico ambiental como la Responsabilidad Social Publica en el SEGAT por revestir las condiciones necesarias siendo la esencial la dotación de una autonomía política, administrativa presupuestaria y financiera.

1.2. TRABAJOS PREVIOS

En las averiguaciones llevadas a cabo en universidades nacionales e internacionales, se determinó que respecto a la materia de estudio que se realiza en la presente investigación, no existen trabajos previos, sin embargo, se encontraron similitudes como las siguientes investigaciones:

A. A NIVEL NACIONAL

Zapata, L. (2012). *APROXIMACIÓN A UNA LEGISLACIÓN NACIONAL EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PARA LA EMISIÓN DE REPORTES DE SOSTENIBILIDAD. Tesis para obtener el grado de magíster. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ. LIMA, PERÚ.*

El autor concluye que, con el avance de las inversiones y la economía, surge la necesidad de que las empresas rindan cuentas de sus actividades sociales, puesto que estas empiezan a darles beneficios a nivel corporativo; por lo que debe comunicar el nivel de compromiso de la compañía respecto de su Responsabilidad Social Empresarial, demostrar cómo la ha incorporado a su visión de negocios, y explicar de qué manera está impactando su resultado final.

Flores, D. (2017). *LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EL PERÚ Y SU INFLUENCIA EN LOS PROCESOS DE INVERSIÓN, CASO DE LA INICIATIVA GLOBAL DEL REPORTE DE SOSTENIBILIDAD. Tesis para obtener el título profesional de derecho. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Cusco, Perú.*

El autor concluye que la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es una forma de gestión empresarial que cada día gana más adherentes, y busca el compromiso del sector empresarial los que ha permitido desarrollar los procesos de la presente investigación dentro de un marco de visión sostenible, a través de los cuales se ha podido arribar a resultados concretos respecto del objeto de estudio.

Escudero, H. (2016). *Gestión del servicio de Sedapal y la responsabilidad social - zona sur de lima – 2016. Tesis para optar el grado académico de Maestro en gestión pública. Universidad César Vallejo. Lima, Perú.*

Las conclusiones de la investigación están en línea con otros estudios de gestión del servicio, en los cuales también se ha destacado una clara importancia de los aspectos del servicio asociados a la conducta de los empleados de la organización. Por otra parte, se puede destacar que SEDAPAL, da poca importancia a la gestión del servicio asociada a la conducta de las personas que trabajan en ella. Es valorado por los usuarios con un rango bajo moderado.

B. A NIVEL LOCAL

López, J. (2012). PROBLEMÁTICA Y PROPUESTA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE LAREDO, TRUJILLO, PERÚ. Artículo Científico “REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGÍA” de la Universidad Nacional de Trujillo, Escuela de Post Grado. Trujillo, Perú.

El autor concluye que para mejorar la calidad de vida del poblador de la ciudad de Laredo, se debe desarrollar el sistema de Gestión Ambiental Municipal con la implementación del Organismo de Administración Ambiental Municipal (OAAM); así mismo se debe convocar la Participación Ciudadana dentro del contexto del Desarrollo Sustentable, por el cual nos permita abastecer nuestras necesidades actuales, sin perjudicar los componentes ambientales y mejorar las mismas para las generaciones futuras. Para ello; el Ordenamiento Jurídico, con la Normatividad Nacional y Local vigente, con participación activa de la ciudadanía, autoridades y todas las entidades productivas y de servicios.

1.3. TEORÍAS Y PRINCIPIOS QUE SE RELACIONAN

A. TEORÍAS CON RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PUBLICA

Al respecto; se consideran estas teorías como pautas importantes que dan consistencia al planteamiento del presente trabajo de investigación:

- TEORIA DE LA IMPLEMENTACION

Según Lorenzetti, R. (2009) esta teoría se fundamenta en el interés del Derecho ambiental para poder lograr la eficacia, eficiencia, ejecución y de aplicación efectiva de la norma ambiental; mediante criterios de aplicación extensiva que se adecuen a todos los contextos que pudiesen acontecer o mejor dicho una regulación continua.

Puesto que uno de los aspectos que aborda la problemática ambiental en la lograr un equilibrio en los sistemas de regulación ambiental y ecológico; para ello demanda una regulación del cumplimiento; la misma que debe recoger los aspectos integrados y vinculados a los tipos de normas que orienten la creación de una cultura de cumplimiento de la ley mediante reglas institucionales que deben orientar los lineamientos de las entidades públicas y privadas.

- LA TEORÍA INSTITUCIONAL

Hernandez, M. (1998), refiere que si la legitimidad procede de un sistema de valores sociales, reglas, creencias y definiciones en sintonía con la sociedad conlleva la conformidad con el sistema y responde a la aceptación social, es decir, en esta teoría para percibir como legítima a una organización, el modelo de estructuras, organizaciones y acciones que asume seguirá la prescripción de las normas y principios sociales. La perspectiva de la teoría institucional es más amplia que la teoría de la legitimación. En lugar de explorar directamente el sistema de defensa de la sociedad, contempla el patrón de las instituciones establecidas como representación simbólica del sistema de valores sociales.

Los grupos de interés y los motivos personales que se involucran dentro de la empresa, forman parte central de la discusión corporativa. No se atiende a las necesidades dispersas o individuales, sino agrupadas y determinadas por las prioridades que al conjunto, institucionalmente, le resultan más convenientes y con resultados más generales.

Aquí hay que prestar atención a un amplio marco regulatorio ceñido a disposiciones obligatorias, institucionales y voluntarias que bajo el acuerdo de los participantes conformados institucionalmente deben observar y ratificar conforme al establecimiento de las directrices aplicables, en armonía con sus valores, costumbres, cultura e identidad social, es decir, las instituciones buscan establecer su legitimidad por la moralidad de su gobierno y la observancia de normas que deben ser sancionadas institucionalmente con la aceptación de valores culturales y sociales del deber ser.

1.4. PRINCIPIOS RECTORES QUE RIGEN EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Con respecto al planteamiento de la presente investigación es inevitable no considerar estos principios; puesto que son el soporte y los lineamientos principales del modelo ético-estratégico de la responsabilidad social empresarial en sentido estricto que se pretende proponer:

- **PRINCIPIO DE LA INTERNALIZACION DE LOS COSTOS AMBIENTALES**

Según Cafferata, N. (2002) mediante este principio; los efectos de la externalidad deben ser atribuidas a quien las generó y del cual debe categorizarse y asumir una categoría reprochando la conducta del agente causante del daño dentro del sistema de precios; cuya categoría va a ser diferente por la naturaleza del bien (público o privado).

Cuya diferencia radica en la agotabilidad (rivalidad) y la exclusividad; categorías que toman la disponibilidad del bien para los otros individuos.

- **PRINCIPIO PRECAUTORIO**

Caferatta, N (2002); señala que la precaución trata de hallar la raíz del daño de modo integral y total; para ello este principio permite implementar instrumentos o políticas que tratan de retribuir el daño y prevenir mayores problemas a futuro.

- **DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION EN MATERIA AMBIENTAL**

Señala Vargas, C. (2016) que el derecho a información toma como elementos esenciales a la igualdad y justicia el sentido de orientación y poner en conocimiento a la sociedad y agentes de manera directa y precisa sobre los alcances y efectos que pudieran afectarlos en su desarrollo integral.

Por lo que el autor señala que el Estado debe tener una intervención directa ante conductas ilegales y vulneradoras de garantías jurídico - constitucionales.

- **PRINCIPIO DE GOBERNANZA AMBIENTAL**

Marcfarland,C. (2005); manifiesta que la gobernabilidad se puede definir como la interacción entre las estructuras, los procesos y las tradiciones que determina como se debe

ejercer el poder, como se adoptan las decisiones y cómo participan los ciudadanos y sectores involucrados.

El objetivo de este principio es hacer posible la participación efectiva e integrada de los actores públicos y privados en la toma de decisiones, manejo de conflictos y construcción de consensos, sobre la base de responsabilidades claramente definidas, seguridad jurídica y transparencia. En dicha labor contribuirá notablemente la búsqueda de complementariedad de los instrumentos de gestión ambiental, los instrumentos de incentivos y sanción de los diferentes sectores con competencias ambientales.

1.5.DERECHO COMPARADO

A. ESPAÑA

En España, podemos destacar, como iniciativa pionera la creación del Foro de Expertos de RSE dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2005), en lo que fue el germen del actual Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas –CERSE-. De forma reciente, las empresas públicas han comenzado a incorporar la RSE en sus estrategias: compras públicas responsables, informes de sostenibilidad, planes de RSE, etc., son algunas de las exigencias que ya se han regulado en algunos países europeos y que incorpora ahora al debate de las empresas públicas en España a través de la recientemente aprobada Ley de Economía Sostenible Ley 2/2011 de 4 de marzo. Según dicha Ley, las sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas empresariales adscritas a la Administración General del Estado deberán, entre otros:

- Presentar anualmente informes de gobierno corporativo, así como memorias de sostenibilidad.
- Revisar sus procesos de producción aplicando criterios de gestión ambiental.
- Favorecer la adopción de principios y prácticas de RSE en sus proveedores.
- Incluir en sus procesos de contratación criterios de sostenibilidad.
- Optimizar el consumo energético de sus sedes e instalaciones.
- Establecer un sistema de formación orientado a la cualificación y adaptación de los trabajadores a las nuevas tecnologías y a la cultura de la sostenibilidad.

Así mismo, los Departamentos u Organismos a los que se adscriban los grupos empresariales públicos elaborarán un plan de sostenibilidad.

En este contexto, y con el objetivo de realizar un diagnóstico de la situación actual de las empresas públicas españolas, el proyecto Acelerando la RSE en Empresas Públicas liderada por Garrigues Medio Ambiente, Adif y Forética con el apoyo de la Autoridad Portuaria de Valencia y EMASESA junto con grupo de Empresas Públicas y de Comunidades Autónomas, así como por la Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de

Trabajo e Inmigración, ha llevado a cabo una encuesta. Dicha encuesta se ha remitido a todas las empresas públicas de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las capitales de provincia y de las Diputaciones Provinciales.

B. COLOMBIA

El mayor avance que se ha hecho en materia de Responsabilidad Social como modelo de gestión ética en el Estado Colombiano, fue a través del Programa Eficiencia y Rendición de Cuentas en Colombia de la Agencia de los Estados Unidos Para el Desarrollo Internacional (USAID) que fue financiado por el gobierno de los Estados Unidos de América, donde se realizó un Modelo de Gestión Ética, el cual se constituye en una importante herramienta para gestionar el fortalecimiento de la ética pública en el ejercicio de la función administrativa.

A través de éste, se establecieron metodologías, procedimientos e instrumentos orientados a complementar y facilitar el diseño, desarrollo e implantación en la cultura organizacional de las entidades públicas, del Elemento de Control “Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos” del Modelo Estándar de Control Interno –MECI- adoptados por el Gobierno de Colombia mediante el Decreto No. 1599 de 2005. (Ospina, M. Pérez, T. 2006)

El nacimiento del gobierno corporativo se da en la década de los setenta y los noventa en la literatura anglosajona del sector privado, donde se plantea la necesidad de una mejor organización y control de las grandes entidades, a través de dos aspectos:

El primer objetivo fue la necesidad de recuperar la confianza perdida, que se generó por el acontecimiento de una serie de escándalos corporativos en la década de los noventa, tanto en Europa como en América. En segundo lugar su propósito fue el control sobre los altos directivos, a través de la separación funcional entre la propiedad y el control, este asunto ha sido denominado como el problema de agencia, para así lograr una óptima realización de las tareas de la organización, como del bienestar para sus propietarios. (Ospina, M. Pérez, T. 2006) De esta manera, vemos cómo el gobierno corporativo nace de la necesidad de regular una situación de poder y de control. Éste es en definitiva el mismo concepto que se aplica a las entidades públicas.

1.6.JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Se justifica a nivel TEORICO porque la presente investigación genera un aporte jurídico en el campo del derecho ambiental en base a los criterios de sostenibilidad en el ejercicio de la gestión ambiental municipal vigente para la aplicación de un nuevo enfoque de Responsabilidad Social Empresarial a fin de tutelar un derecho constitucionalmente protegido como lo es el derecho a un medio ambiente sano.

A nivel METODOLÓGICO porque promueve la investigación a través de metodologías como la entrevista y análisis jurisprudencial que sustenten la importancia de tutelar la sostenibilidad ambiental y su objeto jurídicamente protegido como es el derecho a un medio ambiente sano.

A nivel PRÁCTICO pues los resultados permitirán conocer y entender la variable en estudio permitiendo así, realizar una adecuada normatividad jurídica acorde a nuestra realidad sociocultural y al avance científico.

1.7. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿COMO LA INCORPORACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA APLICADA EN EL SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO MEJORA LA PROTECCIÓN AL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO?

II. MARCO TEÓRICO

CAPITULO I: PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y EL DERECHO FUNDAMENTAL DE VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE SANO

En su primera manifestación, esto es, el derecho de gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, otorga la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso de que el hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. Esto implicaría, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1 de la Constitución), caso contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de contenido. Pero también el derecho en análisis se concretiza en el derecho a que el medio ambiente se preserve.

El derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles, para los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute (Lastres, E. 1993). Dicha obligación alcanza también a los particulares, y con mayor razón a aquellos cuyas actividades económicas inciden, directa o indirectamente, en el medio ambiente, ello vincula directamente al Estado por las obligaciones impuestas tanto a los particulares como al Estado, destinadas al cuidado y preservación del ambiente, no sólo pretenden conservar el ambiente para el goce inmediato de la ciudadanía, sino que este cuidado se extiende a la protección del disfrute de las generaciones futuras, fundamento del concepto de desarrollo sostenible. Por lo tanto, en estos casos se asume un compromiso de justicia no solo para los ciudadanos que hoy deben aplicar las técnicas de explotación e industria que causen el menor impacto posible al ecosistema, sino también para las futuras generaciones. Es por ello, que respecto a la relación existente entre la producción económica y el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, este Colegiado ha indicado que deben observarse ciertos principios que garantizan la protección del derecho materia de evaluación

En ese orden de ideas, Carhuatocto, H. (2009) precisa que el vínculo existente entre la producción económica y el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida se enfoca materialmente en los siguientes principios:

- a) El principio de desarrollo sostenible o sustentable
- b) El principio de conservación, en cuyo mérito se busca mantener en estado óptimo los bienes ambientales.
- c) El principio de prevención, que supone resguardar los bienes ambientales de cualquier peligro que pueda afectar su existencia.
- d) El principio de restauración, referido al saneamiento y recuperación de los bienes ambientales deteriorados.
- e) El principio de mejora, en cuya virtud se busca maximizar los beneficios de los bienes ambientales en pro del disfrute humano.
- f) El principio precautorio, que comporta adoptar medidas de cautela y reserva cuando exista incertidumbre científica e indicios de amenaza sobre la real dimensión de los efectos de las actividades humanas sobre el ambiente.
- g) El principio de compensación, que implica la creación de mecanismos de reparación por la explotación de los recursos no renovables.

Por lo que; el principio de prevención como defensa del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida; contempla fundamentalmente el principio de la prevención, entendiéndose que la protección ambiental no se limita a la restauración de daños existentes ni a la defensa contra los peligros inminentes, sino a la eliminación de posibles daños ambientales, promoviendo que se garanticen mediante la toma de medidas necesarias a fin de evitar que los daños al ambiente se generen o que, en caso se llegue a producir, la afectación sea mínima.

1.1. CONNOTACIÓN DE “AMBIENTE” SEGÚN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y EL SISTEMA LEGAL PERUANO

Nuestro marco normativo precisa que el concepto de medioambiente es constitucionalmente un concepto jurídico indeterminado, en razón, de que las Constituciones de 1979 y 1993 no desarrollan un concepto de medioambiente, sino solo lo mencionan. En el ámbito legal, este concepto se incorpora recientemente en la Ley General del Ambiente. Sin embargo, está desarrollado de manera confusa; puesto que según la doctrina tiene dos vertientes muy definidas; la primera, vinculada a una concepción estricta y la segunda, a una concepción

amplia. Ambas tendencias resultan de importancia para la evolución del concepto, como fundamento indispensable para lograr la protección ambiental.

La Madrid, A(2000) señala el detalle de los elementos que cada postura integra en su concepción se puede identificar de la siguiente manera:

TEORÍA MUY ESTRICTA: Elementos naturales: agua y aire.

TEORÍA ESTRICTA: Elementos naturales: agua, aire y suelo.

TEORÍA AMPLIA: Elementos naturales y culturales, urbanas y sociales: agua, aire, suelo, subsuelo, paisaje, flora, fauna, patrimonio histórico artístico, monumentos, centros históricos, ordenación del territorio, relaciones de intercambio entre sociedad y naturaleza.

1.2. CONNOTACIÓN DE “MEDIOAMBIENTE” Y “AMBIENTE” EN NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1993

La Constitución Política de 1993 menciona genéricamente sobre la protección ambiental, puesto que incorpora restringidamente al derecho de habitar en un ambiente saludable, desde una perspectiva limitada a los derechos de la persona y del tenor del mismo, es reconocible que se limita a los recursos naturales (teoría amplia), tal como se puede evidenciar del numeral 22, del artículo 2, que a la letra dice lo siguiente:

Artículo 2º: TODA PERSONA TIENE DERECHO:

22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

De dicha norma constitucional fluye con claridad que solo se menciona el derecho y el deber ambiental de todo ciudadano, con relación a habitar en un medioambiente adecuado, sin embargo, NO se define en que consiste el medioambiente o que elementos lo integran.

Del mismo modo, se puede mencionar que en ambos casos se puede vincular a la teoría muy estricta.

1.3. CONNOTACIÓN DE “AMBIENTE” EN LA LEY GENERAL DEL AMBIENTE

En la Ley General del Ambiente se presentan los siguientes conceptos latos:

TITULO PRELIMINAR: DERECHOS Y PRINCIPIOS

Artículo I: Del derecho y deber fundamental

Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país.

TÍTULO I: POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE Y GESTIÓN AMBIENTAL

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES

ARTÍCULO 2: DEL ÁMBITO

Entiéndase, para los efectos de la presente ley, que toda mención hecha al “ambiente” o a “sus componentes” comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros.

ARTICULO 19: DE LA PLANIFICACIÓN Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

19.2° El ordenamiento territorial ambiental es un instrumento que forma parte de la política de ordenamiento territorial. Es un proceso técnico- político orientado a la definición de criterios e indicadores ambientales que condicionan la asignación de usos territoriales y la ocupación ordenada del territorio.

Artículo 69°: DE LA RELACIÓN ENTRE CULTURA Y AMBIENTE

La relación entre los seres humanos y el ambiente en el cual viven constituyen parte de la cultura de los pueblos. Las autoridades públicas alientan aquellas expresiones culturales que contribuyan a la conservación y protección del ambiente y desincentivan aquellas contrarias a tales fines.

ARTÍCULO 84º: DEL CONCEPTO

Se consideran recursos naturales a todos los componentes de la naturaleza, susceptibles de ser aprovechados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tengan un valor actual o potencial en el mercado, conforme lo dispone la ley.

Lo más importante de la Ley General del Ambiente, con relación al tema planteado, es que se logra desarrollar por primera vez el concepto de “ambiente”. Sin embargo, carece de claridad, puesto que resulta confuso conceptualizar como “ambiente” o a “sus componentes” a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico, sin antes haber explicado su contenido. De esta manera, otra vez se genera incertidumbre jurídica a nivel legal.

También se puede observar que las normas citadas se refieren a los demás elementos ambientales, como meros instrumentos de política ambiental. Por ejemplo, con relación al ordenamiento territorial ambiental, se sostiene que es solo un instrumento que forma parte de la política de ordenamiento territorial, más no se identifica como un elemento más del concepto de ambiente, como sí lo hace la teoría amplia de medioambiente.

Otro punto similar a lo anterior, que señala La Ley General del Ambiente, es el hecho que la relación entre los seres humanos y el ambiente en el cual viven; constituye parte de la cultura de los pueblos, por lo que las autoridades públicas alientan aquellas expresiones culturales que contribuyan a la conservación y protección del ambiente y desincentivan aquellas contrarias a tales fines; por lo cual, debe ser respetada la diversidad cultural frente a apetitos políticos y económicos que prefieran la explotación económica contraria a dichas culturas, avalados por autoridades desconocedoras de su responsabilidad de proteger el medioambiente en toda su amplitud.

Por último, se señala como concepto de “recursos naturales” a todos los componentes de la naturaleza, susceptibles de ser aprovechados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tengan un valor actual o potencial en el mercado, conforme lo dispone la Ley. Con esto se da una apertura de concesiones sobre la explotación de los recursos naturales. Sin embargo, habrá que esperar a las normas reglamentarias sectoriales, puesto que se puede ampliar para otros tipos de contratos, por lo que se espera que se diseñen sin menoscabo para el medioambiente.

En definitiva, se puede llegar a la conclusión que en la Ley General del Ambiente, se llega a determinar el concepto de medioambiente de forma muy confusa y lata.

1.4. CONNOTACIÓN DE “MEDIOAMBIENTE” EN EL PENSAMIENTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Tribunal Constitucional en sus pronunciamientos refiere que el concepto de “medioambiente”, se debe tener en consideración que las resoluciones emitidas por este se realizaron haciendo referencia al Código del Medio Ambiente ya derogado. Por lo tanto, no parecerá mención alguna sobre la Ley General del Ambiente.

Según la Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída sobre el Expediente N°0048-2004-PI-TC, publicada el 01 de Abril del 2005, en el Fundamento 17 se afirma: La Constitución Política de 1993 (artículo 2 Inciso 22) reafirma como fundamental el derecho de la persona (...) a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

Desde la perspectiva constitucional, y a efectos de su protección, se hace referencia, de modo general, al medioambiente como el lugar donde el hombre y los seres vivos se desenvuelven. En dicha definición se incluye (...) tanto el entorno globalmente considerado espacios culturales y recursos que forman parte de la naturaleza: aire, agua, suelo, flora, fauna; como el entorno urbano; además, el medioambiente, así entendido, implica las interrelaciones que entre ellos se producen: clima, paisaje, ecosistema, entre otros.

Por su parte, en el Fundamento 27 de la Sentencia mencionada, se agrega que:

El medioambiente se define como (...) el conjunto de elementos sociales, culturales, bióticos y abióticos que interactúa en un espacio y tiempo determinado;

lo cual podría graficarse como la sumatoria de la naturaleza y las manifestaciones humanas en un lugar y tiempo concretos.

En el mismo sentido, en el fundamento 30 de la referida Sentencia se sostiene que: “El Tribunal Constitucional considera que el medioambiente, entendido sistemáticamente como el conjunto de fenómenos naturales en que existen y se desarrollan los organismos humanos, encuentran en el comportamiento humano una forma de acción y de creación que condiciona el presente y el futuro de la comunidad humana”.

Ahora bien, de lo expuesto, se tiene que la Sentencia materia de comentario, al fundamentar el concepto de medioambiente, pone énfasis en autores que defienden la posición amplia y muy amplia. No obstante, cuando resuelve el caso concreto, lo hace tomando en consideración a la teoría muy estricta, limitando su análisis desde la perspectiva de los recursos naturales, notándose su falta de congruencia con su motivación, por ende con el resultado.

Resulta evidente cuando sostiene que el medioambiente debe ser entendido “sistemáticamente como el conjunto de fenómenos naturales en que existen y se desarrollan los organismos humanos, encuentra en el comportamiento humano una forma de acción y de creación que condiciona el presente y el futuro de la comunidad humana”. Concepto que dista mucho de las referencias citadas con anterioridad.

Ahora bien, en la Sentencia publicada el 05 de Setiembre del 2007, caso Nextel, Expediente N°4223-2006-PA/TC, el máximo revisor de la constitucionalidad ha manifestado en el Fundamento 18 lo siguiente:

En ese sentido, el Tribunal Constitucional considera que se debe iniciar el procedimiento administrativo sancionador correspondiente, contra la demandada por el incumplimiento de lo establecido en la Resolución Viceministerial aludida supra, en la medida que el Artículo 88 Inciso 5), del Decreto Supremo N°013-93-TCC, tipifica como infracción grave los cambios de emplazamiento o de las características técnicas de las estaciones radioeléctricas sin la correspondiente autorización.

Así mismo, en el Fundamento 25 enfatiza:

Esta responsabilidad estatal guarda relación con lo dispuesto en el artículo 2, Inciso 22 de la Constitución, que reconoce el derecho fundamental de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. En concordancia, el Artículo I del Título Preliminar del Código del Medio Ambiente prevé que “toda persona tiene el derecho irrenunciable a gozar de un ambiente equilibrado, saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y asimismo, a la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente (...). Le corresponde al Estado prevenir y controlar la contaminación ambiental.

Sin embargo, en el fundamento 35, ya en el momento de resolver, cambia de dirección al sostener:

Pero no siempre la prohibición absoluta de determinada actividad es la única vía para alcanzar determinado grado de protección, pues dependiendo del caso, el mismo puede ser alcanzado mediante la reducción de la exposición al riesgo, con el establecimiento de mayores controles y la imposición de ciertas limitaciones. En el presente caso, de los informes técnicos solicitados por este Tribunal se concluye que no existe riesgo de exposición radioeléctrica, por lo que una decisión en el sentido de ordenar el desmantelamiento de la antena de NEXTEL, sería una medida irrazonable y desproporcionada.

Lo vertido en esta Sentencia del Tribunal Constitucional, resulta incongruente con lo señalado en su motivación. Al igual que la sentencia anterior, el Tribunal Constitucional parte de una concepción amplia para luego ampararse en una concepción muy estricta. Al parecer, sin advertir el contenido del concepto.

De la Sentencia, resulta evidente que el mismo Tribunal sostiene que existió una infracción grave, incluso en su parte resolutive sostiene de seguro, invocando el principio precautorio, disponer la realización permanente de mediciones de la exposición radioeléctrica de la población, a fin de que se garantice la no afectación de los derechos fundamentales al medioambiente y a la salud de los demandantes, y remitir los actuados a la Dirección General de Gestión de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a fin de que proceda de conformidad con el Fundamento 18 de la referida sentencia.

Sin embargo, tal como concluye **Gonzales, O. (2005)**, en el presente caso, se debe aplicar el principio precautorio y se debió decidir para que se declare fundada la demanda, puesto que era evidente que se encontraba acreditado que la antena estaba dentro de un área residencial y relativamente cerca de centros de salud y educativos; la antena estaba construida muy próxima a viviendas; Nextel había construido una antena en una zona que no era apropiada de acuerdo a las normas de urbanización; y, la empresa, de acuerdo al punto anterior, no contaba con la debida autorización para la construcción de la antena. El análisis que realiza el magistrado Ojeda sí guarda relación con la concepción amplia del medioambiente, pues se está considerando los elementos sociales y el urbanismo de su concepto.

Sabemos que detrás de una sentencia constitucional se encuentra la historia de un caso largo y engorroso. La población puede tener la oportunidad de recibir estos fallos luego de un tortuoso y largo proceso. ¿Cómo puede ser recompensada esta lucha, si el mismo Tribunal Constitucional otorga esta arbitraria protección a las empresas en desmedro de la salud de los pobladores? ¿Qué motivación pueden tener los particulares para demandar estas severas agresiones al ambiente y la salud, si el mismo Tribunal Constitucional desalienta con sus fallos tal motivación?. Es de lo antes expuesto que se precise que, en nuestro país, el ambiente saludable se encuentre protegido tan solo a nivel normativo y declarativo: muy pocas veces en lo práctico, defraudando el sentido de tener acceso a una tutela ambiental integral y proporcionada.

1.5. LA OBLIGACIÓN JURÍDICA ESTATAL DE PROTEGER EL DERECHO AL VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO Y EQUILIBRADO

El artículo 2 de la Constitución reconoce el derecho de toda persona a "gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida". Asimismo, el artículo 11 del Protocolo de San Salvador (Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual el Perú es signatario) precisa que "toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos", añadiendo que "los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente". Asimismo, el artículo 44 de la Constitución hace hincapié en que son deberes del Estado, no solo "garantizar la plena vigencia de los derechos humanos", sino "promover el bienestar general que se fundamenta en la

justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación". Estas normas deben ser interpretadas en consonancia con el artículo 1 de la Constitución, que precisa que "la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado".

La existencia digna de la persona humana exige como presupuesto material necesario un medio natural adecuado al logro del pleno desarrollo como sujeto con una dignidad que es. Como precisa el Tribunal Constitucional, "en el Estado Democrático de Derecho de nuestro tiempo ya no solo se trata de garantizar la existencia de la persona o cualquiera de los demás derechos que en su condición de ser humano le son reconocidos, sino también de protegerla de los ataques al medio ambiente en el que esa existencia se desenvuelve, a fin de permitir que su vida se desarrolle en condiciones ambientales aceptables" (STC Exp. N° 00964-2002-AAyTC, f. j . 9).

En relación con la justificación de este derecho, el TC ha optado por "considerar al medio ambiente equilibrado y adecuado, como un componente esencial para el pleno disfrute de otros derechos igualmente fundamentales reconocidos por la Norma Suprema y los tratados internacionales en materia de derechos humanos" (STC Exp. N° 00964-2002-AA/rC, f. j . 8). Para este Tribunal, en el medio ambiente "se encuentra el conjunto de bases naturales de la vida y su calidad, lo que comprende, a su vez, los componentes bióticos, como la flora y la fauna, y los abióticos, como el agua, el aire o el subsuelo, los ecosistemas e, incluso, la ecósfera, esto es, la suma de todos los ecosistemas, que son las comunidades de especies que forman una red de interacciones de orden biológico, físico y químico" (STC Exp. N° 00964-2002-AArrC, f j . 8).

Por lo antes mencionado, este derecho constitucionalmente protegido genera una serie de obligaciones que el Estado se encuentra obligado a cumplir por su obligación fundamental de tutela de derechos; es así que la obligación del Estado de preservar el medio ambiente supone dos obligaciones: la primera, abstenerse de adoptar acciones que afecten el medio ambiente, y la segunda, adoptar todas las medidas necesarias para proteger este. En relación con el deber de no atentar contra este derecho, el TC precisa que "así, en su faz reaccional, el Estado asume la obligación de abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que afecten el medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida humana" (STC Exp, N° 00018-2001-AI/TC, f. j . 10). Con relación con la segunda obligación tenemos el

compromiso estatal de promover y favorecer una real y más plena vigencia de este derecho constitucional.

En relación con esta última, el TC señala que "en su dimensión prestacional. Impone al Estado tareas u obligaciones destinadas a conservar el ambiente equilibrado, las cuales se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades, entre las cuales cabe mencionar la de expedir disposiciones legislativas destinadas a que desde diversos sectores se promueva la conservación del ambiente. Desde luego, no solo supone tareas de conservación sino también de prevención que se afecte a ese ambiente equilibrado" (STC Exp. N° 03510-2003-AAAn"C, f. j . 2.C).

CAPÍTULO II: GESTIÓN AMBIENTAL PERUANA

Brañes,R.(2000) define “gestión ambiental” como el conjunto de “actividades humanas” que tienen por objeto el ordenamiento del ambiente. En esta línea de pensamiento, podría afirmarse que la gestión ambiental en la sociedad considera dos aspectos íntimamente vinculados: la gestión ambiental privada y la gestión ambiental pública; entendiendo en este caso por pública, la gestión ambiental considerada como una **actividad del Estado**; sin duda una de las más importantes.

Sobre esta distinción, Brañes,R. (2000) explica: “La gestión ambiental es, principalmente, una función pública o una función del Estado. Por eso se dice que ella es un “cometido”, “competencia”, “misión”, “prerrogativa” o “atribución” del Estado, que son expresiones que se emplean para designarla. Pero a diferencia de otros cometidos del Estado, la gestión ambiental no es una función exclusivamente pública. Por el contrario, entre sus objetivos está su transformación en una función compartida por el Estado y la sociedad civil.

Así mismo compete al Estado la determinación de la Gestión Ambiental, hoy es cada vez más aceptado que la ciudadanía y el sector empresarial no pueden estar excluidos de la formulación, aplicación y evaluación de las mismas. En tal sentido, son los actores sociales quienes, con sus conductas, harán que la gestión ambiental sea exitosa o no; de ahí que para asegurar su eficiencia y eficacia el Estado deba promover la participación de estos actores.

En consecuencia, se destaca la existencia, por así decirlo, de una gestión ambiental que corresponde al Estado, y una gestión ambiental que corresponde a la sociedad civil, sin perder de vista la estrecha interrelación entre una y otra. Desde el punto de vista jurídico, cabe en este espacio analizar con mayor detenimiento la gestión ambiental pública, es decir, aquella que ejecuta el Estado. Dentro de esta gestión ambiental pública, se incluye también la gestión ambiental que desarrolla la sociedad civil, en los casos en que la gestión ambiental que desarrolla la sociedad civil, en los casos en que la gestión ambiental privada se encuentre contemplada en la legislación.

2.1. ELEMENTOS

A partir de la constatación preliminar de Brañes,R.(2000), que adelanta como componentes principales de la gestión pública, a la política, la normativa y la administración ambiental, las críticas que se han hecho a

esta clasificación general han partido por el análisis y desglosamiento de las características generales de cada uno de sus elementos, y, en algunos casos, la crítica a la consideración de alguno de sus componentes; por su parte, Perez.E.(2008), partiendo de un desglosamiento de cada uno de los componentes mencionados por Brañes (2000), propone una clasificación propia de gestión pública, a saber:

- OBJETO DE LA GESTIÓN (EN ESTE CASO SE TRATA DE LA GESTIÓN PÚBLICA AMBIENTAL)
- POLÍTICAS, PLANIFICACIÓN Y FINANCIAMIENTO
- NORMATIVA LEGAL
- ESTRUCTURA JURÍDICA E INSTITUCIONAL
- COMPETENCIAS
- NORMATIVA ADMINISTRATIVA Y REGULACIÓN
- ADMINISTRACIÓN, MANEJO Y OPERACIÓN
- SEGUIMIENTO Y CONTROL
- SANCIÓN Y JURISDICCIÓN

Según el mencionado autor, este esquema intenta abarcar las alternativas de acción que ofrecen los Estados contemporáneos para su desenvolvimiento. En una forma ideal, estos elementos deberían aplicarse de manera conjunta y complementaria para ser verdaderamente eficaces en la ejecución de las finalidades públicas.

Por su parte, el ambientalista peruano Lanegra,I (2008); partiendo de que la normativa ambiental no es estrictamente un componente de la gestión pública ambiental sino una vía para la formalización y le desarrollo de sus componentes, postula, a su vez, su propio esquema de elementos de gestión pública ambiental. Que, podríamos resumir de dos maneras:

2.2. COMPONENTES BÁSICOS DE GESTIÓN PÚBLICA AMBIENTAL

- POLÍTICA AMBIENTAL: Conjunto de Objetivos de política en dicha área.
- ORGANIZACIÓN ESTATAL AMBIENTAL. - Asignación de la ejecución de las acciones que buscan alcanzar dicho objetivo de política a determinadas organizaciones, generalmente (pero no sólo) a entidades públicas.

- INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL. - Que comprende el diseño y aplicación de instrumentos de gestión destinados a facilitar el accionar de los actores en la concreción de la política ambiental.

Como cada uno de estos componentes requiere a su vez de instrumentos jurídicos, el mencionado autor peruano hace otra clasificación que podríamos llamar “componentes específicos”. Dichos componentes se enfocarían en una estructura legal tales como:

- POLÍTICA Y OBJETIVOS DE POLÍTICA: PARA OBTENER RESULTADOS ESPERADOS
- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: FUNCIONES Y ATRIBUCIONES/ CAPACIDADES INSTITUCIONALES
- INSTRUMENTOS DE GESTIÓN: HERRAMIENTAS OPERATIVAS Y NORMATIVAS

En el Perú, no sólo tenemos una legislación joven, incompleta, sino también cambiante, y que muchas veces obedece a ese continuo reestructuramiento de políticas y estrategias que se van acomodando, perfeccionando con el paso del tiempo, pero que no por ello dejan de ser de exigencia obligatoria a través de las normas. Como muy bien apunta WESTREICHER (2006); si bien la legislación no es el único regulador de las conductas, si es el único que puede ser impuesto aun coercitivamente.

En tal sentido, al menos en nuestro país, la normativa ambiental refleja ese esfuerzo de la política ambiental peruana, en su intento por amoldarse a los nuevos cambios sociales, tanto internos como externos, resultando en buena cuenta uno de los instrumentos más poderosos que tiene la gestión ambiental. Así, por ejemplo, La Ley General del Ambiente establece que la gestión ambiental es un proceso permanente y continuo, constituido por el conjunto estructurado de principios, normas, técnicas, procesos y actividades, orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la política ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la población.

Tengamos presente, que una gestión ambiental exitosa deberá traer desarrollo sostenible, esto es, crecimiento económico y social en armonía con el equilibrio

ambiental, todo ello, en beneficio de una mejor calidad de vida y salud de la población. Por ello, las directrices de la gestión ambiental, pueden resumirse en dos: desarrollo sostenible y derecho a un medio ambiente sano y equilibrado. Con la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley N°28245 del 04 de junio de 2004) se pone fin a una etapa de gestión ambiental caótica y sin lineamientos generales. La tarea que se presenta ahora es desarrollar una gestión ambiental nacional consensuada y contando con la participación ciudadana. La descentralización de la gestión ambiental a través de los gobiernos regionales y locales es parte de ese proceso, así como la labor de coordinador y conciliador de intereses que tendrá el Ministerio del Ambiente frente a los ministerios y los Organismos Públicos Descentralizados con competencias ambientales, será fundamental para que el país, valore y aproveche su patrimonio nacional sin perjudicar la calidad de vida y salud de las personas. La política ambiental se desarrolla a través de una eficiente gestión ambiental que en nuestro país reposa en un sistema de gestión que está a cargo de la Autoridad Nacional Ambiental. La Ley General del Ambiente (L.G.A.) define al Sistema Nacional de Gestión Ambiental como la estructura de gestión que permite la integración funcional y territorial de la política, normas e instrumentos de gestión, así como las funciones públicas y las relaciones de coordinación de las instituciones del Estado y de la Sociedad Civil, en materia ambiental. El mencionado sistema toma como sus componentes a las instituciones estatales con competencias ambientales existentes, que se interrelacionarán y coordinarán recíprocamente, a través del Ministerio del Ambiente y la Política Ambiental Nacional que le otorgará unidad. Así mismo; se retroalimentará de información y obtendrá su legitimidad en la participación ciudadana y el sector privado.

La Ley General del Ambiente también establece que: “El Sistema Nacional de Gestión Ambiental se constituye sobre la base de las Instituciones Estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios, organismos públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel nacional, regional y local, que ejercen competencias y funciones sobre el ambiente y los recursos naturales; así como por los Sistemas Regionales y locales de Gestión Ambiental, contando con la participación del sector privado y la sociedad civil (Art.14.2 de la L.G.A.). En tal sentido, el Ministerio del Ambiente tendrá que sentar a los diversos sectores

productivos, para que concierten y concilien, a la luz del desarrollo sostenible y el derecho fundamental constitucional de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para desarrollar la vida. En dicha tarea, las normas transectoriales que promueva el Ministerio del Ambiente, serán claves para la consolidación real del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. El proceso de conformación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental integrará a los sistemas sectoriales, regionales y locales, así como a otros sistemas específicos relacionados con la aplicación de instrumentos de gestión ambiental.

No cabe duda, que la implementación de un sistema nacional de gestión, que se constituirá sobre la base de los sistemas sectoriales, regionales y locales, que pasarán a ser sus componentes o subsistemas de gestión ambiental, para obtener unidad, coherencia interna y congruencia con el medio que lo rodea, requerirá necesariamente de instrumentos de gestión ambiental que le permitan afianzar la política ambiental nacional y su propia existencia. La autoridad rectora del ambiente tendrá una dura tarea y deberá empezar por ingresar los proyectos de inversión de actividades de impacto, que aún no se les exige instrumentos de gestión ambiental y constituyen un potencial peligro al ambiente.

2.3. CARACTERÍSTICAS CENTRALES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL PERÚ

Sobre este punto a considerar Chang,A.(2002) no muy alejada de la realidad actual refiere que la gestión ambiental en el Perú y de sus gobiernos regionales, municipales y locales posee las siguientes características:

- Carencia de una política ambiental explícita: Al no existir una política ambiental que establezca las prioridades nacionales en materia de gestión ambiental para el corto, mediano y largo plazo.
- El centralismo y la sectorialización administrativa: Se fortaleció significativamente la sectorialización administrativa en manos del gobierno nacional. Lo cual no es malo per se, pero si agudizó la debilidad de gestión de los gobiernos locales.
- La asignación de competencias bajo criterios divergentes y desarticulados: Esta asignación de competencias se ha venido fijando a través de múltiples instrumentos normativos, elaborados en distintos momentos históricos y

bajo premisas conceptuales, técnicas e institucionales diferentes e incluso divergentes.

- Profusión normativa en materia ambiental: En el Perú, existe una cantidad y diversidad de normas relativas a la gestión ambiental en general y, en particular, a la gestión ambiental municipal, lo cual dificulta el entendimiento de las competencias municipales.
- Complejidad de la cuestión ambiental: En la actualidad la “cuestión ambiental” está asociada indesligablemente a objetivos de desarrollo y no a la mera preservación de especies o ecosistemas. Es necesario integrar las tres dimensiones del desarrollo: la ambiental, la económica y la social, bajo una misma lógica, hoy conocida como el principio de sostenibilidad ambiental.
- Debilidad de la autoridades ambientales: La insuficiente dotación de recursos a las autoridades con funciones y atribuciones ambientales, limita su capacidad de gestión.

2.4. POLÍTICA AMBIENTAL: POLÍTICA AMBIENTAL DE GOBIERNO

Según WESTREICHER, A (2006), la política ambiental constituye el componente principal de la gestión ambiental, desde que los otros dos elementos o instrumentos, que son los marcos jurídicos y administrativos, solo encuentran su realización a partir de este.

Sin embargo, es de advertir que en opinión de LANEGRA (2008) cuando se habla de política ambiental se deben distinguir por lo menos tres acepciones:

- (I) Como lineamiento de política: Directrices o reglas de carácter general que orientan la toma de decisiones o el desarrollo de las acciones de gestión ambiental.
- (II) Como objetivos de política: Metas que se plantea el Estado en materia ambiental, tanto en forma de acciones (medios) como en resultados.
- (III) Como política pública ambiental: Equivale a política pública (*policy*), programa o conjunto de acciones orientadas a alcanzar algún objetivo de política ambiental,

interviniendo en la gestión ambiental y en el manejo de los conflictos socio ambientales.

Según el mencionado autor, para evitar confusiones, este último término “política pública ambiental o política ambiental gubernamental” sería el adecuado; pues con esta expresión se alude a que las políticas inciden sobre las personas y organizaciones, antes que propiamente sobre el ambiente. En ese sentido, las políticas públicas o gubernamentales son, de acuerdo a MOLINA (1998) los programas sectoriales y las acciones concretas que emanan de las Instituciones de Gobierno como resultado de la interacción política.

Dentro de ese contexto, la política ambiental se inserta dentro de las políticas públicas, que constituyen declaraciones o interpretaciones generales que guían o encauzan el pensamiento de los actores para la toma de decisiones; definen áreas dentro de las cuales se puede tomar decisiones y aseguran que estas sean congruentes con un objetivo y contribuyan a alcanzarlo.

Los lineamientos generales aportados por la política ambiental señalan, entonces, el derrotero a seguir por la legislación y la institucionalidad estatal respectivamente. Según CHARPENTIER e HIDALGO (1999) refieren que la Política Ambiental Gubernamental se puede expresar normas legales, documentos o declaraciones de las autoridades públicas. No obstante, sus efectos no siempre son inmediatos y directos; sino que necesitarán en muchos casos de un instrumento de política (o de gestión ambiental), que convierte la simple declaración en acción de gobierno es decir en política pública ambiental.

Por lo tanto; el objeto de tener una gestión pública ambiental, que articule acciones gubernamentales y ciudadanas encuentra su razón de ser, en los que se erige como objeto de esa gestión es justamente la búsqueda de un desarrollo sostenible. Un desarrollo sostenible, que además de dedicarse a la vigilancia de actividades contaminantes y manejo de ciertos recursos naturales renovables y no renovables, también persiga un estímulo de actividades económicas productivas, previniendo, minimizando y restaurando los posibles efectos negativos de su impacto en el medioambiente, buscando armonizar la aparente dicotomía entre desarrollo económico y preservación ambiental.

2.5. ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

La Administración Ambiental constituye el marco institucional del Estado encargado de ejecutar las políticas ambientales y de velar por el cumplimiento de la normativa ambiental. En el Perú no existe una única autoridad ambiental, sino que los sectores correspondientes y, en su caso, los organismos fiscalizadores, son competentes para conocer sobre los asuntos relacionados con la aplicación de la L.G.A. y demás normas ambientales complementarias y conexas. Cuando una empresa desarrolla dos o más actividades de competencia de distintos sectores, resulta competente la autoridad sectorial a la que corresponda la actividad de la empresa por la que se generen mayores ingresos brutos anuales.

No obstante, la coexistencia de “autoridades ambientales” sectoriales, regionales y locales, en cuanto a la política ambiental, debe ser unívoca y coordinada. Para este efecto es que se creó el CONAM (ahora MINAM) y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

Según Brañes, R.(2000). La organización de un sistema de gestión ambiental se puede examinar desde tres puntos de vista: la centralización y descentralización de dicho sistema; la sectorización y transectorización del mismo; y la cabida de la participación social en este sistema.

Adaptando estos conceptos a nuestra realidad, diremos que nuestro país, por organizarse unitariamente, tiene una estructura pública que prevé un sistema de gobierno nacional, regional y local. El autor refiere que la forma como se distribuyen las funciones públicas entre las autoridades político-administrativas indica el grado de descentralización o de centralización de la correspondiente estructura estatal, según el número y la importancia de las funciones que se asignen a los gobiernos nacionales y a los otros niveles de gobierno.

Expresa también que, la incorporación de la gestión ambiental a la estructura del Estado plantea algunos requerimientos de descentralización de funciones fuertemente centralizadas. En efecto, es un principio inconcuso en gestión ambiental que se lleve a cabo con un alto grado de descentralización, pues se considera que el aprovechamiento de las capacidades locales es uno de los requisitos indispensables para una gestión ambiental apropiada. Con todo, la necesidad de que, además, haya una gestión integral e integrada del ambiente; esto

es, referida a todos sus elementos y desde una perspectiva de conjunto; determina que estas deba contar también con una cierta centralización. En consecuencia, el problema es armonizar adecuadamente los requerimientos de descentralización y centralización de la gestión ambiental, de modo que esta pueda alcanzar un nivel de globalidad que es necesario, pero sin caer en la generalidad y la abstracción que caracterizan a la gestión ambiental altamente centralizada, y lo que puede evitarse por medio de un sistema descentralizado.

Nuestra administración ambiental se inserta en el ejercicio sectorial de competencias a nivel de Gobierno Nacional, que coexiste con las atribuciones conferidas a los organismos constitucionalmente autónomos, como es el caso de la Contraloría General. Se ha establecido un grado de centralización que garantiza el tratamiento integral del ambiente, para lo cual se ha establecido que: “El diseño de las políticas y normas ambientales de carácter nacional es una función exclusiva del Gobierno Nacional”. Pero también se ha previsto la asignación de competencias, a nivel de los gobiernos regionales y locales.

Así mismo, se han forzado normativamente estructuras jurídico-administrativas como en el Ministerio de Salud a través de la DIGESA; atribuyendo como roles para cautelar el ambiente adecuado:

- Formular las políticas en materia de salud ambiental, en concordancia con las normas nacionales e internacionales.
- Formular normas y lineamientos técnicos, metodología, procedimientos, protocolos y demás vinculados en materia de gestión integral de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos; calidad de agua para el consumo humano, agua de uso poblacional y recreacional, en el marco de sus competencias; aire (ruido, radiaciones); suelo; cementerios y crematorios; juguetes y útiles de escritorio; sustancias químicas; así como los factores de riesgo físicos, químicos y biológicos externos a la persona; así como las normas para la vigilancia sanitaria, medidas de seguridad, infracciones y sanciones, en el marco de sus competencias.
- Formular normas procedimientos para otorgar certificaciones, autorizaciones sanitarias, permisos, notificaciones sanitarias obligatorias, registros y otros en materia de su competencia.

- Realizar acciones de vigilancia y super vigilancia, conforme a la normatividad vigente, en materia de su competencia.
- Administrar y mantener actualizado el registro de certificaciones, autorizaciones sanitarias, permisos, notificaciones sanitarias obligatorias y otros en materia de su competencia.
- Proponer la declaratoria del estado de emergencia sanitaria por el manejo inadecuado de los residuos sólidos y/o calidad de agua para el consumo humano, en el marco de su competencia.
- Implementar la gestión del riesgo sanitario y disponer las medidas de seguridad que correspondan en materia de su competencia.
- Atender las alertas sanitarias nacionales y las procedentes del exterior en materia salud ambiental.
- Realizar las acciones para gestionar la equivalencia y armonización nacional e internacional de la normativa en materia de su competencia.
- Implementar las acciones correctivas que correspondan.
- Coordinar los análisis requeridos para las acciones que corresponden en el marco de su competencia.
- Implementar las acciones para el adecuado cumplimiento de las funciones asignadas.
- Emitir opinión técnica en el ámbito de su competencia
- Brindar asistencia técnica y capacitación a los diferentes niveles de gobierno, en materia de su competencia.
- Formular, desarrollar y difundir estudios, investigaciones y evaluaciones, en la materia de su competencia.
- Desarrollar acciones orientadas a la mejora continua de los procesos relacionados con su competencia.
- Desarrollar las acciones de implementación del sistema integrado de gestión de la calidad.
- Resolver en primera instancia los procedimientos administrativos y recursos administrativos de su competencia.
- Las demás funciones que le corresponda de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y aquellas que le asigne el/la Director/a General de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria.

2.5.1. SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (SINAPLAN)

El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) es el conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país, por lo que, constituyen como sus objetivos: (I) Orientar y definir métodos, procesos e instrumentos para articular e integrar en forma coherente la elaboración de ***Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y los planes nacionales***. (II) Promover y articular los programas de fortalecimiento de capacidades para el planeamiento estratégico. (III) Desarrollar los procesos y las acciones para el seguimiento de la gestión para resultados de mediano y largo plazo. (IV) Promover la cooperación y acuerdos entre los sectores públicos y privados en el proceso de formulación de los planes estratégicos. (V) Promover la formulación de planes estratégicos, programas y proyectos con visión prospectiva de medio y largo plazo. (VI) Visión de futuro compartida, concertada y de los objetivos y planes estratégicos.

Es así que, se aprobaron diversos estamentos legales que permiten su eficiencia y eficacia de su aplicación en el territorio nacional siendo entre ellas: El decreto supremo N° 029-2018-PCM que aprueba el Reglamento que regula las Políticas Nacionales que, en su artículo Artículo 11 versa sobre la vinculación de las políticas nacionales con el **SINAPLAN** precisando que, primero, las políticas nacionales desarrollan sus objetivos a través de metas, indicadores y responsables en los respectivos planes estratégicos sectoriales multianuales-PESEM, planes estratégicos multisectoriales, planes estratégicos institucionales y planes operativos institucionales de los Ministerios y sus organismos públicos, según corresponda, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN; segundo, las políticas nacionales no requieren la elaboración de planes de implementación o ejecución distintos a los establecidos en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN, tercero, que a nivel territorial, las políticas nacionales se vinculan con los Planes de Desarrollo Concertado y con los planes institucionales (Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional) de los gobiernos regionales y locales, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN otorgándosele noventa (90) días calendario de publicado el Decreto Supremo que materialice el acuerdo de Consejo de Ministros que contiene la Política General de Gobierno, los Ministerios y sus organismos públicos adecúan sus instrumentos de planeamiento referidos en líneas anteriores, de modo tal que estos desarrollen los objetivos de las políticas nacionales

priorizadas bajo su competencia, en el marco de lo dispuesto en el mencionado Decreto Supremo y que, los gobiernos Regionales y locales, deben adecuar sus instrumentos de líneas arriba, de acuerdo a los plazos que el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN establezca, de modo que estos desarrollen los objetivos de las políticas nacionales priorizadas bajo su competencia.

Esta disposición es reforzada conceptual y normativamente por el RPCD N° 047-2018-CEPLAN-PCD al precisar que, en cuanto al planeamiento estratégico, se define como un proceso que parte de la consideración de las prioridades del país y de sus ámbitos de gobierno (central, regional, local) consistente en una reflexión rigurosa que realiza cada institución del Estado sobre las demandas de los ciudadanos, las oportunidades y los riesgos de un inadecuado accionar del sector público y sobre los actores e intervenciones involucrados, y sus resultados anteriores; que, concluye en objetivos que expresan resultados que las entidades esperan alcanzar en relación a la demanda ciudadana, con metas claras de cantidad y calidad de producción de bienes o servicios que permitirán la articulación del presupuesto para satisfacer las demandas ciudadanas de la manera más eficaz y eficiente y que, por tanto, en el marco de la modernización de la gestión pública, las políticas nacionales deben formularse sobre problemas priorizados de acuerdo a las necesidades y demandas ciudadanas, y reflejarse en los planes sectoriales, institucionales y operativos del SINAPLAN. En tal sentido y, en concordancia con el Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, es en la Fase de Políticas y Planes coordinados que las políticas nacionales deben concretarse en planes con objetivos, indicadores y metas (claras, alcanzables y acordes con las políticas de Estado, políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales) y en acciones de orden estratégico priorizadas. De este modo, el Estado podrá actuar como un todo coherente y articulado.

2.5.2. CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO (CEPLAN)

Es el órgano rector del SNPE, está destinado a conducir y desarrollar la planificación concertada como instrumento técnico de gobierno y de gestión pública; asó como ser orientador y ordenador de acciones necesarias para lograr el objetivo estratégico de desarrollo integrado del país. En tal sentido, le corresponde desarrollar instrumentos para asegurar la consistencia de las políticas: económica, financiera, social, espacial, ambiental e institucional para un desarrollo sostenible, armónico, equitativo y equilibrado; con el objeto de contribuir a la gobernabilidad democrática del país.

Lamentablemente la institucionalidad del SINAPLAN y del CEPLAN parece haber perdido vigor, a pesar de que su efectiva implementación es indispensable para darle coherencia a la planificación estratégica del país. Sin duda, el SNGA debe estar integrado al SINAPLAN, debido a que, le corresponde ejecutar la decimonovena política de Estado del Acuerdo Nacional.

2.5.3. SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

El Sistema Nacional de Gestión Ambiental se constituye sobre la base de las instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios, organismos públicos descentralizados e Instituciones Públicas a nivel nacional, regional y local, que ejerzan competencias y funciones sobre el ambiente y los recursos naturales; así como por los sistemas regionales y locales de Gestión Ambiental, contando con la participación del sector privado y la sociedad civil.

EL Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene por finalidad orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de las políticas, planes, programas y acciones destinados a la protección del ambiente y contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

La función ambiental organiza las funciones ambientales dentro del SNGA a través de cuatro niveles operativos; los cuales son aplicables a los niveles nacional, regional y local de gobierno; siendo estos los siguientes:

- NIVEL I: Encargado de definir y aprobar los principios y objetivos de gestión ambiental y la promoción del desarrollo sostenible, integrando la política ambiental con las políticas sociales y económicas.
- NIVEL II: Encargado de coordinar, dirigir, proponer y supervisar la Política Ambiental, el Plan y Agenda Ambiental, así como conducir el proceso de coordinación y de concertación intersectorial.
- NIVEL III: Encargado de elaborar propuestas técnicas que, preferentemente se basen en consensos entre entidades públicas de los diferentes niveles de gobierno, sector privado y sociedad civil. Las propuestas acordadas se presentan a los organismos de decisión

correspondientes, a través de la autoridad nacional ambiental o, en su caso, a través de los gobiernos regionales y locales.

- NIVEL IV: Encargado de la ejecución y control de: políticas, instrumentos y acciones ambientales.

La necesaria vinculación del SNGA con el SINAPLAN y el CEPLAN obedece al rol preponderante que se le asigna en la implementación de la decimonovena política de Estado sobre desarrollo sostenible y gestión ambiental, según la cual los representantes acreditados asumieron como política de Estado el compromiso de integrar la política nacional ambiental con las políticas económicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial, para contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del Perú.

2.5.4. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

La gestión ambiental es un proceso permanente y continuo, constituido por el conjunto estructurado de principios, normas, técnicas, procesos y actividades, orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la política ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida, el desarrollo integral de la población, el de las actividades económicas y la conservación del patrimonio ambiental y natural del país.

La norma consolida el Sistema Nacional de Gestión Ambiental como sistema funcional y señala que estará integrado a su vez por:

- Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (S.E.I.A.)
- Sistema Nacional de Información Ambiental (S.I.N.I.A.)
- Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (S.I.N.A.N.P.E)
- El Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos (SNGHR)
- El Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA).

De igual forma el SNGA presenta una dimensión territorial, compuesto por:

- Los Sistemas Regionales de Gestión Ambiental (SRGA)
- Los Sistemas Locales de Gestión Ambiental (SLGA)

Finalmente, el SNGA se articula con otros sistemas funcionales vinculados a la gestión del ambiente y los recursos naturales, los cuales se componen de:

- El Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR),
- El Sistema Nacional de Acuicultura (SINACUI).
- El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (SINAGERD)

El Sistema Nacional de Gestión Ambiental se basa fundamentalmente en el carácter descentralizado y transectoriales de la gestión socio ambiental, así como en el principio de coordinación interinstitucional y la participación ciudadana.

2.6. GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

En los últimos años, el tema ambiental ha cobrado cada vez más importancia en el Perú, y el Gobierno Central se ha visto obligado a atender estos temas colocándolos en la agenda política nacional del país, prueba de ello es la aprobación de varios proyectos legislativos, la creación del Ministerio del Ambiente y los crecientes conflictos entorno al acceso y uso de los recursos naturales que ponen a prueba la gobernabilidad y la paz social del país.

Puesto que la mayoría de los campos de trabajo ambientalmente relevantes se vienen dando cada vez más disposiciones legales, en las cuales de una u otra manera, se adjudica a los gobiernos locales crecientes responsabilidades al respecto

Sin embargo, es necesario que los gobiernos locales cuenten con bases jurídicas sólidas y desarrollen capacidades técnico-administrativas para hacer frente a los grandes desafíos que significa dar solución a problemas emergentes del presente y cercano futuro, en el marco del modelo de crecimiento económico que cada vez consume y demanda más energía, más recursos naturales y a su vez enfrenta el escenario global de dramáticos cambios en las condiciones climáticas, las que a su vez repercuten en las condiciones y calidad de vida de los pueblos asentados

en las comunidades rurales y amenazan empeorar aún más las posibilidades de asegurar su existencia y superar la pobreza.

A. MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL

Según el artículo 73 de la Ley Orgánica de Municipalidades del Perú (Ley N°27972), son materias de competencia municipal:

- Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel provincial el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel provincial, recogiendo las prioridades propuestas en los procesos de planeación de desarrollo local de carácter distrital.
- Promover permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de desarrollo distrital. Los planes referidos a la organización del espacio físico y uso del suelo que emitan las municipalidades distritales deberán sujetarse a los planes y las normas municipales provinciales generales sobre la materia.
- Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales que presenten objetivamente, externalidades o economías de escala de ámbito provincial, para cuyo efecto, suscriben los convenios pertinentes con las respectivas municipalidades distritales.
- Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo así como sobre protección y conservación del ambiente de modo que se asegure la máxima eficiencia en el uso de los recursos públicos y una adecuada provisión a los vecinos.

Desde la promulgación de esta ley y hasta entonces, pese a la creación del MINAM. La Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y la Ley de Bases de Descentralización, el ejercicio de las funciones y competencias ambientales sigue estando en manos de los Ministerios y caracteriza la fragmentada gestión pública de los asuntos ambientales.

En la actualidad el Gobierno Peruano, en su interés por promover las inversiones de grandes capitales transnacionales para financiar su caja fiscal, compite a su vez, con otros países latinoamericanos por conseguir estas inversionistas. Todo ello a costa de la atenuación de sus reglamentos de control ambiental, de la posible pérdida de zonas

adecuadas para otro tipo de actividades diferentes a las extractivas, así como los daños ya ocasionados al medio ambiente.

B. POTENCIALES CONFLICTOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

Es indiscutible que los orígenes de las disputas están estrechamente ligados a:

- Problemas de definición de modelos de desarrollo.
- Ausencia de Participación ciudadana.
- Diferentes percepciones del riesgo entre los actores involucrados.
- La toma de decisiones centralizada en el gobierno nacional.

Muchos conflictos sociales tienen su raíz en los conflictos de intereses que representan las autoridades sectoriales ambientales, ya que cada ministerio debe encargarse de promover el desarrollo productivo de su sector, fiscalizar el cumplimiento y a su vez proteger el ambiente. Esta tarea resulta sumamente difícil y en algunos casos puede resultar hasta incompatible con las políticas locales, si se considera que a los Ministerios se los evalúa por las metas asociadas al fomento de la inversión privada y al desarrollo de su propio sector.

Esta situación ha generado en algunos casos desconfianza en la población, sobre todo de los que se ven afectados por las actividades de las industrias extractivas y no encuentran correspondencia a sus inquietudes o demandas ante las autoridades ambientales sectoriales, que en algunos casos se superponen y/o contraponen a la gestión de las autoridades locales.

Con el avance del proceso de descentralización se debería reemplazar el actual enfoque sectorial de gestión ambiental por un enfoque territorial a partir de una visión de desarrollo integral del país mediante la integración de ámbitos espaciales sostenibles gestionados por gobiernos locales eficientes, democráticos y participativos.

C. DESCENTRALIZACIÓN, AUTONOMÍA Y COMPETENCIAS MUNICIPALES

En la Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada se establece la función reguladora del Estado en la conservación del Ambiente (Art.49); concordante con el Art.67 de la Constitución Política del Perú y el marco normativo ambiental peruano (La Ley General del Ambiente, La Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, La Ley de Conservación

y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica y la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental). En correspondencia a la Ley de Bases de la Descentralización Art.73 y la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972, sería también competencia de las Municipalidades, en su función como ente regulador en su territorio:

- Estimular y establecer el equilibrio racional entre el desarrollo socioeconómico, la conservación del ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales.
- Garantizar la debida seguridad jurídica a los inversionistas mediante el establecimiento de normas claras de protección del medio ambiente.
- Promover y regular la participación de empresas o instituciones privadas en las actividades destinadas a la protección del medio ambiente y la reducción de la contaminación ambiental.

El proceso de descentralización debe conducir al establecimiento de bases jurídicas sólidas para que los gobiernos locales desarrollen capacidades técnico-administrativas para hacer frente a los grandes desafíos que significa dar solución a problemas crecientes y emergentes del presente y cercano futuro, en el marco de un modelo de crecimiento económico que cada vez consume y demanda más energía, más recursos naturales y a su vez enfrenta el escenario global de dramáticos cambios en las condiciones climáticas, las que a su vez repercuten en las condiciones y calidad de vida de los pueblos asentados en las comunidades rurales y amenazan con empeorar aún más posibilidades de asegurar su existencia y superar la pobreza.

Por lo que, las Municipalidades deben garantizar que en la ejecución de sus actos de gobierno y en la política económica y social, se respete un conjunto de principios de política y planificación ambiental, tales como: uso racional, integrado, armónico e integrado de los recursos naturales; ordenamiento normativo provincial y distrital así como actos administrativos aplicados con criterios de sostenibilidad; enfoque inter y multidisciplinario para regular el desarrollo de actividades que impacten al medio ambiente.

Para ello deben hacer uso de la autonomía política, económica y administrativa que les otorga la ley. La autonomía es definida por la Ley N°27444 del

Procedimiento Administrativo General como el “derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia”, haciendo evidente la trascendencia de contar con una definición inequívoca del concepto de competencia.

D. DIMENSIONES DE AUTONOMÍA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

- AUTONOMÍA POLÍTICA: Es la facultad de adoptar y concordar políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las funciones que le son inherentes.
- AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA: Es la facultad de organizarse internamente, determinar y reglamentar los servicios públicos de su responsabilidad.
- AUTONOMÍA ECONÓMICO: Es la facultad de crear, recaudar y administrar sus rentas e ingresos propios y aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto. Su ejercicio supone reconocer el derecho a percibir los recursos que les asigne el Estado para el cumplimiento de sus funciones y competencias.

Para que esto funcione, debería tomarse en cuenta de que todo aquello que pueda ser decidido por los otros niveles del Estado en forma eficiente y en la responsabilidad propia según las competencias otorgadas, ya no debería ser asumido por las entidades del Gobierno Nacional. Este debería ser el principio conductor, cuando se trate de implementar y enriquecer el avance del proceso de descentralización y modernización del estado, para prevenir, conflictos, contraposiciones e incoherencias.

Naturalmente que; en cuestiones de protección ambiental, el primer responsable es el Gobierno Nacional. A través de una legislación Ambiental coherente, directrices claras para la protección ambiental así como especificaciones sobre el último estado de la técnica y la introducción de instrumentos de la economía de mercado, el Gobierno Nacional es quien fija los conceptos y determina las condiciones marco de nuestra política ambiental nacional.

Inmediatamente en la siguiente fase, cuando se trata de la implementación y ejecución de los lineamientos políticos- ambientales nacionales, deben intervenir otras instancias territoriales y sub nacionales de gobierno como los gobiernos locales de las municipalidades provinciales y distritales, en concordancia con las políticas regionales que se van desarrollando poco a poco en nuestro país.

Es por ello, que los Gobiernos Locales pueden y deben interconectar los campos político- administrativos como el desarrollo económico, vivienda, obras públicas (infraestructura), transporte, entre otros bajo los aspectos de sostenibilidad e impacto ambiental y armonizarlos con la gestión de agua potable, aguas residuales, residuos sólidos limpieza pública, ornato y áreas verdes entre otras tareas más, que desde hace mucho tiempo forman parte integral de las competencias municipales y siempre fueron consideradas como las tareas municipales “clásicas” por excelencia.

Y es precisamente aquí, donde la demanda de pensar en red se hace indispensable para la gestión pública, siendo este requerimiento relativamente nuevo en muchos aspectos, pues esto requiere sólidos conocimientos jurídico-administrativos de parte de quienes deben implementar norma y marcos regulatorios y proveer servicios a sus comunidades.

A las Municipalidades les favorece el hecho que desde hace mucho tiempo les ha correspondido la mayoría de las “tareas clásicas” de la gestión ambiental local como son la gestión de agua potable y desagüe, limpieza pública, áreas verdes y ornato, recolección y disposición final de residuos sólidos, etc. Y en estos aspectos se han ido logrando considerables mejoras en nuestro país.

En estos tiempos, aparte de ampliar y mejorar la cobertura y calidad de los “clásicos” servicios públicos que brindan (o debieran brindar) los gobiernos locales, corresponde a las municipalidades, más allá de dar solución de sus conocidos problemas ambientales como la reducción, reutilización y disposición final de residuos sólidos, así como el suministro de agua potable segura y tratamiento de aguas servidas para mitigar el impacto ambiental negativo que produce el tráfico de vehículos, atender y promover el suministro de energía limpia que esté a la altura de las exigencias que se derivan de la protección del

ambiente y del clima, así como atender la gestión de riesgos y medidas de adaptación necesarias para hacer frente al cambio climático.

Cabe precisar, que con respecto a este punto en la Ley Orgánica de Municipalidades ni en el marco normativo peruano, se hace mención específica a competencias municipales en materia de adaptación o mitigación ante el cambio climático; es por ello que, resulta ser indispensable la elaboración de estrategias o mecanismos tendientes a reducir las emisiones de los gases producto del efecto invernadero; siendo tarea principal de los gobiernos municipales y locales administrar los distintos bienes que el territorio brinda (conservando sus funciones climáticas) y ofrecer los servicios necesarios a la comunidad para que esta pueda ejercer integralmente el derecho a la vida con calidad y dignidad, teniendo en cuenta la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático.

Partiendo de la comprensión de Competencia Municipal como el poder legítimo (facultad) del Gobierno Local sobre su territorio (jurisdicción), incluyendo el poder de acción y decisión (atribución) para el cumplimiento de sus funciones en áreas de intervención o regulación asignadas por el Estado para la satisfacción social de sus ciudadanos.

E. POTESAD FISCALIZADORA

Que, el Artículo 194 de la Constitución Política del Perú señala que: “Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local que poseen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y que de conformidad en el artículo 195 de la Constitución Política del Perú los gobiernos locales asumen la promoción del desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, mediante la atribución de competencias tales como: **(1)** Aprobar su organización interna y su presupuesto. **(2)** Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil. **(3)** Administrar sus bienes y rentas. **(4)** Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley. **(5)** Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad. **(6)** Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial. **(7)** Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para

la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local. **(8)** Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley. **(9)** Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia. **(10)** Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley.

Siendo que, la Fiscalización municipal se encuentra regulado con mayor claridad en el artículo 63 del Decreto Supremo N°003-2013-VIVIENDA, Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición, Modificado por Decreto Supremo N°019-2016-VIVIENDA, la que precisa que, el gobierno local en el marco de sus competencias en materia de saneamiento, salubridad y salud, realiza el control y fiscalización, conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento, en lo referido a la generación, transporte y disposición de residuos sólidos en el ámbito de sus localidades, a lo que, el Artículo 68 precisa con mayor exactitud que, la obligación del gobierno local de informar las acciones de fiscalización El gobierno local, en el marco de sus competencia, comunica anualmente a la Dirección General de Asuntos Ambientales de VIVIENDA, las acciones de fiscalización vinculadas a la gestión de los residuos sólidos de la construcción y demolición, a fin que la citada Dirección consolide la información en un informe anual sectorial y lo presente al Ministerio del Ambiente.

F. POTESTAD PROMOTORA Y SANCIONADORA

Conforme a sus atributos de autoridad, las municipalidades son competentes para emitir y aplicar ordenanzas, resoluciones, edictos o acuerdos y, reglamentos, a fin de alcanzar los objetivos de su gestión ambiental. Para ello, deben tomarse en cuenta el propio rol del gobierno local así como las atribuciones establecidas para otros organismos del Estado. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que las tendencias modernas de la gestión ambiental establecen que la autoridad debe desplegar sus tradicionales acciones punitivas para resguardar el cumplimiento de las normas, pero a la vez, debe establecer complementariamente, instrumentos económicos o de incentivo para promover el cabal cumplimiento de las normas y en algunos casos, a un menor costo.

Como se indica en la doctrina actual, debe generarse una “atmósfera de cumplimiento” que desaliente la evasión del mandato legal. Debe tenerse en cuenta que un aspecto que configura el propio concepto de la norma jurídica es el respaldo coercitivo del Estado y que “no siempre una sanción muy fuerte o severa es la que asegura el cumplimiento de las normas, más aún cuando el riesgo de que se efectivice la sanción es bajo. La certeza en la aplicación de la sanción es más fuerte que su propia severidad. Para ello, la autoridad debe estar dotada de recursos y atribuciones suficientes para ser esa figura protagónica que respalde el cumplimiento de la norma ambiental.

Conforme a ello, las municipalidades deben establecer sus propios regímenes de incentivos y sanciones que respalde el cumplimiento de sus normas ambientales, los cuales deben ser coherentes con sus atribuciones legales, así como con los lineamientos y objetivos de su política ambiental.

No obstante, sin perjuicio de ello, debe resaltarse que el artículo 54° del Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, se ha previsto que las municipalidades pueden imponer sanciones, aplicando de ser necesario, los procedimientos coactivos de ley, solicitando el apoyo de organismos competentes y de la fuerza pública para hacer efectivas las prohibiciones o restricciones de las actividades que :

- A. Deterioren el aire, agua, suelo y subsuelo; flora y fauna; riberas marítimas, fluviales y lacustres, es desmedro de la calidad de vida y de la seguridad de bienes y personas.
- B. Originen ruidos molestos o nocivos.
- C. Atenten contra el paisaje urbano.
- D. Realicen una inadecuada disposición de efluentes sólidos, líquidos y gaseosos de cualquier origen.
- E. Ejecuten al margen de las normas de seguridad, la manipulación, transporte, almacenamiento y expendio de material peligroso.
- F. Ejecuten actividades industriales y de servicios sin adoptar las medidas de seguridad necesarias tanto para los trabajadores como para el vecindario.
- G. Emitan o produzcan radiaciones nocivas.

H. Contribuyan innecesariamente a la reducción de tierras de cultivo de alto valor agrológico.

CAPITULO III: RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA EN EL PERÚ

Loza, C. (2016). Refiere que en el Perú existe una creciente demanda insatisfecha de Responsabilidad Social Gubernamental (RSG), esto no solo se refleja en los bajos niveles de confianza en las instituciones del sector público, sino también en los altos índices de corrupción percibidos. Si se considera la opinión pública respecto a la corrupción, la empresa privada queda en una mejor posición en comparación con muchas instituciones gubernamentales.

Por esta razón; entre muchas otras se hace cada vez más clara, la oportunidad actual que poseen organizaciones gubernamentales tanto para asumir de manera más explícita su responsabilidad social, así como para actuar como activadores estratégicos de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

A diferencia de la RSE donde la iniciativa voluntaria juega un rol central, permitiendo no solo mejoras estratégicas en la gestión de las empresas, sino también innovadoras maneras de contribuir a la solución de problemas sociales. La RSG, por un lado, ve integrada en la misión de las distintas organizaciones gubernamentales un intrínseco rol social. En efecto, desde cierta perspectiva se puede decir que la responsabilidad social de las entidades gubernamentales es maximizar el bienestar social de manera sostenible, no en una perspectiva vertical y asistencialista, sino en una perspectiva horizontal y relacional, creando vínculos de beneficio mutuo con los distintos actores del mercado y de la sociedad civil, de manera estratégica y sustentable. Por otro lado, si bien la voluntariedad de la RSE se ve minimizada en la RSG, la innovación juega en ambas y sobretodo en la segunda un papel crucial; entidades gubernamentales incapaces de innovar corren el riesgo de quedar estancadas en la burocracia y caer en legalismos estáticos. Por esta razón colaboraciones gobierno-empresa o gobierno-sociedad civil suelen ser beneficiosas también para el perfeccionamiento de las instituciones gubernamentales. Al no reposar tanto sobre la voluntariedad, la RSG es o mejor dicho debería ser ejemplo de cómo integrar prácticas socialmente responsables, en cada etapa de los procesos de producción o de prestación de servicios. En este aspecto sin embargo queda mucho trabajo por hacer.

Además, junto a la reducción del campo de acción de los gobiernos generado por la globalización; los últimos años algunos gobiernos, sobre todo a niveles locales,

han tomado conciencia de la necesidad de ampliar el marco de referencia de las actividades políticas, ampliando los niveles de participación de manera subsidiaria, integrando agentes empresariales y de la sociedad civil en actividades de estimación presupuestal, planeamiento, auditoría, etc. Este tipo de iniciativas, que son de las más desarrolladas en temas de RSG, son posibles porque responden a realidades sociales y culturales que permiten su realización, al respecto no hay recetas que puedan aplicarse de manera indiscriminada.

Finalmente, y en mérito a la transparencia necesaria para el éxito de toda actividad socialmente responsable, se debe mencionar también las iniciativas metodológicas orientadas a la evaluación de actividades de RSG que aseguran su éxito y sostenibilidad. En la medida en que sea posible informar y evaluar el alcance y los resultados de las iniciativas de responsabilidad social, será posible también evidenciar de manera más clara como influye el gobierno en la calidad de vida de los ciudadanos. Influencia directa y decisiva que exige responsabilidad social.

3.1. ROL SUSTANTIVO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS RESPECTO A LA SOCIEDAD

El Marco Institucional del Gobierno Nacional, está constituido por los niveles de Gobierno Central con (33) treinta y tres entidades; (18) diez y ocho Ministerios, (11) once entidades que representan a los Poderes y Otras entidades del Estado y (04) cuatro entidades captadoras); (36) treinta y seis Universidades Nacionales; (01) una Asamblea Nacional de Rectores; (03) tres Organismos Descentralizados Autónomos; (60) sesenta Instituciones Públicas Descentralizadas las que incluyen la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y el Fondo Consolidado de Reserva; (102) ciento dos Sociedades de Beneficencia Pública; (05) cinco Entidades de Tratamiento Empresarial – ETES, cuya función esencial de creación es la búsqueda de la promoción de mejores estándares de vida hacia la población por lo que, distribuye sus funciones de acuerdo a la naturaleza de la Entidad conllevando a una mejor efectivización y eficiencia del servicio a prestar.

Es por ello, que el diseño organizacional de las organizaciones estatales influye en su capacidad para cumplir con las funciones asignadas y determinan la forma en la cual las decisiones son tomadas y la forma en la cual funciona su

organización interna, es decir, funcionarios y personal de las organizaciones estatales.

3.2. EL “INTERÉS PÚBLICO” O LOS “BIENES JURÍDICOS PROTEGIDOS

El modelo de Estado social y ambiental de derecho se postula como el medio idóneo para alcanzar el fin superior de conservación y uso racional, sostenible, equitativo y solidario de los bienes y servicios ambientales, asegurando a la vez, la protección y tutela del resto de los derechos humanos.

El carácter transversal, finalista y evolutivo del derecho ambiental, su condición de derecho humano fundamental y la consolidación de sus principios generales, en especial los de progresividad, no regresión, objetivación y precautorio, obligan un nuevo enfoque interpretativo de muchos de los institutos clásicos del derecho, entre ellos el del interés público.

De esta forma, existe una obligación estatal de acreditar, mediante estudios técnicos y científicos, la toma de decisiones en materia ambiental, ya sea en relación con actos administrativos individuales (autorizaciones, licencias, permisos) o bien, disposiciones de carácter general de cualquier rango o jerarquía (leyes, decretos, circulares, etc.), reforzando con ello el deber de contar siempre y en toda situación con posibilidad de impacto negativo sobre el ambiente, con estudios integrales, exhaustivos y comprehensivos que garanticen la no afectación o al menos, el menor impacto ambiental posible sobre el bien jurídico tutelado.

4. HIPOTESIS

La incorporación de la responsabilidad social pública en el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo mejora la protección al derecho a un medio ambiente sano debido a que incorpora herramientas y metodologías de sistematización para la medición de impactos ambientales y de concientización social, corrigiendo deficiencias en su operatividad como entidad gubernamental y en la aplicación correcta de instrumentos ambientales como el SINAPLAN, SEIA, PIGARS y el CEPLAN.

5. OBJETIVOS

5.1.GENERAL. –

- Analizar que la incorporación de la responsabilidad social pública aplicada en el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo mejora la protección al derecho a un medio ambiente sano.

5.2.ESPECÍFICOS

- Determinar si los criterios constitucionales y doctrinales de la sostenibilidad ambiental motivan la aplicación del modelo de responsabilidad social pública en el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo
- Analizar si los instrumentos estratégicos ambientales como el SINAPLAN, CEPLAN, SEIA y PIGARS posibilitan la aplicación de la responsabilidad social pública en el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo.
- Analizar las bases constitucionales que tutelan el derecho a un medio ambiente sano y el rol proteccionista del Estado para la salvaguarda del interés público mediante una gestión ambiental municipal.

III. MÉTODO

3.1.DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

- SEGÚN LA HERRAMIENTA METODOLÓGICA UTILIZADA

Es cualitativa, debido a que se aplicará, por un lado, una metodología cualitativa utilizando el análisis de documentos y las entrevistas con expertos como técnicas de recolección de datos, para poder revalidar el trabajo de estudio, y de esta forma permitirán sistematizar la información.

- SEGÚN EL OBJETO GENERAL

Es aplicada, pues lo que busca es resolver una problemática, la cual se define de acuerdo a la protección del derecho a vivir en un medio ambiente sano por la inobservancia de la aplicación de la ley de sostenibilidad ambiental, ley de protección de los recursos naturales y la ley general del ambiente; así como la aplicación superficial de criterios de gestión ambiental municipal.

3.2.VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN

- VARIABLE INDEPENDIENTE

- RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA EN EL SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO

- VARIABLE DEPENDIENTE

- DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO

3.3.POBLACIÓN Y MUESTRA

Por la naturaleza del trabajo de investigación de carácter cualitativo no se utilizará población ni muestra sino unidades de análisis consistentes en el estudio de pronunciamientos nacionales emitidos por el Tribunal Constitucional recaídos en los expedientes: EXP. N.º 00316-2011-PA/TC; EXP.Nº 03343-2007-PA/TC.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

- MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS

METODO DESCRIPTIVO Y ANALÍTICO.

3.4.TÉCNICAS

- ENTREVISTA:

Se trabajará en el presente trabajo de investigación con especialistas en derecho ambiental, personal gerencial encargado de dirigir el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo y fiscales titulares especializados en materia ambiental del Ministerio Público de La Libertad; para recopilar diferentes opiniones técnicas y profesionales que validen mi investigación.

- ANALISIS DOCUMENTAL

Se tomará como análisis jurisprudencias nacionales y pronunciamiento de corte extranjera en base a expedientes afines con el propósito que tiene el presente trabajo de investigación.

3.5.INSTRUMENTOS

- GUIA DE ENTREVISTA

Se realizará a 02 especialistas en derecho ambiental, 06 responsables de las gerencias administrativas incluyendo Gerencia General encargadas de la dirección en sus diversas dimensiones del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo y 02 fiscales titulares especializados en materia ambiental del Ministerio Público de La Libertad.

- FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL

Sobre pronunciamientos nacionales emitidos por el Tribunal Constitucional recaídos en los expedientes: EXP. N.º 00316-2011-PA/TC, EXP.Nº 03343-2007-PA/TC.

IV. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
4.1.FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL

Identificación de sentencia de primera instancia

ACCIONANTES: Empresa Minera de Servicios Generales S.R.L. y otros.

Referencia: Resolución número cinco, expedida en fecha 10 de agosto de 2010

Juzgado: Juzgado Mixto de Tambopata

Identificación de sentencia de segunda instancia

ACCIONANTES: Empresa Minera de Servicios Generales S.R.L. y otros

Sentencia: Resolución número Nueve, 19 de noviembre de 2010

Referencia: **EXP. N.º 00316-2011-PA/TC**

Juzgado: Sala Superior Mixta y de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios

Identificación de Sentencia del Tribunal Constitucional

MATERIA DEL RECURSO INTERPUESTO: Recurso de Agravio Constitucional

REFERENCIA: Resolución Número Nueve de fecha 19 de Noviembre de 2010.

ACCIONANTES: Empresa Minera de Servicios Generales S.R.L. y otros.

REFERENCIA: EXP. N.º 00316-2011-PA/TC

INSTANCIA: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

MAGISTRADOS: Álvarez Miranda, Urviola Hani, Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, Calle Hayen y Eto Cruz.

I. ANTECEDENTES

1. La empresa Minera de Servicios Generales S.R.L. y otros, con fecha 5 de marzo de 2010 interponen demanda de amparo contra la Presidencia del Consejo de Ministros con la finalidad de que se les inaplique el Decreto de Urgencia 012-2010. Alegan que con dicha norma se le afecta sus derechos a la no retroactividad de la ley, igualdad, propiedad y libertad de empresa. Afirma asimismo que el mencionado decreto tiene las características de norma auto aplicativa, según los parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional, entre otras, en la STC 1739-2009-PA/TC.
2. Los recurrentes afirman que se dedican a la minería aurífera en el Departamento de Madre de Dios, contando debidamente con los títulos de concesión minera respectivos, razón por la que han iniciado el trámite de los certificados ambientales. Expresan que tales trámites se han dado antes de la entrada en vigor del decreto de urgencia cuya inaplicabilidad se busca. Argumentan que son mineros formales y que

cumplen las normas ambientales, afectándose sus derechos de manera irregular con la aplicación del referido decreto.

3. El Procurador Público Ad Hoc de la Presidencia del Consejo de Ministros contesta la demanda, negándola y contradiciéndola en todos sus extremos. Alega que la norma cuestionada no puede ser considerada auto aplicativa, salvo el artículo 7 y el 8 que, no obstante, no violentan ningún derecho fundamental.
4. El Juzgado Mixto de Tambopata, con fecha 10 de agosto de 2010, declara infundada la demanda, al considerar que el artículo 7 del Decreto de Urgencia 012-2010 no vulnera ninguno de los derechos alegados por los accionantes, por que si bien los demandantes acreditan contar con título de concesión, no sucede lo mismo respecto del certificado ambiental, ya que, el haber iniciado los trámites para tal certificado no significa que tal solicitud tenga que ser aprobada automáticamente. En tal sentido, al entrar en vigencia el Decreto de Urgencia N.º 12-2010 rige para las situaciones en trámite no verificándose vulneración de los derechos adquiridos de los demandantes. En cuanto al artículo 8 del decreto de urgencia que dispone el decomiso de las dragas a efectos de convertirlas en inoperativas, el juez estima que tal limitación al derecho de propiedad se justifica en la necesidad pública, el interés nacional de garantizar la salud pública, el patrimonio natural, la recaudación tributaria, y el desarrollo de actividades sostenibles. Por último, sostiene que de acuerdo a la Constitución la libertad de empresa se ejerce en armonía con el orden público y las normas legales que lo regulan. Y vista la afectación a la salud y a otros bienes constitucionales provocado por el uso de las dragas, las limitaciones impuestas se encuentran justificadas.
5. La sala ad quem confirma la sentencia, por los mismos fundamentos.

II. PROBLEMA JURÍDICO RESUELTO POR EL JUEZ

Determinar si, ¿las normas contenidas en el referido decreto de urgencia son de naturaleza auto aplicativa, que vulneran su libertad de empresa?

III. PRETENSIÓN DE LA PARTE ACCIONANTE

1. La presente demanda de amparo tiene por objeto declarar inaplicable el Decreto de Urgencia N.º 012-2010. En el recurso de agravio constitucional los demandantes han sintetizado los argumentos de su demanda indicando que: (i) no son mineros informales ya que cuentan con una concesión minera, (ii) el Decreto de Urgencia N.º

012-2010 no supera el test de proporcionalidad porque no cumple con los principios establecidos en el artículo 118, inciso 19 de la Constitución, (iii) en pleno trámite para acceder a las certificaciones ambientales, se les impone las medidas normativas contenidas en el artículo 7.2 del Decreto de Urgencia. Esto es, “se les cambia las reglas de juego” trastocando sus derechos adquiridos (principio de irretroactividad) ya que el artículo 7.2 estipula que la certificación ambiental solo será otorgada si es que el estudio ambiental que la sustenta contiene los requisitos que se desarrollan en tal artículo, (iv) se le vulnera su derecho a la propiedad por cuanto el literal 7.2 c) dispone el decomiso de las dragas a efectos de convertirlas en inoperativas, siendo ello desproporcionado ya que no se consagra una escala de sanciones por incumplir la prohibición del uso de dragas y el artículo 8 dispone su decomiso para convertirlas en inoperativas, y; (v) como consecuencia de todo ello, estiman que se les ha vulnerado su libertad de empresa.

2. Los demandantes han referido que las normas contenidas en el referido decreto de urgencia son de naturaleza autoaplicativa, y por lo tanto, factibles de ser cuestionadas mediante una demanda de amparo. De otro lado, en virtud del test de proporcionalidad afirma que el decreto de urgencia no es una medida idónea porque contraviene lo estipulado por la Constitución en el artículo 118°, inciso 19, ya que no se habría cumplido con regular medidas extraordinarias de naturaleza económica y financiera, ni con el criterio de excepcionalidad ni transitoriedad.

IV. ARGUMENTOS FUNDAMENTALES DEL JUEZ SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN

- CUESTIONES PREVIAS

1. Es importante indicar que el Decreto de Urgencia N.º 12-2010 fue derogado por la Decimo Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.º 1100, del 18 de febrero de 2012. Si bien las partes no han presentado consideraciones al respecto, es factible que se argumente que se ha generado una sustracción de la materia. No obstante, en virtud de la finalidad de los procesos constitucionales (art. II del Código Procesal Constitucional), el principio de *iura novit curia* (art. VIII del referido Código) y la función pacificadora de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, es pertinente analizar el petitorio de los demandantes a la luz de las normas que regulan aspectos similares a los cuestionados por los demandantes, como

lo son ciertas disposiciones del Decreto Legislativo N.º 1100 que serán analizados en los subsiguientes fundamentos.

- FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1. La diversidad geográfica y biológica del territorio nacional, junto con la riqueza de recursos naturales, brinda oportunidades para su aprovechamiento en beneficio de la sociedad y la dignidad de la persona. La región de Madre de Dios, es un ejemplo palpable de ello, en donde coexiste la extracción de minerales y los hidrocarburos, el cultivo de castañas, el ecoturismo y la explotación maderera. Cada una de estas actividades económicas debe guardar una especial relación con el ambiente, debiendo desarrollar una industria sostenible y amigable con el ecosistema. Lamentablemente, determinadas razones han llevado a que se registren una serie de problemas, que afectan al ambiente y a la población de Madre de Dios.
2. *El Tribunal afirmó que el carácter social de nuestro régimen determina que el Estado no pueda permanecer indiferente ante las actividades económicas de los particulares, lo que, por cierto, en modo alguno supone la posibilidad de interferir de manera arbitraria e injustificadamente en el ámbito de libertad reservado a los agentes económicos. En una economía social de mercado, tanto los particulares como el Estado asumen deberes específicos; en el primer caso, el deber de ejercitar las referidas libertades económicas con responsabilidad social, mientras que, en el segundo, el deber de ejercer un rol vigilante, garantista y corrector, ante las deficiencias y fallos del mercado, y la actuación de los particulares. En la actualidad, existe consenso en señalar que la actividad empresarial, siendo esencialmente lucrativa, no se opone a asumir una responsabilidad social. El concepto de responsabilidad social de la empresa tiene diversos ámbitos de aplicación, de un lado, el interno: relativo al respeto de los derechos laborales de los trabajadores, así como al buen gobierno corporativo; y de otro lado, el externo, que enfatiza más las relaciones entre la empresa, la comunidad y su entorno (fundamentos 21-25).*
3. *Lo que la Constitución dice es que el ejercicio de estos derechos debe ser acorde con la función social del Estado y con el ejercicio de los demás derechos fundamentales. En este sentido, en la STC 10063-2005-PA/TC se precisó que “si bien la privatización de la seguridad social en salud puede generar en las empresas prestadoras del servicio la consecución de una finalidad de lucro, éstas no pueden*

ni deben ejecutar sus prestaciones menoscabando la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, ya que son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.

V. DECISIÓN DEL JUEZ

- De acuerdo a lo expuesto es claramente deducible que el derecho a la empresa de las demandantes tampoco ha sido vulnerado. Y es que la libertad de empresa “traspasa sus límites cuando es ejercido en contra de la moral y las buenas costumbres, o pone en riesgo la salud y la seguridad de las personas. Consecuentemente, el ejercicio del derecho a la libertad de empresa, para estar arreglado a derecho, ha de hacerse con sujeción a la ley y, por ello, dentro de las limitaciones básicas que se derivan de la seguridad, la higiene, la salud, la moralidad o la preservación del medio ambiente” (STC 3330-2004-PA/TC, fund. 32). Por consiguiente, como se ha apreciado, la normativa cuestionada se enmarca dentro de parámetros razonables al delimitar la actividad de los demandantes.

Declarar INFUNDADA la demanda.

Identificación de Sentencia de Primera Instancia

JUZGADO: Juzgado Especializado en lo Civil de San Martín

Referencia: Resolución número seis; con fecha 31 de enero de 2007.

Identificación de Sentencia de Segunda Instancia

JUZGADO: Primera Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de San Martín.

REFERENCIA: Resolución número ocho; con fecha 10 de mayo de 2007.

Identificación de Tribunal Constitucional

MATERIA DEL RECURSO: Recurso de Agravio Constitucional

MAGISTRADOS: Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Eto Cruz y Álvarez Miranda

REFERENCIA: Resolución número seis; con fecha 31 de enero de 2007.

EXPEDIENTE: N° 03343-2007-PA/TC

DEMANDA

- HECHOS DE LA DEMANDA

1. Con fecha 13 de octubre de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo contra las empresas Occidental Petrolera del Perú; LLC, Sucursal del Perú (hoy Talismán Petrolera del Perú, LC Sucursal del Perú), Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú (e adelante REPSOL) y Petrobras Energía Perú S.A. (en adelante TROBRAS), por considerar que se amenazan sus derechos a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado desarrollo de su vida; a la vida, el libre desarrollo y el bienestar; a la protección de la salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa; a exigir del Estado la promoción de la conservación de la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas; alimentación; y al agua. Solicitan que se repongan las cosas al momento en que se inició la amenaza de violación de dichos derechos y se suspenda la exploración y la eventual explotación de hidrocarburos en el área natural protegida "Cordillera Escalera".
2. Alega que en el Lote 103 (área a explorar y explotar) se encuentra el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, establecida mediante Decreto Supremo N° 045-2005-AG. Dicha área tiene especial importancia por su biodiversidad y como fuente captadora y almacenadora de agua ya que ahí nacen las tres cuencas hidrográficas (Cumbaza, Caynarachi y Shanusi) que son

la única fuente proveedora de agua con la que cuenta la población de zonas aledañas. Manifiesta que la explotación petrolera implica que millones de litros de agua de producción petrolera con alta salinidad serán extraídos del subsuelo y aflorarán a la superficie contaminando y devastando el medio ambiente (principalmente el agua), pues dichas aguas saladas suelen ser vertidas a los cauces de los ríos. Además, indica que la exploración se está realizando incumpliendo lo previsto en el artículo 27 de la Ley N. ° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, el que establece que el aprovechamiento de los recursos naturales en áreas naturales protegidas sólo podrá ser autorizado si resulta compatible con la categoría, la zonificación asignada y el Plan Maestro.

- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

- a) PROCURADURÍA PÚBLICA A CARGO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS EL PROCURADOR PÚBLICO A CARGO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES, CON FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2006, CONTESTA LA DEMANDA Y SOLICITA QUE SEA DECLARADA IMPROCEDENTE .

Sostiene que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no ha violado precepto constitucional alguno, por cuanto mediante la Resolución Directoral N° 360-2006- MEM/ AAE, del 4 de julio de 2006, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del MEN aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Sísmica de la Estructura Pihuicho en el Lote 103, presentado por OXY.

- b) OCCIDENTAL PETROLERA DEL PERÚ; LLC, SUCURSAL DEL PERÚ (OXY) Y REPSOL EXPLORACIÓN PERÚ, SUCURSAL DEL PERÚ (REPSOL)

Con fecha 21 de noviembre de 2006, OXY y REPSOL contestan la demanda solicitando que sea declarada improcedente o infundada. Aducen que la ejecución del programa de exploración sísmica de la estructura Pihuicho en el lote 103 se inició el 22 de julio de 2006, luego de que obtuviera todas las autorizaciones, y concluyó en su totalidad el 28 de octubre de 2006 por lo que es de aplicación lo previsto en el inciso 5 del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. Además, señalan que el Tribunal Constitucional ha desarrollado u amplia jurisprudencia según la cual los procesos de amparo que requieran de

una etapa probatoria debido a la naturaleza o la complejidad de la materia controvertida será declarados improcedentes.

Por otra parte, sostienen que el demandante no ofrece pruebas que sustenten sus afirmaciones; que la calificación de un territorio como "área natural protegida" no implica que dicha área no pueda ser materia de actividades humana; que no se ha realizado actividades de explotación de recursos que puedan calificarse como "aprovechamiento" de recursos naturales; y, que para la realización del programa de exploración sísmica se cumplió una serie de exigentes y especializados requisitos ante todas las autoridades competentes.

c) PETROBRAS ENERGÍA PERÚ (PETROBRAS)

Petrobras, con fecha 21 de diciembre de 2006, contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente o infundada. Alega que en el caso de autos es necesario actuar medios probatorios que permitan demostrar si existe una amenaza de daño al ambiente, así como la relación de causalidad entre las actividades de exploración y la supuesta amenaza; por lo que en aplicación del artículo 9° del Código Procesal Constitucional y en atención a la reiterada y uniforme jurisprudencia que en ese sentido ha emitido el Tribunal Constitucional, considera que el Juzgado deberá declarar procedente la demanda. Asimismo, manifiesta que el establecimiento de un área natural protegida no es, necesariamente, incompatible con la realización de actividades económicas al interior de la misma, y que, por el contrario, es lícito su desarrollo, cumpliendo para ello con obtener las autorizaciones exigidas por las normas vigentes y respetando las normas en materia ambiental. Sobre la aplicación de los principios de prevención y precautorio, sostiene que no es posible utilizar los principios generales del Derecho, entre ellos los que forman parte del Derecho Ambiental, para tipificar infracciones y, por lo tanto, imponer sanciones a los particulares, toda vez que los mismos desempeñan una función eminentemente orientadora para las autoridades y para la ciudadanía en general respecto a los alcances de las normas legales. A su entender, el principio de prevención ya ha sido debidamente aplicado por la autoridad en el procedimiento de evaluación y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del lote 103, por lo que su invocación en la demanda como fundamento de la pretensión carece de sustento. Señala que para la aplicación del principio

precautorio se requiere acreditar, de manera conjunta, la concurrencia de: a) la existencia de daño grave e irreversible; b) la incertidumbre científica e indicios consistentes de amenaza, y, c) la adopción de medidas para prevenir las afectaciones al ambiente. Tales supuestos no han sido acreditados por el actor.

RATIO DECIDENDI (ARGUMENTOS FUNDAMENTALES DEL JUEZ PARA DECIDIR SOBRE LAS PRETENSIONES DEL LITIGIO.)

- EN PRIMERA INSTANCIA

1. El Juzgado Especializado en lo Civil de San Martín, con fecha 31 de enero de 2007, **DECLARA INFUNDADA** la demanda argumentando que en las conclusiones del informe técnico presentado por el perito de la especialidad de ingeniería ambiental, se aprecia que el impacto donde se realizaron los trabajos de exploración ha sido mínimo y que no se ha utilizado agua para dichos trabajos, más allá del agua para consumo humano directo del personal que laboró en dichas obras; asimismo, agrega que la muestra tomada para análisis de la Quebrada del río Charapillo arroja que el agua necesita tratamiento previo para el consumo humano, mas no se aprecia niveles de contaminación relevantes o que representen un peligro para la población de zonas aledañas.

- EN SEGUNDA INSTANCIA

1. La Primera Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de San Martín, con fecha 10 de mayo de 2007, **CONFIRMA LA APELADA** considerando que de la lectura del Informe N° 082-2006-MEM-AAE/MB, el mismo que versa sobre la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de exploración sísmica de la estructura Pihuicho en el lote 103, desprende que se ha emitido una opinión favorable para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), de acuerdo a lo establecido en el Decreto supremo N° 015-2006-EM, por lo que no existe amenaza de violación al medio ambiente; y que del peritaje obrante en autos se colige que no se ha generado impactos ambientales de envergadura, habiéndose determinado que en las operaciones de análisis sísmico experimental realizado por las emplazadas, no se hizo uso del recurso hídrico, precisándose que no existe afectación directa o indirecta sobre el agua superficial y subterránea que atente contra el uso y consumo humano.

RECURSO DE APELACIÓN

- PETITORIO DE LA DEMANDA

El objeto de la presente demanda de amparo es que se suspenda la exploración y eventual explotación de hidrocarburos en el Área de Conservación Regional denominada Cordillera Escalera. Alega el demandante que tal situación amenaza su derecho constitucional a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado. En ese sentido, se analizará si es que efectivamente existe una amenaza, o inclusive una afectación, al referido derecho constitucional, verificándose para ello si las actividades realizadas por los n dos implican amenaza o afectación al ecosistema del Área de Conservación Regional denominada Cordillera Escalera (en adelante ACR Cordillera Escalera).

- ELEMENTOS DE CONVICCIÓN

Es del caso precisar que a efectos de mejor resolver y conforme al artículo 119 del Código Procesal Constitución 1, este Tribunal Constitucional solicitó información a las instituciones que a continuación se detallan:

- a) Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), que remitió la información solicitada mediante Oficio N.O 342-2008-INRENA-IANP-DPANP.
- b) Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA), que remitió la información solicitada mediante Oficio N.O 253- 2008/MIMDES-DGPOA.
- c) Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, que remitió la información solicitada mediante Oficio N.O 1426- 2008/MEM -AAE.
- d) PERUPETRO S.A., que remitió la información solicitada mediante Oficio GGRL-PRRC-GFPC-0240-2008.)
- e) Defensoría del Pueblo, que remitió el Oficio N.O 191-2008-DP/ASPMA.

- PROBLEMA JURÍDICO A SER RESUELTO POR EL JUEZ

A efectos de dilucidar la controversia originada en el presente caso, este Tribunal

considera pertinente pronunciarse respecto de los siguientes temas:

1. Derecho a un ambiente equilibrado y adecuado
2. Medio ambiente y Constitución ecológica.

3. Desarrollo sostenible y generaciones futuras
4. Medio ambiente y principio de prevención
5. Medio ambiente y responsabilidad social de la empresa
6. Comunidades nativas y medio ambiente
 - a) Derecho a la identidad étnica y cultural
 - b) Convenio 169 de la OIT y recursos naturales

- ARGUMENTOS FUNDAMENTALES DEL JUEZ SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN

1. La perspectiva del desarrollo sostenible busca equilibrar el esquema de la economía social de mercado con el derecho a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado. Es una maximización de las ganancias o utilidad frente a la calidad del entorno que sufre el desgaste de la actividad económica. En tal sentido, con el principio sostenibilidad (artículo V de la Ley General del Ambiente) se pretende modular esta actividad económica a la preservación del ambiente, el mismo que tendrá que servir de soporte vital también para las generaciones venideras. Así, los derechos de las actuales generaciones no deben ser la ruina de las aspiraciones de las generaciones futuras. Cabría advertir, no obstante, que no se trata de preservar exclusivamente el legado ambiental, sino también aspectos relativos al ámbito cultural. Es decir, que nuestra deuda con las generaciones futuras no se agota en aspectos ambientales, que, si bien forman parte esencial del concepto desarrollo sostenible, no se agota en él.
2. La cristalización del principio de prevención "se encuentra en la acción que el Estado debe adoptar para prevenir un daño al medio ambiente que, en la actualidad, es potencial. Con él se pretende prevenir, por ejemplo:

"La extinción de las especies de la flora y fauna (...); la contaminación de los mares por petróleo, desechos radioactivos, desperdicios y sustancias peligrosas, de fuentes terrenas o de cualquier fuente); contaminación de los ríos (...) violenta modificación del ambiente; efectos adversos de las actividades que previenen la migración de especies; contaminación del aire; modificación de la capa de ozono; degradación del ambiente natural ; toda clase de contaminación; implicancias adversas de los impactos ambientales (...); y pérdida de la biodiversidad (...)

Al respecto, Iturregui encuentra la aplicación del referido principio en las políticas nacionales de prevención, tales como " los sistemas de evaluación del impacto ambiental y los controles directos sobre la contaminación, como en los estándares de emisión de licencias ambientales " (FOY; Pierre y otros: Derecho Internacional Ambiental. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima; 2003, pp. 85-86).

3. El carácter social de nuestro régimen determina que el Estado no pueda permanecer indiferente ante las actividades económicas de los particulares, lo que, por cierto, en modo alguno supone la posibilidad de interferir de manera arbitraria e injustificadamente en el ámbito de libertad reservado a los agentes económicos.
4. En una economía social de mercado, tanto los particulares como el Estado asumen deberes específicos; en el primer caso, el deber de ejercitar las referidas libertades económicas con responsabilidad social, mientras que, en el segundo, el deber de ejercer un rol vigilante, garantista y corrector, ante las deficiencias y fallos del mercado, y la actuación de los particulares.
5. En la actualidad, existe consenso en indicar que la actividad empresarial, siendo esencialmente lucrativa, no se opone a que asuma su responsabilidad social. Los efectos que las empresas generan han suscitado que se tomen ciertas medidas a fin de lograr una inserción más pacífica de la empresa en la sociedad. Es así como se ha desarrollado el concepto de responsabilidad social de la empresa, que tiene diversos ámbitos de aplicación como el interno: el relativo al respeto de los derechos laborales de los trabajadores y al clima laboral interno, así como al buen gobierno corporativo; y el externo, que enfatiza más las relaciones entre la empresa y la comunidad y su entorno.
6. Así mismo, señala que la finalidad de lucro debe ir acompañada de una estrategia previsor del impacto ambiental que la labor empresarial puede generar. La Constitución no prohíbe que la empresa pueda realizar actividad extractiva de recursos naturales; lo que ordena la Constitución es que dicha actividad se realice en equilibrio con el entorno y con el resto del espacio que configura el soporte de vida y riqueza natural y cultural. De lo contrario, si la actividad empresarial genera pasivos ambientales, se habrá cumplido

seguramente con la finalidad de lucro, a un costo que el Estado y la sociedad no soportarán. 25. Así, la estabilidad que una empresa requiere para desarrollar su actividad, no solo depende del orden que desde el Estado se pueda generar, sino también de la propia acción de las empresas las que tendrán que cumplir un rol protagónico y comunicativo a través de su responsabilidad social.

- **DECISIÓN DEL JUEZ**

Declarar **FUNDADA** la demanda. En consecuencia, queda prohibida la realización de la última fase de la etapa de exploración y la etapa de explotación dentro del Área de Conservación Regional denominada Cordillera Escalera hasta que no se cuente con el Plan Maestro, pudiendo reiniciar tal actividad una vez que éste haya sido elaborado y se establezca la compatibilidad entre la actividad de exploración y explotación y los objetivos del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera. En caso de que ya se encuentre en ejecución la última fase de la etapa de exploración o la etapa de explotación, dichas actividades deben quedar inmediatamente suspendidas.

4.2.CUADRO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ENTREVISTA

- ENTREVISTA A ESPECIALISTAS EN MATERIA AMBIENTAL

<div> <div>PREGUNTAS</div> <div>ENTREVISTADOS</div> </div>	PREGUNTA 1	PREGUNTA 2	PREGUNTA 3	PREGUNTA 4	PREGUNTA 5
	¿CONSIDERA USTED, ¿QUE EL SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO ESTÁ CUMPLIENDO CON SU NATURALEZA DE CREACIÓN OTORGANDO UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA A LOS CIUDADANOS DE TRUJILLO?	CONSIDERA USTED, ¿QUE SERÍA VIABLE LA APLICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA CON ENFOQUE ÉTICO-ESTRATEGICO EN EL SEGAT PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS INSTITUCIONALES IMPONIENDO LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL COMO EJE RECTOR Y LA CONSECUENTE TUTELA DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO?	CONSIDERA USTED, ¿QUE LA APLICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA EN UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO COMO EL SEGAT CON UN ENFOQUE ÉTICO-ESTRATÉGICO ES COMPATIBLE EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO AMBIENTAL?	CONSIDERA USTED, ¿QUE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN MECANISMO RETRIBUTIVO DEL DAÑO AMBIENTAL CAPAZ DE GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO EN GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL COMO LO ES EL SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO?	CONSIDERA USTED, ¿QUE LOS LINEAMIENTOS SOBRE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y PROTECCIÓN A LA CALIDAD ATMOSFÉRICA QUE INCORPORA POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE SON DEBIDAMENTE RECOGIDOS POR EL SEGAT PARA EL PLANTEAMIENTO DE SUS METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES?.ASÍ MISMO ¿RESULTAN COMPATIBLES LAS METAS Y OBJETIVOS IMPUESTOS POR EL SEGAT CON LA REALIDAD AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE TRUJILLO?
ANTONIO ANTAY BOLAÑOS DOCTOR EN DERECHO DOCENTE DE UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO	NO	SI	SI	SI	NO
OSCAR HUMBERTO MORENO RUBIÑOS DOCENTE DE UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO INTENDENTE REGIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL DE LA LIBERTAD EN SUNAFIL	NO	SI	SI	SI	NO
PATRICIA VIVIANA PONCE SAAVEDRA FISCAL PROVINCIAL DE LA SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL TRANSITORIA ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL DE LA LIBERTAD	NO	SI	SI	SI	NO
JORGE MANUEL BELTRAN SAENZ FISCAL PROVINCIAL ADJUNTO DE LA FISCALÍA MIXTA ESPECIALIZADA DE LA ESPERANZA	NO	SI	SI	SI	NO

- ENTREVISTA A LOS RESPONSABLES DE LAS OFICINAS ENCARGADAS EN MATERIA AMBIENTAL EN EL SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO (SEGAT)

A. GERENCIA GENERAL

PREGUNTAS ENTREVISTADOS	PREGUNTA 1	PREGUNTA 2	PREGUNTA 3	PREGUNTA 4	PREGUNTA 5	PREGUNTA 6	PREGUNTA 7	PREGUNTA 8
	CONSIDERA USTED, ¿QUE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN MECANISMO NECESARIO EN LA ACTUALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTRATÉGICAS Y/O OPERACIONALES DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO?	CONSIDERA USTED, ¿Qué LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN INSTRUMENTO VITAL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y UNA FORMA EFICIENTE PARA REDUCIR EL DAÑO AMBIENTAL EXISTENTE?	CONSIDERA USTED, ¿QUE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA APLICADO DESDE UN ENFOQUE ÉTICO-ESTRATÉGICO PROMUEVE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y LA TUTELA DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO?	¿QUE ESTRATEGIAS HA TOMADO EL SEGAT DENTRO DE SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS PERÍODOS 2017-2018?	¿QUE INSTRUMENTOS LEGALES APLICA EL SEGAT EN LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL? Y ¿Qué RESULTADOS SE HAN OBTENIDO DE SU APLICACIÓN?	¿CÓMO MIDEN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS COMO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO?	¿CONSIDERAN AL PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL COMO UN ELEMENTO ESENCIAL PARA PODER ASUMIR NUEVOS COMPROMISOS Y METAS A NIVEL SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL?	¿QUE ACCIONES HA TOMADO EL SEGAT EN LOS PERÍODOS 2017-2018 PARA MONITOREAR Y EVALUAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL?
ARQUITECTO CÉSAR FERNANDO DÍAZ ALARCÓN – GERENTE GENERAL DEL SEGAT	SI	SI	SI	-INICIAR LOS TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DEL RELLENO SANITARIO - TERCERIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA.	- INSTRUMENTOS ORDENANZA MUNICIPAL N°003-2008-MPT DIRECTIVAS DE LA OEFA LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS N°1065. - RESULTADOS REDUCCIÓN DE ACTIVIDADES QUE VAN EN CONTRA DEL MEDIO AMBIENTE -PROMOVER LA TUTELA DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO.	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PERÍODO: TRIMESTRAL	SI	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA EJERCER FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN CAPACITACIÓN AL PROFESIONAL TÉCNICO PERMANENTE ENTRE OTROS.

B. OFICINA DE ASUNTOS LEGALES

<div>PREGUNTAS</div> <div>ENTREVISTADOS</div>	PREGUNTA 1	PREGUNTA 2	PREGUNTA 3	PREGUNTA 4
	CONSIDERA USTED, ¿QUE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN MECANISMO NECESARIO EN LA ACTUALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTRATÉGICAS Y/O OPERACIONALES DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO?	CONSIDERA USTED, ¿Qué LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN INSTRUMENTO VITAL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y UNA FORMA EFICIENTE PARA REDUCIR EL DAÑO AMBIENTAL EXISTENTE?	EN SU CALIDAD DE ASESOR LEGAL DEL SEGAT, ¿QUE DISPOSITIVOS E INSTRUMENTOS LEGALES UTILIZA PARA DETERMINAR, EJECUTAR Y CUMPLIR OBJETIVOS Y METAS DE SU AREA?	¿EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL QUE ELABORA SU ÁREA SE REALIZA DE MANERA ESTRATÉGICA?, DE SER AFIRMATIVO, ¿CÓMO MIDE EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS?
ABOGADO PEDRO ENRIQUE MENACHO RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE ASUNTOS LEGALES DEL SEGAT	SI	SI	DOCUMENTOS DE GESTIÓN COMO: REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (R.O.F.) MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (M.O.F.)	R1: TIENE UNA PROYECCIÓN ESTRATÉGICA CUYO FIN ES EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO ÁREA. R2: SE EVALÚA A TRAVÉS DEL DESEMPEÑO DEL AREA CON RESPECTO A AÑOS PASADOS MEDIANTE UNA TAULACIÓN CON EL P.O.I ANTERIOR

C. SUB GERENCIA DE CALIDAD AMBIENTAL Y PROYECTOS

<div> PREGUNTAS ENTREVISTADOS </div>	PREGUNTA 1	PREGUNTA 2	PREGUNTA 3	PREGUNTA 4	PREGUNTA 5	PREGUNTA 6	PREGUNTA 7
	CONSIDERA USTED, ¿QUE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN MECANISMO NECESARIO EN LA ACTUALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTRATÉGICAS Y/O OPERACIONALES DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO?	CONSIDERA USTED, ¿Qué LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN INSTRUMENTO VITAL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y UNA FORMA EFICIENTE PARA REDUCIR EL DAÑO AMBIENTAL EXISTENTE?	CONSIDERA USTED, ¿QUE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA APLICADO DESDE UN ENFOQUE ÉTICO-ESTRATÉGICO PROMUEVE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y LA TUTELA DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO?	¿QUE ESTRATEGIAS HA TOMADO SU ÁREA DENTRO DE SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS PERÍODOS 2017-2018?	¿QUE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROMUEVE Y APLICA SU ÁREA?	¿CON QUE FRECUENCIA SE ELABORAN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL QUE INVOLUCRAN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS?	¿QUE CRITERIOS Y ELEMENTOS TOMA SU ÁREA PARA ELABORAR SU PLAN OPERATIVO Y DE ACCIÓN?
BIÓLOGA ROSA MARÍA SANTACRUZ BRENES SUB GERENTE DE CALIDAD AMBIENTAL Y PROYECTOS	SI	SI	SI	ELABORACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES QUE FOMENTEN LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CHARLAS ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL EN I.E. Y CENTROS DE FORMACIÓN.	SON CONSTANTES MEDIANTE CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES PARA EJECUTARLAS DURANTE TODO EL AÑO FISCAL.	R1: TIENE UNA PROYECCIÓN ESTRATÉGICA CUYO FIN ES EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO ÁREA. R2: SE EVALÚA A TRAVÉS DEL DESEMPEÑO DEL AREA CON RESPECTO A AÑOS PASADOS MEDIANTE UNA TAULACIÓN CON EL P.O.I ANTERIOR

D. UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

<div> PREGUNTAS ENTREVISTADOS </div>	PREGUNTA 1	PREGUNTA 2	PREGUNTA 3	PREGUNTA 4	PREGUNTA 5	PREGUNTA 6
	CONSIDERA USTED, ¿QUE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN MECANISMO NECESARIO EN LA ACTUALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTRATÉGICAS Y/O OPERACIONALES DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO?	CONSIDERA USTED, ¿Qué LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN INSTRUMENTO VITAL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y UNA FORMA EFICIENTE PARA REDUCIR EL DAÑO AMBIENTAL EXISTENTE?	CONSIDERA USTED, ¿QUE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA APLICADO DESDE UN ENFOQUE ÉTICO-ESTRATÉGICO PROMUEVE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y LA TUTELA DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO?	¿QUE ESTRATEGIAS HA TOMADO SU ÁREA DENTRO DE SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS PERÍODOS 2017-2018?. Y ¿Qué RESULTADOS SE HAN OBTENIDO DE SU APLICACIÓN?	CONSIDERA USTED, ¿Qué EL PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL COMO UN ELEMENTO ESENCIAL PARA PODER ASUMIR NUEVOS COMPROMISOS Y METAS A NIVEL SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL?	¿QUÉ POLITICAS Y ESTRATEGIAS HA ESTABLECIDO SU DEPENDENCIA PARA LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LAS NORMAS Y/O DISPOSICIONES AMBIENTALES MUNICIPALES ASÍ COMO PARA SU EFECTIVO CUMPLIMIENTO?
ABOGADO CARLOS EDUARDO SÁNCHEZ CAIPO JEFE DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	SI	SI	SI	R1: TIENE UNA PROYECCIÓN ESTRATÉGICA CUYO FIN ES EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO ÁREA. R2: SE EVALÚA A TRAVÉS DEL DESEMPEÑO DEL AREA CON RESPECTO A AÑOS PASADOS MEDIANTE UNA TAULACIÓN CON EL P.O.I ANTERIOR	SI	OPERATIVOS INOPINADOS LAS 24 HORAS FIN: IMPONER EL PRINCIPIO DE AUTORIDAD. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS NACIONALES Y LOCALES QUE DEBEN SER ACATADOS POR LOS ADMINISTRADOS.

E. SUB GERENCIA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL

<div>PREGUNTAS</div> <div>ENTREVISTADOS</div>	PREGUNTA 1	PREGUNTA 2	PREGUNTA 3	PREGUNTA 4	PREGUNTA 5	PREGUNTA 6	PREGUNTA 7
	CONSIDERA USTED, ¿QUE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN MECANISMO NECESARIO EN LA ACTUALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTRATÉGICAS Y/O OPERACIONALES DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO?	CONSIDERA USTED, ¿Qué LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN INSTRUMENTO VITAL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y UNA FORMA EFICIENTE PARA REDUCIR EL DAÑO AMBIENTAL EXISTENTE?	CONSIDERA USTED, ¿QUE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA APLICADO DESDE UN ENFOQUE ÉTICO-ESTRATÉGICO PROMUEVE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y LA TUTELA DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO?	¿QUE ESTRATEGIAS HA TOMADO SU ÁREA DENTRO DE SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS PERÍODOS 2017-2018?	¿CUAL ES EL TRATAMIENTO Y TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE TRUJILLO? Y ¿Qué CRITERIOS TOMA EL SEGAT PARA DETERMINAR UN AREA COMO DE MAYOR RIESGO?	¿QUÉ POLÍTICAS RETRIBUTIVAS DEL DAÑO AMBIENTAL EJERCE EL SEGAT PARA ELIMINAR LA INCINERACIÓN NO CONTROLADA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PROPICIAR SU REEMPLAZO POR OTROS MÉTODOS DE BAJO IMPACTO SOBRE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA?	¿ QUE ACCIONES HA REALIZADO EL SEGAT ANTE EL PROBLEMA AMBIENTAL DEL BOTADERO MUNICIPAL UBICADO EN EL MILAGRO?
ING.MARCO ANTONIO BOCANEGRA RODRÍGUEZ (SUB GERENTE DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)	SI	SI	SI	-ASEGURAR MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DIARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE DESCARGAN EN LAS PLATAFORMAS DEL CENTRO DE DISPOSICIÓN UBICADO EN EL CENTRO POBLADO EL MILAGRO. -REALIZAR COBERTURAS MENSUALMENTE CON MATERIAL DE PIEDRA PARA LA COBERTURA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EL CONTROL DE VECTORES ASÍ COMO LA RESPECTIVA CONSISTENCIA DE LOS TERRENOS ASIGNADOS PARA TAL FIN. -SE HA FORTALECIDO LA COORDINACIÓN CON LOS DISTRITOS USUARIOS DEL CENTRO DE DISPOSICIÓN A EFECTOS DE INVOLUCRARLOS EN EL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL UBICADO EN EL MILAGRO. FORTALECER EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA EN TODO EL DISTRITO DE TRUJILLO.	R1: CON RESPECTO A SUSTANCIAS PELIGROSAS NO HAY LUGAR ESPECIAL R2. RESPECTO AL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ES DE COMPETENCIA DE DIGESA POR NORMATIVA ESPECIAL. R3: RESPECTO A LOS CRITERIOS RESTRICATIVOS Y SELECTIVOS EN BASE AL VOLUMEN Y UBICACIÓN DE AREAS GENERADORAS DE MAYOR CANTIDAD DE RESIDUOS PELIGROSOS.	GENERAR UNA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA SER TRATADOS ANTES DE SU DISPOSICIÓN FINAL. SE PROPONE LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE CONTROL DE INCENDIO EN LAS PLATAFORMAS DE DISPOSICIÓN FINAL.	-CONTAR CON UN TERRENO DE 66, 67 HECTAREAS CEDIDO POR EL GOBIERNO REGIONAL QUE YA SE ENCUENTRA SANEADO CON OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE PARA UNA SEGUNDA ETAPA. IMPULSAR UN PROYECTO DE INVERSIÓN PRIVADA A COSTO CERO PARA LA EJECUCIÓN DE UNA PLANTA INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

F. OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

<div> <div>PREGUNTAS</div> <div>ENTREVISTADOS</div> </div>	PREGUNTA 1	PREGUNTA 2	PREGUNTA 3	PREGUNTA 4	PREGUNTA 5	PREGUNTA 6
	<p>CONSIDERA USTED, ¿QUE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN MECANISMO NECESARIO EN LA ACTUALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTRATÉGICAS Y/O OPERACIONALES DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO?</p>	<p>CONSIDERA USTED, ¿QUE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN INSTRUMENTO VITAL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y UNA FORMA EFICIENTE PARA REDUCIR EL DAÑO AMBIENTAL EXISTENTE?</p>	<p>CONSIDERA USTED, ¿QUE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA APLICADO DESDE UN ENFOQUE ÉTICO-ESTRATÉGICO PROMUEVE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y LA TUTELA DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO?</p>	<p>¿Qué INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL APLICA EL SEGAT EN LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL? Y ¿Qué RESULTADOS SE HAN OBTENIDO DE SU APLICACIÓN?</p>	<p>¿CÓMO MIDEN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS COMO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO?</p>	<p>CONSIDERA QUE, ¿EL PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL ES UN ELEMENTO ESENCIAL PARA PODER ASUMIR NUEVOS COMPROMISOS Y METAS A NIVEL SOCIAL, ECONÓMICOS Y AMBIENTAL?</p>
<p>C.P.C. CARLOS ALFREDO VÁSQUEZ NAMAY (JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO)</p>	SI	SI	SI	<p>DOCUMENTOS DE GESTIÓN COMO: REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (R.O.F.) MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (M.O.F.) Cuadro de Asignación de Personal (C.A.P) EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (P.E.I.) EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (P.I.A.) REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO (R.I.T.)</p>	<p>MEDIANTE LA EVALUACIÓN TRIMESTRAL A TRAVÉS DE UN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (P.O.I.).</p>	SI

4.3. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS

Para llegar a contrastar mi hipótesis “la incorporación de la responsabilidad social pública aplicada en el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo mejora la protección al derecho a un medio ambiente sano debido a que permite aplicar de manera correcta los instrumentos ambientales como el SINAPLAN, SEIA, PIGARS y el CEPLAN para la evaluación del impacto ambiental conllevando al cumplimiento eficiente de las metas ambientales proyectadas” Se ha realizado la entrevista a los siguientes expertos:

- **ENTREVISTA A ESPECIALISTAS EN MATERIA AMBIENTAL**

- **VARIABLE INDEPENDIENTE:**

- I. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA EN EL SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO**

- RESPECTO A LA PREGUNTA 3: CONSIDERA USTED, ¿QUE LA APLICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA EN UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO COMO EL SEGAT CON UN ENFOQUE ESTRATÉGICO ES COMPATIBLE EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO AMBIENTAL?

1. **El Doctor en Derecho, Antonio Antay Bolaños** considera que con respecto a los lineamientos propuestos para la aplicación del modelo de responsabilidad social pública en organismos públicos descentralizados dotados de personería jurídica autónoma de jurisdicción municipal en materia ambiental resultan ser compatibles con nuestro ordenamiento jurídico en materia ambiental en razón de la naturaleza y fin que persigue, radicando en la tutela del derecho a un medio ambiente sano, siendo materia de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional en el que atribuye que la responsabilidad social de la empresa tiene diversos ámbitos de aplicación, de un lado, el interno; el relativo al respeto de los derechos laborales de los trabajadores, así como al buen gobierno corporativo; y de otro lado, el externo, que enfatiza más las relaciones entre la empresa, la comunidad y su entorno.

Siendo en este punto, que la responsabilidad social se desarrolle en actividades privadas como gubernamentales; las mismas que deben ir acorde con los lineamientos del desarrollo sostenible.

2. **El Dr. Oscar Humberto Moreno Rubiños**, considera que no existe incompatibilidad alguna, pues la responsabilidad social pública se relaciona directamente con los lineamientos que atribuye nuestro ordenamiento jurídico ambiental en sus diferentes normativas; puesto que en el caso en concreto la responsabilidad social pública se toma los lineamientos de la sostenibilidad quien contempla la ponderación de valores jurídico constitucionales siendo en el presente caso la tutela del derecho a un medio ambiente sano.
 3. **Fiscal Provincial Adjunto Dr. Jorge Manuel Beltrán Saenz**, considera que sí, entendiéndose como una medida mediata que debería empezar desde acciones planificadas que deben implantarse por la Municipalidad que favorezca la calidad de vida de la comuna trujillana.
 4. **Fiscal Provincial De La Segunda Fiscalía Provincial Transitoria Especializada En Materia Ambiental De La Libertad Dra. Patricia Viviana Ponce Saavedra**, considera que sí es compatible porque la Gestión Ambiental debe tener un enfoque integral que parta desde el nivel nacional (Política Nacional de Ambiente); en coordinación con entidades ambientales de nivel regional (Gerencias Regionales con competencias ambientales), además de aplicar la normatividad ambiental transversalmente.
- RESPECTO A LA PREGUNTA 4: CONSIDERA USTED, ¿QUE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN MECANISMO RETRIBUTIVO DEL DAÑO AMBIENTAL CAPAZ DE GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO EN GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL COMO ES EL SEGAT?
1. **El Doctor en Derecho, Antonio Antay Bolaños**, considera que si; puesto que este modelo tiene la capacidad de garantizar la eficiencia y eficacia en un Organismo Público Descentralizado el mismo que conllevaría a su vez en la necesaria reestructura interna como externa, por lo que sí es tomado con la debida seriedad se obtendrían resultados efectivos en beneficio de la comuna Trujillana.
 2. **El Dr. Oscar Humberto Moreno Rubiños**, considera que si, por la relación directa que tiene con los enfoques éticos-estratégicos que la responsabilidad pública propone sin tener que afectar sus objetivos y competencias atribuidas mediante estatuto.

3. **Fiscal Provincial Adjunto Dr. Jorge Manuel Beltrán Saenz**, considera que si, por ser un mecanismo que contribuya a la descontaminación ambiental, que sugiere ser ejercido de manera externa para lograr adquirir eficiencia y eficacia en su accionar para lograr acciones más coherentes y planificadas.
4. **Fiscal Provincial De La Segunda Fiscalía Provincial Transitoria Especializada En Materia Ambiental De La Libertad Dra. Patricia Viviana Ponce Saavedra**, considera que el daño ambiental debe ser asumido por quien lo genera, el agente que causa un daño ambiental está obligado a repararlo, así que si el SEGAT no cumple sus funciones y eso genera impactos ambientales negativos entonces debe responder por el daño ambiental que está generando por el incumplimiento de sus funciones.
- RESPECTO A LA PREGUNTA 5: CONSIDERA USTED, ¿QUE LOS LINEAMIENTOS SOBRE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y PROTECCIÓN A LA CALIDAD ATMOSFÉRICA DEL RECURSO SUELO Y AIRE QUE SON INCORPORADOS EN LA POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE SON DEBIDAMENTE RECOGIDOS POR EL SEGAT PARA EL PLANTEAMIENTO DE SUS METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES?, ASÍ MISMO, ¿RESULTAN COMPATIBLES CON LAS METAS Y OBJETIVOS IMPUESTOS POR EL SEGAT CON LA REALIDAD AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE TRUJILLO?
1. **El Doctor en Derecho, Antonio Antay Bolaños**, considera que no; puesto el SEGAT revestido con todas las competencias y funciones de una OPD, no la asume a cabalidad generando un entorpecimiento de sus funciones y limitando a sus gerencias a enfocarse en el cumplimiento de funciones para generar resultados mediatos y mediante indicadores que no resaltan o incorporan la obtención de resultados, siendo en mucho de los casos enfocado solo a cumplir labores administrativas más no de preservación del medio ambiente.

Por lo que se evidencia una incompatibilidad relativa puesto que se evidencia una intención para lograr dichas metas pero no las proyecta o las logra por no adecuar los instrumentos y /o lineamientos indispensables para la tutela de bienes jurídicos ambientales protegidos siendo en el presente caso de estudio la protección del derecho a un medio ambiente sano.

2. **El Dr. Oscar Humberto Moreno Rubiños**, considera que no se ha llegado a relacionar aún las necesidades de la población en el tema de gestión ambiental en las metas y objetivos institucionales del SEGAT.
3. **Fiscal Provincial Adjunto Dr. Jorge Manuel Beltrán Saenz**, considera que no, puesto que el Plan Nacional del Ambiente no son acogidos en la práctica por el SEGAT, por los resultados y el manejo deficiente de la gestión ambiental municipal; puesto que no resuelve problemas esenciales que aquejan a la comuna Trujillana. Por lo que el SEGAT, está siendo muy incoherente en su accionar ético y estratégico, generando problemas cada vez más perjudiciales para la ciudad de Trujillo.
4. **Fiscal Provincial De La Segunda Fiscalía Provincial Transitoria Especializada En Materia Ambiental De La Libertad Dra. Patricia Viviana Ponce Saavedra**, considera que no, porque no son debidamente recogidos por el SEGAT al observar que no está preservando adecuadamente los recursos naturales que conforman las áreas verdes, parques y jardines, lo que repercute en la mejora de la calidad atmosférica de la ciudad; por lo que no resultan compatibles las metas y objetivos del SEGAT con la realidad ambiental Trujillana que requiere de medidas de preservación de la calidad ambiental y de salud ambiental.

- **VARIABLE DEPENDIENTE**

II. DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO

- RESPECTO A LA PREGUNTA 1: CONSIDERA USTED, ¿QUE EL SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO ESTÁ CUMPLIENDO CON SU NATURALEZA DE CREACIÓN OTORGANDO UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA A TODOS LOS CIUDADANOS DE TRUJILLO?
1. **El Doctor en Derecho, Antonio Antay Bolaños** considera que dicho Organismo Público Descentralizado está incumpliendo con las perspectivas y metas planteadas en su estatuto de creación; defraudando así la expectativa de la comuna trujillana al no prestar un servicio eficiente en la gestión del ambiente de atribuido a su competencia denotándose así la necesidad de aplicar nuevos mecanismos retributivos del daño que doten de eficiencia en su estructura interna como externa que sean orientadas bajo los

lineamientos de la sostenibilidad ambiental y promover la tutela del derecho a un medio ambiente sano.

2. **El Dr. Oscar Humberto Moreno Rubiños**, considera que no, por la notable deficiencia en la administración de dicho organismo público descentralizado, puesto que su ejercicio hasta la actualidad no resulta concordante con su naturaleza de creación; conllevando a no mejorar la calidad de vida de la población y no contribuyendo al cumplimiento de dicho objetivo.
3. **Fiscal Provincial Adjunto Dr. Jorge Manuel Beltrán Saenz**, resulta que la ciudad de Trujillo, hoy en día ha decrecido con su nivel de calidad; puesto que el servicio que otorga resulta mediana o escasamente deficiente, observando un incumplimiento estratégico con las metas y objetivos planteados.
4. **Fiscal Provincial De La Segunda Fiscalía Provincial Transitoria Especializada En Materia Ambiental De La Libertad Dra. Patricia Viviana Ponce Saavedra**, considera que no, porque ha venido brindando servicios insuficientes e ineficientes a la comuna trujillana, puesto en lo que respecta a la Gestión de Residuos Sólidos Municipales no se ha aplicado las 3r de las gestión de residuos sólidos; no incentivando de esta manera a la población la REDUCCIÓN, el REHÚSO, ni el RECICLAJE de residuos sólidos domésticos.

ENTREVISTA A GERENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO (SEGAT)

GERENCIA GENERAL

VARIABLE INDEPENDIENTE

I. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA EN EL SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO

- RESPECTO A LA PREGUNTA 1: CONSIDERA USTED, ¿QUE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN MECANISMO NECESARIO EN LA ACTUALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTRATÉGICAS Y/O OPERACIONALES DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO?

El Arquitecto César Fernando Díaz Alarcón, considera que sí, por tener un enfoque estratégico alineado con acciones planificadas y con herramientas metodológicas de sistematización, de medición de impactos ambientales que involucran a la institución y toda su cadena de valor, cuya finalidad radica en un actuar de acuerdo con los principios éticos para generar actos más coherentes, eficientes y eficaces para la consecución de sus metas institucionales.

Por lo tanto; resulta compatible en todas sus dimensiones la aplicación de dicho mecanismo en nuestra institución; en razón de la naturaleza protectora y de cuidado del derecho al medio ambiente que resguarda en beneficio de nuestra ciudad; y porque incorpora instrumentos que resulten necesarios en el cumplimiento de nuestras metas y objetivos siendo compatible con las proyecciones que se incorpora en nuestro plan operativo 2018-2020.

- RESPECTO A LA PREGUNTA 4: ¿QUE ESTRATEGIAS HA TOMADO EL SEGAT DENTRO DE SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS PERIÓDOS 2017-2018?

El Arquitecto César Fernando Díaz Alarcón, refiere que el SEGAT en coordinación conjunta con la MPT y el gobierno regional ha iniciado los trámites para la obtención del

relleno sanitario en favor de la ciudad de Trujillo, el mismo que contará con los requisitos establecidos en la ley de residuos sólidos aprobado mediante decreto supremo 1065; así como también lo ha dispuesto la DIGESA; siendo que, también se procedió a tercerizar el servicio de limpieza pública a efectos que; la empresa privada cumpla en su totalidad con la recolección de los residuos sólidos en la ciudad de Trujillo.

- RESPECTO A LA PREGUNTA 5: ¿QUE INSTRUMENTOS LEGALES APLICA EL SEGAT EN LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL? Y ¿Qué RESULTADOS SE HAN OBTENIDO DE SU APLICACIÓN?

El Arquitecto César Fernando Díaz Alarcón, refiere que los instrumentos aplicables en el SEGAT para la elaboración del Plan Operativo Institucional son la ordenanza municipal N°003-2008-MPT; que regula el régimen de infracciones y sanciones administrativas por la Municipalidad Provincial de Trujillo, las directivas de la OEFA, la Ley de Residuos Sólidos (D.S. N°1065); entre otros; cuyo resultado ha sido la reducción de actividades que van en contra del medio ambiente y promover la tutela del derecho a un medio ambiente sano.

- RESPECTO A LA PREGUNTA 6: ¿CÓMO MIDEN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS COMO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO?

El Arquitecto César Fernando Díaz Alarcón, refiere que se mide mediante el Plan Operativo Institucional; el mismo que se realiza de manera trimestral de acuerdo a sus indicadores.

- RESPECTO A LA PREGUNTA 8: ¿QUE ACCIONES HA TOMADO EL SEGAT EN LOS PERIODOS 2017-2018 PARA MONITOREAR Y EVALUAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL?

El Arquitecto César Fernando Díaz Alarcón, refiere acciones como: adquisición de equipos nuevos, contratación de personal técnico para ejercer funciones de fiscalización, capacitación al profesional técnico permanente, entre otros.

VARIABLE DEPENDIENTE

II. DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO

- RESPECTO A LA PREGUNTA 2: CONSIDERA USTED, ¿Qué LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN INSTRUMENTO VITAL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y UNA FORMA EFICIENTE PARA REDUCIR EL DAÑO AMBIENTAL EXISTENTE?

El Arquitecto César Fernando Díaz Alarcón, considera que si, porque permite diseñar y ejecutar instrumentos de gestión que tengan repercusión directa sobre el ambiente y la sociedad de acuerdo a las competencias que se les asigne cuyo fin es contribuir a una sociedad más ética, justa e igualitaria.

- RESPECTO A LA PREGUNTA 3: CONSIDERA USTED, ¿QUE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA APLICADO DESDE UN ENFOQUE ESTRATÉGICO PROMUEVE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y LA TUTELA DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO?

El Arquitecto César Fernando Díaz Alarcón, considera que la responsabilidad social pública es una forma de gestión que implica un comportamiento transparente y moral con los grupos de interés para lograr un bienestar económico, social y ambiental; que se alinea con la estrategia de los organismos públicos gubernamentales, contribuyendo así a un desarrollo sostenible; por el ejercicio planificado, organizado y monitoreado que propone de manera permanente con indicadores que permitirán medir y evaluar los impactos a largo plazo y con ello tutelar el derecho a un medio ambiente sano.

OFICINA GENERAL DE ASUNTOS LEGALES

VARIABLE INDEPENDIENTE

I. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA EN EL SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO

- RESPECTO A LA PREGUNTA 1: CONSIDERA USTED, ¿QUE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN MECANISMO NECESARIO EN LA ACTUALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTRATÉGICAS Y/O OPERACIONALES DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO?

El Abog. Pedro Menacho Rodríguez, considera que sí, por la naturaleza preventiva y retributiva del daño que recoge dicho mecanismo; el mismo que resulta fundamental para su aplicación en esta entidad, favoreciendo a la estrategia y metas institucionales que recoge por tener presente muchos problemas medioambientales en nuestra agenda.

- RESPECTO A LA PREGUNTA 3: EN SU CALIDAD DE ASESOR LEGAL DEL SEGAT, ¿QUE DISPOSITIVOS E INSTRUMENTOS LEGALES UTILIZA PARA DETERMINAR, EJECUTAR Y CUMPLIR OBJETIVOS Y METAS DE SU AREA?

El Abog. Pedro Menacho Rodríguez, refiere que los instrumentos legales que se usa en cada área son documentos de gestión como: Reglamento de Organización y Funciones y el Manual de Organización y Funciones.

- RESPECTO A LA PREGUNTA 4: ¿EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL QUE ELABORA SU ÁREA SE REALIZA DE MANERA ESTRATÉGICA?, DE SER AFIRMATIVO, ¿CÓMO MIDE EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS?

El Abog. Pedro Menacho Rodríguez, refiere que el Plan Operativo Institucional, que realiza nuestra área se proyecta de manera estratégica; enfocándose en el cumplimiento integral de sus funciones proyectados en nuestro reglamento de organización y funciones; cuyos criterios de evaluación de desempeño se toman por los resultados obtenidos en años pasados mediante una tabulación con el Plan Operativo Institucional del año anterior.

VARIABLE DEPENDIENTE

II. DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO

- RESPECTO A LA PREGUNTA 2: CONSIDERA USTED, ¿Qué LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN INSTRUMENTO VITAL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y UNA FORMA EFICIENTE PARA REDUCIR EL DAÑO AMBIENTAL EXISTENTE?

El Abog. Pedro Menacho Rodríguez, considera que si, puesto que resulta ser la responsabilidad social pública un instrumento que dota de estrategias y metodologías que permiten la optimización del organismo y/o empresa que le resulta aplicable; en ese sentido en materia ambiental, se hablaría de tutela por los lineamientos que incorpora para la obtención de desarrollo sostenible; el mismo que permite obtener niveles considerables

en la reducción del daño tanto cualitativa como cuantitativamente; conllevando al cumplimiento de metas, objetivos y con ello la tutela del derecho al medio ambiente sano.

- **SUB GERENCIA DE CALIDAD AMBIENTAL Y PROYECTOS**

VARIABLE INDEPENDIENTE

I. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA EN EL SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO

RESPECTO A LA PREGUNTA 1: CONSIDERA USTED, ¿QUE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN MECANISMO NECESARIO EN LA ACTUALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTRATÉGICAS Y/O OPERACIONALES DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO?

La Bióloga Rosa María SantaCruz Brenes, considera que, resulta nueva la aplicabilidad de un modelo de responsabilidad social dotado de mecanismos e instrumentos metodológicos proyectados en los lineamientos de desarrollo sostenible; el mismo que bajo sus presupuestos dotaría de eficiencia al SEGAT; puesto que; mejoraría nuestra capacidad funcional y operativa obteniendo resultados notables en el ejercicio de la Gestión Ambiental Municipal.

RESPECTO A LA PREGUNTA 4: ¿QUE ESTRATEGIAS HA TOMADO SU ÁREA DENTRO DE SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS PERIÓDOS 2017-2018?

La Bióloga Rosa María SantaCruz Brenes, refiere como estrategias tomadas en su área; campañas de sensibilización en toda la comuna trujillana, elaboración de proyectos ambientales cuyo fin es crear un dinamismo en las nuevas necesidades que puedan suscitar en la población con miras al cuidado y la preservación del medio ambiente.

RESPECTO A LA PREGUNTA 5: ¿QUE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADAN PROMUEVE Y APLICA SU ÁREA?

La Bióloga Rosa María SantaCruz Brenes, refiere que su dependencia incorpora mecanismos de participación como charlas, actividades de proyección social en Instituciones Educativas y centros de formación con la finalidad de educar e incentivar a la comunidad trujillana de la necesidad de cuidar y proteger el medioambiente.

RESPECTO A LA PREGUNTA 6: ¿CON QUE FRECUENCIA SE ELABORAN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL QUE INVOLUCRAN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS?

La Bióloga Rosa María SantaCruz Brenes, refiere que la actividad es constante; debido a que, al iniciar cada año fiscal se involucra la participación de las entidades públicas como privadas, generando un impacto medioambiental efectivo en la población.

RESPECTO A LA PREGUNTA 7: ¿QUE CRITERIOS Y ELEMENTOS TOMA SU ÁREA PARA ELABORAR SU PLAN OPERATIVO Y DE ACCIÓN?

La Bióloga Rosa María SantaCruz Brenes, refiere que el Plan Operativo Institucional, que realiza su dependencia se proyecta de manera estratégica enfocándose en el cumplimiento integral de sus funciones proyectados en nuestro reglamento de organización y funciones; cuyos criterios de evaluación de desempeño se toman por los resultados obtenidos en años pasados mediante una tabulación con plan operativo institucional del año anterior.

VARIABLE DEPENDIENTE

II. DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO

RESPECTO A LA PREGUNTA 2: CONSIDERA USTED, ¿Qué LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN INSTRUMENTO VITAL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y UNA FORMA EFICIENTE PARA REDUCIR EL DAÑO AMBIENTAL EXISTENTE?

La Bióloga Rosa María SantaCruz Brenes, considera que sí, resulta necesario por los temas medioambientales que aún subsisten en nuestra comuna trujillana, en razón que generaría resultados merecidos a las proyecciones y planes que tiene este organismo público descentralizado.

- **UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL**

VARIABLE INDEPENDIENTE

I. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA EN EL SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO

RESPECTO A LA PREGUNTA 1: CONSIDERA USTED, ¿QUE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN MECANISMO NECESARIO EN LA ACTUALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTRATÉGICAS Y/O OPERACIONALES DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO?

El Abog. Carlos Eduardo Sánchez Caipo, considera que si, resulta ser necesario su aplicación en el Servicio de Gestión Ambiental en razón de su naturaleza retributiva del daño que dota a los instrumentos de gestión ambiental generando la optimización en el ejercicio institucional gubernamental y con ello al cumplimiento de metas propuestas en cada ejercicio anual.

RESPECTO A LA PREGUNTA 3: CONSIDERA USTED, ¿QUE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA APLICADO DESDE UN ENFOQUE ESTRATÉGICO PROMUEVE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y LA TUTELA DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO?

El Abog. Carlos Eduardo Sánchez Caipo, considera que sí, por lo que se estructura bajo los lineamientos del mismo y pretende incorporar estrategias y metodologías del derecho constitucionalmente tutelado; con respecto al aspecto ético resulta ser una orientación novedosa que incorporan los nuevos modelos de responsabilidad social gubernamental pues los mismos generan actividades coherentes y planificadas en la proyección y metas; así como dota de orden en las actividades de todos sus organismos públicos descentralizados en este caso en el SEGAT resultaría viable para optimizar el cumplimiento eficiente de nuestras metas y proyecciones para el año 2018-2020.

RESPECTO A LA PREGUNTA 4: ¿QUE ESTRATEGIAS HA TOMADO SU ÁREA DENTRO DE SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN

LOS PERIÓDOS 2017-2018? Y ¿Qué RESULTADOS SE HAN OBTENIDO DE SU APLICACIÓN?

El Abog.Carlos Eduardo Sánchez Caipo, refiere que el Plan Operativo Institucional que realiza su dependencia se proyecta de manera estratégica enfocándose en el cumplimiento integral de sus funciones proyectados en nuestro reglamento de organización y funciones; cuyos criterios de evaluación de desempeño se toman por los resultados cuyos criterios de evaluación de desempeño se toman por los resultados obtenidos en años pasados mediante una tabulación con el plan operativo institucional del año anterior.

RESPECTO A LA PREGUNTA 6: ¿QUÉ POLITICAS Y ESTRATEGIAS HA ESTABLECIDO SU DEPENDENCIA PARA LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LAS NORMAS Y/O DISPOSICIONES AMBIENTALES MUNICIPALES, ASÍ COMO PARA SU EFECTIVO CUMPLIMIENTO?

El Abog.Carlos Eduardo Sánchez Caipo, refiere que en lo que respecta al plan de acción que desempeña su dependencia se enfoca mediante operativos inopinados durante las 24 horas; cuya finalidad es imponer el principio de autoridad; así como; el cumplimiento de normativas nacionales y locales que deben ser acatados por los administrados.

VARIABLE DEPENDIENTE

II. DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO

RESPECTO A LA PREGUNTA 2: CONSIDERA USTED, ¿Qué LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN INSTRUMENTO VITAL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y UNA FORMA EFICIENTE PARA REDUCIR EL DAÑO AMBIENTAL EXISTENTE?

El Abog.Carlos Eduardo Sánchez Caipo, considera que sí, por los presupuestos estratégicos enfocados coherentemente para el cumplimiento de objetivos y metas; así como; bajo los presupuestos de retribución del daño; generando con ello, la protección del medioambiente y la reducción de problemas medioambientales.

- **SUB GERENCIA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL**

VARIABLE INDEPENDIENTE

I. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA EN EL SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO

RESPECTO A LA PREGUNTA 1: CONSIDERA USTED, ¿QUE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN MECANISMO NECESARIO EN LA ACTUALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTRATÉGICAS Y/O OPERACIONALES DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO?

El Ing. Marco Antonio Bocanegra Rodríguez, considera que sí, puesto que para una organización pública que practica la Responsabilidad Social es muy importante generar y promover la mayor participación ciudadana y la rendición de cuentas efectiva, esto le facilita a la Institución una mayor legitimidad social en el entorno que se desenvuelve, siendo de necesaria aplicación en este organismo público descentralizado por su naturaleza protectora en el ámbito ambiental que se persigue con una proyección de metas y objetivos institucionales enfocados en la sostenibilidad ambiental y el otorgamiento de una calidad de vida digna a nuestros ciudadanos.

RESPECTO A LA PREGUNTA 4: ¿QUE ESTRATEGIAS HA TOMADO SU ÁREA DENTRO DE SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS PERÍODOS 2017-2018?

El Ing. Marco Antonio Bocanegra Rodríguez, refiere que las estrategias tomadas por su dependencia serías: asegurar maquinaria y equipo para el acondicionamiento diario de residuos sólidos que se descargan en las plataformas del centro de disposición ubicado en el Centro de disposición ubicado en el centro poblado “El Milagro”; realizar coberturas por lo menos mensual con material de piedra para la cobertura de residuos sólidos y el control de vectores, así como la respectiva consistencia de los terrenos asignados para tal fin; se ha fortalecido la coordinación con los distritos usuarios del centro de disposición a efectos de involucrarlos en el mantenimiento y operatividad del centro de disposición final ubicado en el Milagro.

De igual modo, resultó necesario fortalecer un programa de segregación y recolección selectiva en todo el distrito de Trujillo.

RESPECTO A LA PREGUNTA 5: ¿CUAL ES EL TRATAMIENTO Y TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE TRUJILLO? Y ¿Qué CRITERIOS TOMA EL SEGAT PARA DETERMINAR UN AREA COMO DE MAYOR RIESGO?

El Ing. Marco Antonio Bocanegra Rodríguez, refiere que a nivel de sustancias peligrosas no se cuenta con un lugar especial, toda vez que el centro de disposición es sólo para uso de residuos municipales.

Respecto al transporte de las sustancias peligrosas, esta actividad está a cargo por ley de Empresas Prestadoras de servicios especiales contratadas por cada centro generador de residuos y fiscalizados por la Dirección General de Salud (DIGESA), debido a que; en la actualidad, la normativa nacional exige parámetros que se encuentran estipulados en normas especiales.

Respecto a los criterios que se utiliza, se debería tener en cuenta criterios restrictivos y selectivos en base al volumen y ubicación de áreas afectadas o generadoras de mayor cantidad de residuos peligrosos, toda vez que la realidad es distinta en cada área generadora de residuos.

RESPECTO A LA PREGUNTA 6: ¿QUÉ POLÍTICAS RETRIBUTIVAS DEL DAÑO AMBIENTAL EJERCE EL SEGAT PARA ELIMINAR LA INCINERACIÓN NO CONTROLADA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PROPICIAR SU REEMPLAZO POR OTROS MÉTODOS DE BAJO IMPACTO SOBRE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA?

El Ing. Marco Antonio Bocanegra Rodríguez, refiere que una de las políticas es generar una valorización a los residuos sólidos a fin de que sean tratados de llegar al centro de disposición. Así mismo; se deberá generar un programa de control de incendio en las plataformas de disposición final.

RESPECTO A LA PREGUNTA 7: ¿ QUE ACCIONES HA REALIZADO EL SEGAT ANTE EL PROBLEMA AMBIENTAL DEL BOTADERO MUNICIPAL UBICADO EN EL MILAGRO?

El Ing. Marco Antonio Bocanegra Rodríguez, refiere que a la fecha se cuenta con un terreno de 66 a 67 hectáreas cedido por el Gobierno Regional a favor de la Municipalidad Provincial de Trujillo, el cual ya se encuentra saneado y con opinión técnica favorable en su segunda etapa.

De igual modo, la MPT viene impulsando un proyecto de inversión privada a cero costo para la ejecución de una planta integral de tratamiento de residuos sólidos, la cual permitirá que el 98% del volumen de residuos sea reutilizado y sólo el 2% irá a un centro de disposición final.

VARIABLE DEPENDIENTE

II. DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO

RESPECTO A LA PREGUNTA 2: CONSIDERA USTED, ¿Qué LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN INSTRUMENTO VITAL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y UNA FORMA EFICIENTE PARA REDUCIR EL DAÑO AMBIENTAL EXISTENTE?

El Ing. Marco Antonio Bocanegra Rodríguez, considera que sí, en razón que, el enfoque de la responsabilidad social en la administración pública es muy importante pues brinda un enfoque que permite implementar la modernización del Estado, planteando servicios públicos acorde con las necesidades y expectativas de los grupos de interés de la sociedad civil. De esta manera, se generan procesos de interacción más eficientes y eficaces; cuyos impactos son mucho más sostenibles y trascendentes; conllevando con ello actos más coherentes que se proyecten en el uso de instrumentos que favorezcan en la reducción del daño ambiental que persiste en la actualidad.

RESPECTO A LA PREGUNTA 4: ¿QUE ESTRATEGIAS HA TOMADO SU ÁREA DENTRO DE SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS PERÍODOS 2017-2018?

El Ing. Marco Antonio Bocanegra Rodríguez, refiere que las estrategias tomadas por su dependencia serías: asegurar maquinaria y equipo para el acondicionamiento diario de residuos sólidos que se descargan en las plataformas del centro de disposición ubicado en

el Centro de disposición ubicado en el centro poblado “El Milagro”; realizar coberturas por lo menos mensual con material de piedra para la cobertura de residuos sólidos y el control de vectores, así como la respectiva consistencia de los terrenos asignados para tal fin; se ha fortalecido la coordinación con los distritos usuarios del centro de disposición a efectos de involucrarlos en el mantenimiento y operatividad del centro de disposición final ubicado en el Milagro.

De igual modo, resultó necesario fortalecer un programa de segregación y recolección selectiva en todo el distrito de Trujillo.

RESPECTO A LA PREGUNTA 5: ¿CUAL ES EL TRATAMIENTO Y TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE TRUJILLO? Y ¿Qué CRITERIOS TOMA EL SEGAT PARA DETERMINAR UN AREA COMO DE MAYOR RIESGO?

El Ing. Marco Antonio Bocanegra Rodríguez, refiere que a nivel de sustancias peligrosas no se cuenta con un lugar especial, toda vez que el centro de disposición es sólo para uso de residuos municipales.

Respecto al transporte de las sustancias peligrosas, esta actividad está a cargo por ley de Empresas Prestadoras de servicios especiales contratadas por cada centro generador de residuos y fiscalizados por la Dirección General de Salud (DIGESA), debido a que; en la actualidad, la normativa nacional exige parámetros que se encuentran estipulados en normas especiales.

Respecto a los criterios que se utiliza, se debería tener en cuenta criterios restrictivos y selectivos en base al volumen y ubicación de áreas afectadas o generadoras de mayor cantidad de residuos peligrosos, toda vez que la realidad es distinta en cada área generadora de residuos.

- **OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

VARIABLE INDEPENDIENTE

I. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA EN EL SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO

RESPECTO A LA PREGUNTA 1: CONSIDERA USTED, ¿QUE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN MECANISMO NECESARIO EN LA ACTUALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTRATÉGICAS Y/O OPERACIONALES DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO?

El C.P.C. Carlos Alfredo Vásquez Namay, considera que es vital mencionar sobre este tema, puesto que para lograr la implementación sostenida de una propuesta de responsabilidad social, es necesario fomentar el cambio y consolidación de una cultura organizacional nueva, basada en la práctica de valores institucionales compartidos que prevalezcan la orientación al ciudadano y la obtención de resultados e impactos que generen verdadero desarrollo y bienestar en la población objetiva, así como una gestión transparente y auditable por el mismo control de la sociedad civil.

Por lo que, para lograr ejercer institucionalmente la Responsabilidad Social, es necesario contar con una organización basada en principios y valores, sólo a través de esta base filosófica se podrá desarrollar una relación interna y externa, ética y productiva socialmente. Que, en el caso de nuestra Institución, sería de vital importancia dada la naturaleza protectora y retributiva del daño que persigue, así como los fundamentos éticos, y sus instrumentos estratégicos que otorga para la acción coherente y planificada de las organizaciones públicas.

RESPECTO A LA PREGUNTA 4: ¿Qué INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL APLICA EL SEGAT EN LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL? Y ¿Qué RESULTADOS SE HAN OBTENIDO DE SU APLICACIÓN?

El C.P.C. Carlos Alfredo Vásquez Namay, refiere que en la actualidad se aplican instrumentos como el cuadro de asignación personal (C.A.P.); El Manual de Organización y Funciones (M.O.F.); El Reglamento de Organización y Funciones (R.O.F.); El Plan Estratégico Institucional (P.E.I.); El Presupuesto Institucional de Apertura (P.I.A.); así

como, el Reglamento Interno de Trabajo (R.I.T.), generando una autorregulación en el personal que trabaja en el SEGAT, en mérito a su ordenanza de creación.

RESPECTO A LA PREGUNTA 5: ¿CÓMO MIDEN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS COMO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

El C.P.C. Carlos Alfredo Vásquez Namay, refiere que se mide el cumplimiento en mérito a la evaluación de los Planes Operativos Institucionales (P.O.I.) de cada área, las cuales se da de manera trimestral.

VARIABLE DEPENDIENTE

II. DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO

RESPECTO A LA PREGUNTA 2: CONSIDERA USTED, ¿Qué LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN INSTRUMENTO VITAL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y UNA FORMA EFICIENTE PARA REDUCIR EL DAÑO AMBIENTAL EXISTENTE?

El C.P.C. Carlos Alfredo Vásquez Namay, considera que sí, puesto que resulta ser necesario la aplicabilidad de este mecanismo retributivo del daño ambiental, puesto que puede en relación a mejorar la gestión pública en el Perú; y de Trujillo; ello está en relación, por ejemplo, al fortalecimiento de la democracia participativa, con ciudadanos que puedan disponer de mejores herramientas para el control activo y permanente de las actividades propias de la gestión pública, por lo que en ese sentido, se generan procesos de interacción más eficientes y eficaces; cuyos impactos son mucho más sostenibles y trascendentes, que para una organización pública que practica la Responsabilidad Social es muy importante generar y promover la mayor participación ciudadana y la rendición de cuentas efectiva, esto le facilita a la Institución una mayor legitimidad social en el entorno en que se desenvuelve.

III. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Luego de haber descrito los resultados de la investigación respecto a los factores, condiciones, elementos e instrumentos que favorecen la incorporación de la responsabilidad social pública bajo los lineamientos de sostenibilidad ambiental obtenidos en base de un minucioso análisis de los datos obtenidos en la entrevista realizada a docentes especializados en derecho ambiental, fiscales provinciales titulares especializados en materia ambiental; así como de los encargados de las gerencias que administran el SEGAT en el curso de la presente investigación, el presente capítulo comprende la discusión de los hallazgos, que seguirá el mismo orden planteado en la hipótesis a demostrar que la gestión ambiental está indisolublemente asociada a la calidad de vida, a través de aspectos de saneamiento, limpieza o prevención y mitigación de la contaminación atmosférica; no obstante, y sin negar la importancia de estos objetivos legítimos por sí mismos, también es necesario destacar que la gestión ambiental está asociada a la calidad de vida, a través de su asimilación a objetivos de desarrollo con perspectiva de largo plazo; que puede ser fuente de empleo, alivio de la pobreza y mayor gobernabilidad; puesto que una ciudad manejada con criterios de sostenibilidad ambiental resulta ser mayor atractiva para diversas actividades económicas; ello en virtud de su función conductora del desarrollo local sostenible y tutelar la calidad de vida en su jurisdicción (Chang, A. 2002), es así que, el SEGAT por la naturaleza de sus funciones y atribuciones orientadas a proteger la calidad ambiental en el entorno urbano; así como cuidar y preservar la vida, salud y el medio ambiente adecuado y equilibrado de las personas a quienes provee sus servicios; asume un "deber de protección" respecto a los derechos fundamentales invocados cuyo contenido le habilita, un deber de prevención mayor, que cualquier empresa que voluntariamente puede acoger a este mecanismo retributivo del daño (Expediente N° 01963-2013-PA/TC-TACNA); he ahí que la Responsabilidad Social Pública, por un lado, ve integrada en la misión de las distintas organizaciones gubernamentales un intrínseco rol social (Loza, C. 2016). En efecto, desde cierta perspectiva se puede decir que la responsabilidad social de las entidades gubernamentales es maximizar el bienestar social de manera sostenible, no en una perspectiva vertical y asistencialista, sino en una perspectiva horizontal y relacional,

creando vínculos de beneficio mutuo con los distintos actores del mercado y de la sociedad civil, de manera estratégica y sostenible. Por otro lado, si bien la voluntariedad de la Responsabilidad Social Empresarial se ve minimizada en la Responsabilidad Social Pública, puesto que la innovación juega en ambas y sobretodo en la segunda un papel crucial; puesto que las entidades gubernamentales incapaces de innovar, corren el riesgo de quedar estancadas en la burocracia y caer en legalismos estáticos; por lo que, la aplicación de una responsabilidad social pública conlleva a promover el cumplimiento de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado; así como a la preservación del medioambiente.

Ello debido a su rol protector que se impone al Estado, a fin de que asuma obligaciones destinadas a conservar el ambiente equilibrado y prevenir que se produzca un daño en el mismo, lo que ha dado paso a que se reconozca el principio de prevención, que supone resguardar los bienes ambientales de cualquier peligro que pueda afectar su existencia, poniendo el mayor celo posible en tal empeño (Expediente N° 03343-2007-PA/TC).

Los fundamentos antes expuestos por pronunciamientos del Tribunal Constitucional y juristas; resultan compatibles con los resultados obtenidos en la entrevista a especialistas en derecho ambiental; quienes al preguntárseles sobre la viabilidad de la aplicación de la responsabilidad social pública con enfoque ético-estratégico en el SEGAT, para la consecución de sus metas institucionales imponiendo la sostenibilidad ambiental como eje rector para la consecuente tutela del derecho a un medio ambiente sano, respondieron afirmativamente corroborando la viabilidad del presente trabajo de investigación; en razón del afán de aspirar a una mejor calidad atmosférica que repercuta en el bienestar del ciudadano trujillano, así como para preservar y mejorar el paisaje urbano, lo cual es muy necesario por el ineficiente e insuficiente servicio brindado a la población por parte de dicho organismo, que ha generado un grave daño ambiental el cual debe reparar asumiendo un mecanismo retributivo que genere dichos efectos.

No obstante, resulta necesario precisar que al hacer la entrevista a responsables de las gerencias funcionales que administran el SEGAT, respondieron ante la misma interrogante que la responsabilidad social es un instrumento que dota de estrategias y metodologías que permitan la optimización del organismo que lo aplicase: por lo que

resulta necesario su aplicación para obtener mayor criterios en la elaboración y aplicación de su plan operativo institucional, pero que no sería vital para poder reestructurar sus atribuciones de manera externa e interna, por la conformación misma ya establecida mediante estatuto, que no contempla disposiciones modificatorias de esa magnitud, lo que conlleva a plantear la siguiente interrogante, asumiendo el rol protector que tiene sobre los bienes jurídicos ambientales de la comuna, así como un rol de institución que recae en sus trabajadores, ¿el SEGAT demuestra el compromiso de asumir los mecanismos modernos de sostenibilidad ambiental recaído en la responsabilidad social pública?; la respuesta es no, en razón que proyectan sus objetivos y logros institucionales; en lineamientos desfasados que no contemplan la internalización de los costos ambientales, debido a la limitada capacidad de gestión ambiental municipal que tiene la comuna trujillana; siendo esta respuesta incoherente con los fundamentos de sostenibilidad ambiental que nos brinda el Tribunal Constitucional, siendo que en el Expediente N°03343-2007-PA/TC; refieren que la perspectiva del desarrollo sostenible que busca equilibrar el esquema de la economía social de mercado con el derecho a vivir en un ambiente sano, equilibrado y adecuado; como una maximización de las ganancias o utilidad frente a la calidad del entorno que sufre el desgaste de la actividad económica (**fundamento 14**) ; siendo una manifestación concreta del derecho de toda persona a disfrutar de un entorno ambiental idóneo para el desarrollo de su existencia, es el reconocimiento de que los recursos naturales , en tanto patrimonio de la nación, deben ser objeto de un aprovechamiento razonable y sostenible, y que los beneficios resultantes de tal aprovechamiento deben ser a favor de la colectividad en general, correspondiendo al Estado el deber de promover las políticas adecuadas a tal efecto. (**fundamento 16**); bajo el mismo lineamiento la Sentencia Normativa N°0048-2004-AI/TC, manifiesta que el Estado Social y democrático de derecho debe favorecer el crecimiento económico; por lo que no puede ni debe reñirse con el derecho a la plenitud de la vida humana; como una fórmula de promoción del “uso sostenible” de los recursos naturales, para garantizar un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. Finalmente y en merito a la transparencia necesaria para el éxito de toda actividad socialmente responsable, se debe mencionar también las iniciativas metodológicas orientadas a la evaluación de actividades de Responsabilidad Social Pública; que aseguran su éxito y sostenibilidad; puesto que en

la medida en que sea posible informar y evaluar el alcance y los resultados de las iniciativas de responsabilidad social, será posible también evidenciar de manera más clara como influye el gobierno en la calidad de vida de los ciudadanos.

IV. CONCLUSIONES

1. Que, con respecto al objetivo principal, esto es, analizar si la incorporación de la responsabilidad social pública aplicada en el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo mejora la protección al derecho a un medio ambiente sano, se concluye que, con la aplicabilidad de la Responsabilidad Social Pública en el SEGAT existe mejora en la protección del Derecho a un medio ambiente sano, toda vez que, busca mejorar la efectividad en el cumplimiento de metas ambientales supeditándose en la incorporación de un plan de sostenibilidad ambiental que, permita mejorar a nivel cualitativo la efectivización de una política sostenible que busca la retribución del daño y a su vez, fortalecer su propia autonomía como entidad gubernamental, conllevando a que asuma el liderazgo de la gestión ambiental municipal como un medio para perfilar políticas de largo plazo orientadas al desarrollo sostenible local y al uso eficaz y eficiente de instrumentos estratégicos como son el SINAPLAN, CEPLAN y PIGARS.
2. Que, con respecto al primer objetivo específico que, esto es, determinar si los criterios constitucionales y doctrinales de la sostenibilidad ambiental motivan la aplicación del modelo de responsabilidad social pública en el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo; se concluye que, los criterios doctrinales y constitucionales de la sostenibilidad ambiental si motivan la aplicación de la Responsabilidad Social Pública en el SEGAT toda vez que, por generalidad consensuada de la doctrina jurídica ambiental se establecieron como criterios de la sostenibilidad ambiental a la equidad intergeneracional, uso sostenible de los recursos naturales y la integración del medio ambiente y desarrollo que se asumen como finalidad esencial la tutela y conservación del medio ambiente sano que, concordado con la posición del Tribunal Constitucional sobre la sostenibilidad ambiental promueven a la aplicabilidad y condicionamiento de toda política retributiva del daño que promuevan un condicionamiento ambiental saludable y digno para el desarrollo integral del ser humano, la misma que, dada la naturaleza de este mecanismo retributivo del daño se supedita en el cumplimiento de la finalidad de esta disciplina jurídica.

3. Que, con respecto al segundo objetivo específico, esto es, analizar si los instrumentos estratégicos ambientales como el SINAPLAN, CEPLAN, SEIA y PIGARS posibilitan la aplicación de la responsabilidad social pública en el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo; se concluye que, el SINAPLAN, CEPLAN, SEIA y PIGARS si posibilitan la aplicación de la responsabilidad social pública en el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, toda vez que, asumen como finalidad la planificación estratégica del país mediante el uso sostenible de los recursos naturales que permitan su efectivización ante los problemas que asume el SEGAT en su institucionalidad, lo que conlleva a otorgarle coherencia con su finalidad institucional y las proyecciones ambientales que se estima a fin de otorgar una calidad de vida digna a la comuna trujillana.
4. Que, con respecto al tercer objetivo específico; esto es, analizar las bases constitucionales que tutelan el derecho a un medio ambiente sano y el rol proteccionista del Estado para la salvaguarda del interés público mediante una gestión ambiental municipal se concluye que, el derecho a un medio ambiente sano otorga la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso de que el hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. Esto implicaría, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1 de la Constitución), caso contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de contenido. Pero también el derecho en análisis se concretiza en el derecho a que el medio ambiente se preserve por lo que, el Estado asume un rol proteccionista supeditado en incorporar de manera obligatoria mecanismo que, la preserven y de acuerdo a la naturaleza del daño ambiental permitan ser efectivas.

V. RECOMENDACIONES

Dentro de un proyecto tan ambicioso como lo fue este, siempre se desea que haya una mejora continua del mismo; por lo tanto se recomienda a futuros estudiantes que tengan interés en el proyecto, que desarrollen la dimensión competencial de los organismos públicos descentralizados como factor de eficiencia en la gestión ambiental, puesto que en materia ambiental, cabe señalar que el reparto de competencias ambientales en el país ha obedecido a criterios divergentes y a mandatos establecidos en distintas épocas y bajo premisas conceptuales, técnicas e institucionales, heterogéneas, las cuales no están debidamente articuladas, conllevando a que el límite entre la actuación de los órganos del gobierno nacional y los órganos del gobierno local no sea claro, generando múltiples conflictos que rompen en la práctica la autonomía reconocida en el texto constitucional a las municipalidades.

Otra recomendación, sería realizar un estudio enfocado sobre la potestad sancionadora y fiscalizadora atribuida a los Organismos Públicos Descentralizados, puesto que las municipalidades deben establecer sus propios regímenes de incentivos y de sanciones que respalden el cumplimiento de sus normas ambientales, los cuales deben ser coherentes con sus atribuciones legales, así como con los lineamientos y objetivos de su política ambiental; solicitando el apoyo de organismos competentes para hacer efectivas estas prohibiciones, las cuales resultan no llegan a efectivizarse, puesto que dichas atribuciones no se articulan a otros organismos de gobierno, en particular a los sectores productivos y organismos regulatorios.

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fernández, M. (2015). RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS BASADA EN ALTO COMPROMISO Y RESULTADOS ORGANIZATIVOS: UN MODELO INTEGRADO. Tesis Para Obtener El Grado De Doctora. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. España.

Mariel, C.(2016).ÉTICA EN LOS NEGOCIOS Y LA RESPOSANBILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. Tesis Para Obtener El Grado De Magister. UNIVERSIDAD CATOLICA DE ARGENTINA. Buenos Aires, Argentina.

M.A. Beatriz Elena Montoya Arévalo Y El Dr. Pedro Martínez Ramos (2012) En Su Libro “RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: UNA RESPUESTA ÉTICA ANTE LOS DESAFÍOS GLOBALES”

Shanshan Peng. “Sostenibilidad Empresarial Y Responsabilidad Social Corporativa: Estudios De Casos De Tres Operadores De Gas En China”. Departamento De Gestión Y Marketing, Universidad Politécnica De Hong Kong, RAE De Hong Kong, República Popular De China. Enero 2018.

Weed, Douglas L. “Ciencia Y Responsabilidad Social En Salud Pública. Departamento De Epidemiología Y Bioestadística”.Departamento De Epidemiología. Escuela De Salud Pública Norman J. Arnold. Universidad De Carolina Del Sur. Nov.2003.

Wang, Ming-Xia. Construcción De Un Sistema Educativo Responsable De Responsabilidad Social Corporativa En Colegios. Departamento De Gestión Económica, Facultad De Tecnología Vocaciones De La Ciudad De Ningbo. China. Marzo 2018.

Zapata, L. (2012). APROXIMACIÓN A UNA LEGISLACIÓN NACIONAL EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PARA LA EMISIÓN DE REPORTES DE SOSTENIBILIDAD. Tesis Para Obtener El Grado De Magíster. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ. LIMA, PERÚ.

Flores,D.(2017).LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EL PERÚ Y SU INFLUENCIA EN LOS PROCESOS DE INVERSIÓN, CASO DE LA INICIATIVA GLOBAL DEL REPORTE DE SOSTENIBILIDAD. Tesis Para Obtener El Título Profesional De Derecho. Universidad Nacional De San Antonio Abad Del Cusco. Cusco, Perú.

Escudero, H. (2016). Gestión Del Servicio De Sedapal Y La Responsabilidad Social - Zona Sur De Lima – 2016. Tesis Para Optar El Grado Académico De Maestro En Gestión Pública. Universidad César Vallejo. Lima, Perú.

López, J. (2012). PROBLEMÁTICA Y PROPUESTA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE LAREDO, TRUJILLO, PERÚ. Artículo Científico “REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGÍA” De La Universidad Nacional De Trujillo, Escuela De Post Grado. Trujillo, Perú.

Barrantes, S. (2015). RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, TECNOLÓGICO Y SOCIAL

EN EL CONTEXTO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO AÑO 2015.Universidad Nacional De Trujillo. Tesis Para Obtener El Grado De Doctor. Trujillo, Perú.

GUIMARAEZ, R. (2008). LA ETICA DE LA SUSTENTABILIDAD Y LA FORMULACION DE POLITICAS DE DESARROLLO. MEXICO.

LORENZETTI, R. (2009).DERECHO AMBIENTAL Y DAÑO. ED.LA LEY.BUENOS AIRES, ARGENTINA.

KAUFFMAN, A (1960). INTRODUCCION A LA TEORIA DE LOS EFECTOS OLVIDADOS. EN LAS EMPRESAS ED. MILLADOIRO. SANTIAGO DE COMPOSTELA.

COASE, R. (1988).EL PROBLEMA DEL COSTO SOCIAL.ED. ESTUDIOS PUBLICOS. MADRID ESPAÑA.

Fernandez,J.(2012).Cátedra De Ética Económica Y Empresarial.Madrid, España.

Carroll,A (1991). "The Pyramid Of Corporate Social Responsibility". Inglaterra, Reino Unido.

Weber, M. (1977). Economía Y Sociedad. F. C. E., México

Hernández, M.(1998).ANALISIS Y FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA INSTITUCIONAL. México.

CAFFERATA, N. (2002).EL PRINCIPIO PRECAUTORIO. ED.GACETA ECOLOGICA. BUENOS AIRES, ARGENTINA.

VARGAS, C. (2016).APROXIMACIONES AL ESTUDIO DEL DALO AMBIENTAL. VALLADOLID, ESPAÑA.

Marcfarland,C. (2005).Principios De Gobernabilidad En Áreas Naturales Protegidas".Lima, Perú.

Ministerio De Trabajo Y Asuntos Sociales (2005). Compendio De Directivas Ambientales. España.

Programa Eficiencia Y Rendición De Cuentas En Colombia De La Agencia De Los Estados Unidos Para El Desarrollo Internacional (USAID). (2006). Colombia.

Ospina, M. Pérez, T. (2006). Comisión Colombiana De Juristas. Bogotá, Colombia.

Andaluz,C.(2006). "Derecho Ambiental, Propuestas Y Ensayos".Lima, Perú.

Fonseca, C.(2010). Manual De Derecho Ambiental. Lima, Perú.

Brack,A. (2006). "Hacia Una Nueva Concepción Del Desarrollo.Lima, Perú.

La Madrid,A. (2011). Derecho Ambiental Contemporaneo: Crisis Y Desafíos.

Novelli,M.(2009). El Desarrollo Sostenible: Sus Dimensiones Ambientales Y Educativas. Madrid, España.

Iturraspe, M.(1999). Principios De Derecho Ambiental Internacional Y Legislación Nacional: Apuntes Para Un Debate. Lima, Perú.

Pierangelli,J.(1983). El Orden Político En Las Sociedades De Cambio. París,Francia.

Annan,K.(2000). Un Destino Común; Un Compromiso Renovado. Nueva York: Naciones Unidas

CERUTID' ONOFRIO (1996). Educación Para El Desarrollo Sostenible De La Amazonía. Lima, Perú.

Lastres,E.(1993). Los Recursos Naturales En La Constitución Vigente. Lima, Perú.

Carhuatocto,H.(2009). El Daño Ambiental. Suplemento De Análisis Legal Jurídico. Lima, Perú.

La Madrid, A(2000). Derecho Ambiental. Lima, Perú.

Gonzales,O.(2005). Desarrollo Sustentable En América Latina Y El Caribe. Buenos Aires, Argentina.

Brañes,R.(2000). Introducción Al Derecho Ambiental. México.

Perez.E.(2008). Derecho Ambiental. Colombia.

Lanegra,I (2008). El Ausente Estado Ambiental. Lima, Perú.

WESTREICHER (2006). Manual De Derecho Ambiental. Lima, Perú.

Chang,A.(2002). Legislación Ambiental: Competencias Municipales. Lima, Perú.

MOLINA (1998). Conceptos Fundamentales De Ciencia Política. Madrid, España.

CHARPENTIER E HIDALGO (1999). Políticas Ambientales En El Perú. Lima, Perú.

Caravedo,B.(2003). ¿CÓMO PROMOVER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL? LA EXPERIENCIA PERUANA. Lima, Perú.

Porro, M. (2008). Responsabilidad Social Empresarial En El Perú. Lima, Perú.

Bolaños,A. (2017). Cátedra De Derecho Ambiental Y Minero. Trujillo, Perú.

Santos,M.(2005).Responsabilidad Social Gubernamental: Perspectiva Ética De Gobierno. Colombia.

Vélez. X. (2016).Derecho A La Información Ambiental. Buenos Aires, Argentina.

Domene, H.(2002). La Protección Del Medio Ambiente. Lima, Perú

Loza, C. (2016). La Responsabilidad Social Pública En Organismos Del Gobierno. Alemania.

REAL,G .EL DERECHO AMBIENTAL Y EL DERECHO DE LA SOSTENIBILIDAD EN PROGRAMA REGIONAL DE CAPACITACION EN DERECHO Y POLITICAS AMBIENTALES. MÈXICO.

CHANAME, R (2009). LA CONSTITUCION COMENTADA. ED.GRIJLEY. LIMA, PERU.

MINISTERIO DEL AMBIENTE (2012). INFORME ANUAL DE GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL

ANEXOS

A. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE	DEFINICION CONCEPTUAL	DEFINICION OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA DE MEDICION
V.I. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA	<p>La responsabilidad social pública es un mecanismo retributivo del daño; empleado por las Instituciones gubernamentales dotados de autonomía funcional y operativa; encargada de diseñar y ejecutar políticas públicas, leyes, decretos que tengan repercusión directa sobre el ambiente y la sociedad de su jurisdicción, cuya finalidad es contribuir a una sociedad más ética, justa e igualitaria.</p> <p>Se caracteriza por tener un enfoque estratégico alineado con acciones planificadas y con herramientas metodológicas de sistematización, de medición de impactos ambientales que involucren a la Institución y toda su cadena de valores, cuya finalidad radica en un actuar de acuerdo con los principios éticos para generar actos más coherentes, eficientes y eficaces para la consecución de sus metas Institucionales.</p>	<p>Se explicará la normativa vigente en el Perú que regula la responsabilidad social empresarial y los tipos de responsabilidad social empresarial apuntando a la descripción de la responsabilidad social pública y su enfoque ético-estratégico que sería aplicable al Servicio de Gestión Ambiental (SEGAT).</p> <p>Aportes teóricos de la doctrina sobre la naturaleza y función que cumple la Responsabilidad Social Pública ; así como los criterios que debe orientar a la sostenibilidad ambiental del modelo ético-estratégico de responsabilidad social pública para la tutela del derecho a un medio ambiente sano.</p>	DIMENSION JURIDICA	<p>EXPLICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MODELO ESTRATÉGICO DE RESPONSABILIDAD PÚBLICA APLICADO EN EL SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL.</p> <p>COMPARACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE LOS AÑOS 2017-2018 DEL SEGAT CON SU REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Y SU RESPECTIVO ESTATUTO DE CREACIÓN INSTITUCIONAL.</p> <p>IDENTIFICAR Y ANALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE IMPACTO AMBIENTAL UTILIZADOS HASTA AHORA POR EL SEGAT PARA EL PLANTEAMIENTO DE METAS Y ESTRATEGIAS OPERATIVAS.</p> <p>IDENTIFICAR Y ANALIZAR LA INTERVENCION DE LAS GERENCIAS ENCARGADAS SEGÚN SU REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES .</p> <p>IDENTIFICAR Y ANALIZAR LOS CRITERIOS TOMADOS EN LAS SENTENCIAS RECAÍDAS EN LOS EXP. N.º 00316-2011-PA/TC Y EXP.Nº 03343-2007 EMITIDOS POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PA/TC.</p> <p>ANALIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL</p> <p>ANALIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SINAPLAN, CEPLAN, PIGARS Y PLANEFA.</p>	NOMINAL
			DIMENSION DOCTRINARIA	<p>-NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS APORTES DOCTRINARIOS CON RESPECTO AL MODELO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA .</p> <p>- REVISAR LOS LINEAMIENTO DEL D.S. 0540-2018-PCM.</p>	NOMINAL
			DIMENSION SOCIAL	<p>-NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL MODELO ÉTICO-ESTRATÉGICO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA Y SU INCIDENCIA EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ENCARGADOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL.</p> <p>-IDENTIFICAR Y ANALIZAR LAS VENTAJAS QUE TIENE EL MODELO ÉTICO-ESTRATÉGICO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA APLICADO AL SEGAT.</p>	NOMINAL

V.D. DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO	Es un derecho fundamental, que refiere al atributo subjetivo del ser humano de 'gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 'de la vida de la persona que se encuentra dentro del conjunto de bases naturales de la vida y su calidad, lo que comprende, a su vez, sus componentes bióticos, como la flora y la fauna; los componentes abióticos, como el agua, el aire o el sub suelo; los ecosistemas e, incluso, la ecósfera, esto es, la suma de todos los ecosistemas, que son las comunidades de especies que forman una red de interacciones de orden biológico, físico y químico. A todo ello, habría que sumar los elementos sociales y culturales aportantes del grupo humano que lo habite.Chanamè, R. (2009).	Se analizaron los artículos 2 Inc.22, 67,68, 69,70 y 73 de la Constitución Política del Perú. Así como la Ley General del Ambiente en el artículo I y IV del Título Preliminar establece con acierto la irrenunciabilidad del derecho a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de su vida.	DIMENSI ON JURIDICA	--IDENTIFICAR Y ANALIZAR LOS ALCANCES DEL DERECHO EN LA LEGISLACION AMBIENTAL VIGENTE. - EXPLICACION DE LA NATURALEZA JURIDICA QUE OBEDECE EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO PERUANO.	NOMINAL
			DIMENSI ON DOCTRINARIA	-NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS ASPECTOS DOCTRINARIOS CON RESPECTO AL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO.	NOMINAL
			DIMENSI ON JURISDICCIONAL	-ANALIZAR EL DESARROLLO Y ALCANCES JURIDICOS EMITIDOS POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CON RESPECTO AL ACCESO A UN DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO.	NOMINAL

B. PLAN DE CONSISTENCIA

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	METODOLOGÍA	VARIABLES	INDICADORES	FUENTES	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
¿COMO LA INCORPORACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA APLICADA EN EL SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO MEJORA LA PROTECCIÓN AL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO?	<p>GENERAL. ANALIZAR QUE LA INCORPORACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA APLICADA EN EL SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO MEJORA LA PROTECCIÓN AL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO.</p> <p>ESPECÍFICOS Determinar si los criterios constitucionales y doctrinales de la sostenibilidad ambiental motivan la aplicación del modelo de responsabilidad social pública en el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo -Analizar si los instrumentos estratégicos ambientales como el SINAPLAN, CEPLAN, SEIA y PIGARS posibilitan la aplicación de la responsabilidad social pública en el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo. -Analizar las bases constitucionales que tutelan el derecho a un medio ambiente sano y el rol proteccionista del Estado para la salvaguarda del interés público mediante una gestión ambiental municipal.</p>	<p>LA INCORPORACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA APLICADA EN EL SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO MEJORA LA PROTECCIÓN AL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO DEBIDO A QUE PERMITE APLICAR DE MANERA CORRECTA LOS INSTRUMENTOS AMBIENTALES COMO EL SINAPLAN, SEIA, PIGARS Y EL CEPLAN PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL CONLLEVANDO AL CUMPLIMIENTO EFICIENTE DE LAS METAS AMBIENTALES PROYECTADAS.</p>	<p>DISEÑO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA Investigación Jurídico-Formal NIVEL DE INVESTIGACIÓN BÁSICA- CUALITATIVA Puesto que se analizó el aspecto doctrinal, legal y jurisprudencial de la responsabilidad social empresarial enmarcada en las nuevas formas de responsabilidad que debe adoptar nuestro ordenamiento jurídico ambiental peruano DE ACUERDO AL TIPO DE ESTUDIO Es aplicada, puesto que lo que se buscó es resolver una problemática, surgida por los daños ambientales ocasionados a la calidad atmosférica de nuestra ciudad de Trujillo a raíz de que el Servicio de Gestión Ambiental inaplica los instrumentos de gestión ambiental elementales para la protección del medio ambiente.</p>	<p>VARIABLE INDEPENDIENTE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA EN EL SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO VARIABLES DEPENDIENTES -DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO</p>	<p>PARA LA VARIABLE INDEPENDIENTE -EXPLICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MODELO ESTRATÉGICO DE RESPONSABILIDAD PÚBLICA APLICADO EN EL SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL. -IDENTIFICAR Y ANALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE IMPACTO AMBIENTAL UTILIZADOS HASTA AHORA POR EL SEGAT PARA EL PLANTEAMIENTO DE METAS Y ESTRATEGIAS OPERATIVAS -IDENTIFICAR Y ANALIZAR LOS CRITERIOS TOMADOS EN LAS SENTENCIAS RECAÍDAS EN LOS EXP. N.º 00316-2011-PA/TC Y EXP.Nº 03343-2007 EMITIDOS POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PA/TC. PARA LAS VARIABLES DEPENDIENTES -ANALIZAR LA LEGISLACION AMBIENTAL VIGENTE, LOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL EN LA ATRIBUCIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS -IDENTIFICAR Y ANALIZAR LOS ALCANCES DEL DERECHO EN LA LEGISLACION AMBIENTAL VIGENTE. - EXPLICACION DE LA NATURALEZA JURIDICA QUE OBEDECE EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO PERUANO.</p>	<p>DOCENTES ESPECIALIZADOS EN LA MATERIA</p> <p>TEXTOS ESPECIALIZADOS</p> <p>PRONUNCIAMIENTOS NACIONALES EMITIDOS POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECAÍDOS EN LOS EXPEDIENTES: EXP. N.º 00316-2011-PA/TC, EXP.Nº 03343-2007-PA/TC.</p>	<p>MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS -METODO DESCRIPTIVO Y ANALÍTICO. A.TÉCNICAS -ENTREVISTA: Se trabajará en el presente trabajo de investigación con especialistas en derecho ambiental, personal de administrativo y gerencial encargado de dirigir el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo y fiscales titulares especializados en materia ambiental del Ministerio Público de La Libertad; para recopilar diferentes opiniones técnicas y profesionales que validen mi investigación. -ANÁLISIS DOCUMENTAL Se tomará como análisis jurisprudencias nacionales y pronunciamiento de corte extranjera en base a expedientes afines con el propósito que tiene el presente trabajo de investigación. B.INSTRUMENTOS -GUIA DE ENTREVISTA Se realizó a 02 especialistas en derecho ambiental, 06 responsables de las gerencias administrativas incluyendo Gerencia General encargadas de la dirección en sus diversas dimensiones del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo y 02 fiscales titulares provinciales y adjuntos especializados en materia ambiental del Ministerio Público de La Libertad. -FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL Sobre pronunciamientos nacionales emitidos por el Tribunal Constitucional recaídos en los expedientes: EXP. N.º 00316-2011-PA/TC, EXP.Nº 03343-2007-PA/TC.</p>

C. ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS ENCARGADOS DE LAS GERENCIAS DEL SEGAT

GERENCIA GENERAL

DR.

1. CONSIDERA USTED, QUE ¿LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA COMO UN INSTRUMENTO NECESARIO EN LA ACTUALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTRATÉGICAS Y/O OPERACIONALES DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO? SI O NO , ¿PORQUÉ?

2. CONSIDERA QUE, ¿LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN INSTRUMENTO VITAL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y UNA FORMA EFICIENTE PARA REDUCIR EL DAÑO AMBIENTAL EXISTENTE? SI O NO, ¿Por qué?

3. CONSIDERA QUE, ¿LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA APLICADO DESDE UN ENFOQUE ÉTICO-ESTRATEGICO PROMUEVE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y LA TUTELA DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO? SI O NO, ¿Por qué?

4. ¿QUÉ ESTRATEGIAS HA TOMADO EL SEGAT DENTRO DE SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS PERIODOS 2017-2018?

5. ¿QUÉ INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL APLICA EL SEGAT EN LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL? Y ¿QUE RESULTADOS SE HAN OBTENIDO DE SU APLICACIÓN?

6. ¿COMO MIDEN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS COMO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO?

7. ¿CONSIDERAN AL PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL COMO UN ELEMENTO ESENCIAL PARA PODER ASUMIR NUEVOS COMPROMISOS Y METAS A NIVEL SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL? SI O NO, ¿Por qué?

OFICINA DE ASUNTOS LEGALES

DR.

1. ¿CONSIDERA USTED, A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA COMO UN INSTRUMENTO NECESARIO EN LA ACTUALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTRATÉGICAS Y/O OPERACIONALES DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO? SI O NO, ¿Por qué?

2. ¿CONSIDERA QUE, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN INSTRUMENTO VITAL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y UNA FORMA EFICIENTE PARA REDUCIR EL DAÑO AMBIENTAL EXISTENTE? SI O NO, ¿Por qué?

3. ¿QUÉ ESTRATEGIAS HA TOMADO EL SEGAT DENTRO DE SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS PERIODOS 2017-2018?

4. EN SU CALIDAD DE ASESOR LEGAL DEL SEGAT, ¿QUE DISPOSITIVOS E INSTRUMENTOS LEGALES UTILIZA PARA DETERMINAR, EJECUTAR Y CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA INSTITUCIÓN?

5. ¿EL PLAN DE ACCIÓN QUE ELABORA EL SEGAT ES DE CARÁCTER MENSUAL O ANUAL? ¿DICHOS PLAN DE ACCIÓN Y ESTRATÉGICO DESARROLLA LAS DIMENSIONES SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL?; DE SER EL CASO, ¿COMO SE PROYECTAN EN SUS OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE METAS?

6. ¿QUE ACCIONES HA TOMANDO EL SEGAT EN LOS PERIODOS 2017 Y 2018 PARA MONITOREAR Y EVALUAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL VIGENTE?

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

DR.

1. ¿CONSIDERA USTED, A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA COMO UN INSTRUMENTO NECESARIO EN LA ACTUALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTRATÉGICAS Y/O OPERACIONALES DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO? SI O NO, ¿Por qué?

2. ¿CONSIDERA QUE, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN INSTRUMENTO VITAL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y UNA FORMA EFICIENTE PARA REDUCIR EL DAÑO AMBIENTAL EXISTENTE? SI O NO, ¿Por qué?

3. ¿CONSIDERA QUE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA APLICADO DESDE UN ENFOQUE ÉTICO-ESTRATEGICO PROMUEVE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y LA TUTELA DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO? SI O NO, ¿Por qué?

4. ¿QUÉ ESTRATEGIAS HA TOMADO EL SEGAT DENTRO DE SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS PERIODOS 2017-2018?

5. ¿CONSIDERAN AL PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL COMO UN ELEMENTO ESENCIAL PARA PODER ASUMIR NUEVOS COMPROMISOS Y METAS A NIVEL SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL? SI O NO, ¿Por qué?

6. ¿QUE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS HA ESTABLECIDO SU DEPENDENCIA PARA LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LAS NORMAS Y/O DISPOSICIONES AMBIENTALES MUNICIPALES ASÍ COMO PARA SU EFECTIVO CUMPLIMIENTO?

SUB GERENCIA DE CALIDAD AMBIENTAL Y PROYECTOS

DR.

1. ¿CONSIDERA USTED, A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA COMO UN INSTRUMENTO NECESARIO EN LA ACTUALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTRATÉGICAS Y/O OPERACIONALES DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO? SI O NO, ¿Por qué?

2. ¿CONSIDERA QUE, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN INSTRUMENTO VITAL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y UNA FORMA EFICIENTE PARA REDUCIR EL DAÑO AMBIENTAL EXISTENTE? SI O NO, ¿Por qué?

3. ¿CONSIDERA QUE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA APLICADO DESDE UN ENFOQUE ÉTICO-ESTRATEGICO PROMUEVE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y LA TUTELA DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO? SI O NO, ¿Por qué?

4. ¿QUÉ ESTRATEGIAS HA TOMADO EL SEGAT DENTRO DE SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS PERIODOS 2017-2018?

5. ¿QUE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROMUEVE Y APLICA LA GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL?

6. ¿CON QUE FRECUENCIA SE ELABORAN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL QUE INVOLUCRAN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS?

7. ¿QUÉ INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL APLICA EL SEGAT EN LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL? Y ¿QUE RESULTADOS SE HAN OBTENIDO DE SU APLICACIÓN?

8. ¿QUE CRITERIOS Y ELEMENTOS TOMA EL SEGAT PARA ELABORAR SU PLAN OPERATIVO Y DE ACCIÓN?

SUB GERENCIA DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO FINAL

DR.

1. ¿CONSIDERA USTED, A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA COMO UN INSTRUMENTO NECESARIO EN LA ACTUALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTRATÉGICAS Y/O OPERACIONALES DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO? SI O NO, ¿Por qué?

2. ¿CONSIDERA QUE, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN INSTRUMENTO VITAL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y UNA FORMA EFICIENTE PARA REDUCIR EL DAÑO AMBIENTAL EXISTENTE? SI O NO, ¿Por qué?

3. ¿CONSIDERA QUE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA APLICADO DESDE UN ENFOQUE ÉTICO-ESTRATEGICO PROMUEVE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y LA TUTELA DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO? SI O NO, ¿Por qué?

4. ¿QUÉ ESTRATEGIAS HA TOMADO EL SEGAT DENTRO DE SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS PERIODOS 2017-2018?

5. ¿CUAL ES EL TRATAMIENTO Y TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE TRUJILLO? Y ¿QUE CRITERIOS TOMA EL SEGAT PARA DETERMINAR UN AREA COMO DE MAYOR RIESGO?

6. ¿QUE POLÍTICAS RETRIBUTIVAS DEL DAÑO AMBIENTAL EJERCE EL SEGAT PARA ELIMINAR LA INCINERACIÓN NO CONTROLADA DE RESIDUOS Y PROPICIAR SU REEMPLAZO POR OTROS MÉTODOS DE BAJO IMPACTO SOBRE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA?

7. ¿ QUE ACCIONES HA REALIZADO EL SEGAT ANTE EL PROBLEMA AMBIENTAL DEL BOTADERO MUNICIPAL UBICADO EN EL MILAGRO?

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

DR.

1. CONSIDERA USTED, QUE ¿LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA COMO UN INSTRUMENTO NECESARIO EN LA ACTUALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTRATÉGICAS Y/O OPERACIONALES DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO? SI O NO , ¿PORQUÉ?

2. CONSIDERA QUE, ¿LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN INSTRUMENTO VITAL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y UNA FORMA EFICIENTE PARA REDUCIR EL DAÑO AMBIENTAL EXISTENTE? SI O NO, ¿Por qué?

3. CONSIDERA QUE, ¿LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA APLICADO DESDE UN ENFOQUE ÉTICO-ESTRATEGICO PROMUEVE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y LA TUTELA DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO? SI O NO, ¿Por qué?

4. ¿QUÉ ESTRATEGIAS HA TOMADO EL SEGAT DENTRO DE SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS PERIODOS 2017-2018?

5. ¿QUÉ INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL APLICA EL SEGAT EN LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE SU PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL? Y ¿QUE RESULTADOS SE HAN OBTENIDO DE SU APLICACIÓN?

6. ¿COMO MIDEN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS COMO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO?

7. ¿CONSIDERAN AL PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL COMO UN ELEMENTO ESENCIAL PARA PODER ASUMIR NUEVOS COMPROMISOS Y METAS A NIVEL SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL? SI O NO, ¿Por qué?

D. ENTREVISTA A ESPECIALISTAS EN MATERIA AMBIENTAL

DR. _____

1. ¿CONSIDERA USTED, ¿QUE EL SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO ESTÁ CUMPLIENDO CON SU NATURALEZA DE CREACIÓN OTORGANDO UNA CALIDAD DE VIDA DIGNA A LOS CIUDADANOS DE TRUJILLO?, FUNDAMENTE SU RESPUESTA

2. CONSIDERA USTED, ¿QUE SERÍA VIABLE LA APLICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA CON ENFOQUE ÉTICO-ESTRATEGICO EN EL SEGAT PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS INSTITUCIONALES IMPONIENDO LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL COMO EJE RECTOR Y LA CONSECUENTE TUTELA DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO? FUNDAMENTE SU RESPUESTA

3. CONSIDERA USTED, ¿QUE LA APLICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA EN UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO COMO EL SEGAT CON UN ENFOQUE ÉTICO- ESTRATÉGICO ES COMPATIBLE EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO AMBIENTAL? FUNDAMENTE SU RESPUESTA.

4. CONSIDERA USTED, ¿QUE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA ES UN MECANISMO RETRIBUTIVO DEL DAÑO AMBIENTAL CAPAZ DE GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO EN GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL COMO LO ES EL SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO? FUNDAMENTE SU RESPUESTA.

5. CONSIDERA USTED, ¿QUE LOS LINEAMIENTOS SOBRE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y PROTECCIÓN A LA CALIDAD ATMOSFÉRICA QUE INCORPORA POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE SON DEBIDAMENTE RECOGIDOS POR EL SEGAT PARA EL PLANTEAMIENTO DE SUS METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES?. ASÍ MISMO ¿RESULTAN COMPATIBLES LAS METAS Y OBJETIVOS IMPUESTOS POR EL SEGAT CON LA REALIDAD AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE TRUJILLO?
